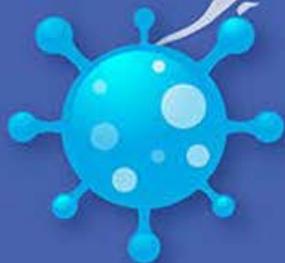
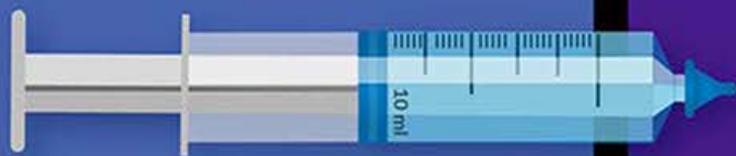


978|980|439|072|2



# AMÉRICA LATINA



*Fake News*, poder político  
y desinformación  
en tiempos de COVID-19

Andrés Cañizález, Mariela Torrealba  
León Hernández | COORDINADORES



abediciones  
colección  
**LETRAVIVA**

Observatorio  
Venezolano de



**Medianálisis**

COMUNICACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

*Colección LETRAVIVA*





# AMÉRICA LATINA

*FAKE NEWS*, PODER POLÍTICO Y  
DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19

MARIELA TORREALBA | LEÓN HERNÁNDEZ | ANDRÉS CAÑIZÁLEZ  
(COORDINADORES)



*AMÉRICA LATINA:*

*Fake News, poder político y desinformación en tiempos de COVID-19*

Andrés Cañizález, Mariela Torrealba y León Hernández (Coordinadores)

Universidad Católica Andrés Bello

Montalbán. Caracas (1020). Apartado 20.332

Diseño y producción: abediciones

Diagramación: Isabel Valdivieso

Diseño de portada: Verónica Judith Alonso Suárez

Corrección: Andrés Ramos

© Universidad Católica Andrés Bello

Primera edición 2022

Hecho el Depósito de Ley

Publicaciones UCAB

Depósito Legal: DC2022001197

ISBN: 978-980-439-072-2

Impreso en Venezuela

*Printed in Venezuela*

Por: Gráficas LAUKI, C. A.

Reservados todos los derechos.

No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.–, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

# Contenido



FAKE NEWS, PODER POLÍTICO Y DESINFORMACIÓN  
EN TIEMPOS DE COVID-19

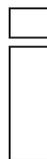
	INTRODUCCIÓN	
	FAKE NEWS, BULOS Y NARRATIVAS DIVISIVAS VS. UN FUTURO SIN LLEGAR	
	Mariela Torrealba.....	7
1.	<i>FAKE NEWS</i> EN MÉXICO: DEL OFICIALISMO A LA POSVERDAD	
	Salvador De-León-Vázquez .....	11
2.	DESINFORMACIÓN EN BRASIL: TEMAS, PERSONAJES Y DINÁMICAS COMUNICACIONALES	
	Ulisses Matheus Braga de Freitas Melo, Bruno Rafael Gueiros Barboza, Martin Erbes y Juliano Domingues .....	41
3.	DESINFORMACIÓN OFICIAL Y VACUNAS COVID-19 EN ARGENTINA	
	Adriana Amado y Nicolás Rotelli.....	65
4.	EN NICARAGUA ORTEGA IMPONE LA DESINFORMACIÓN	
	Lourdes Arróliga .....	101
5.	DESINFORMAR PARA GOBERNAR: EL CASO SALVADOREÑO	
	Karla Ramos y Claudia Rivera .....	127
6.	VENEZUELA: TIERRA DE MENTIRAS, CENSURA Y VIRALIZACIONES EN INCERTIDUMBRE INFORMATIVA	
	León Hernández .....	151
	LOS AUTORES .....	177



# Introducción

## ***Fake News*, Bulos y Narrativas Divisivas vs. un Futuro sin Llegar**

MARIELA TORREALBA



En el marco de los procesos de desinformación, las *fake news* o, en español, los bulos, son un fenómeno de amplia repercusión en la sociedad contemporánea que afecta nuestro ejercicio ciudadano y nuestras propias condiciones de vida. La expansión, agilización y viralización de este fenómeno nos lleva a preguntarnos: ¿es posible conocer la verdad en el universo informativo cuyo consumo en 2021, según Mónica Mena, fue de 79 zetabytes y que se proyecta para el 2025 en 180 zetabytes? Y sobre todo ¿Contamos como audiencias y como ciudadanos con elementos de protección y comprensión frente a la amenaza que representa la desinformación como producto de las *fake news*?

Son diversas las iniciativas ciudadanas y los emprendimientos periodísticos en la región latinoamericana para enfrentar la desinformación y los bulos. En 2019 la Asociación Civil Medianálisis en Venezuela creó el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) con los propósitos de alertar sobre los bulos y contribuir con la comprensión de este fenómeno. En cumplimiento de este cometido, presentamos este tercer libro, *América Latina: Fake News, Poder Político y Desinformación en Tiempos de COVID-19*, que aborda la situación en la región. Analistas de Argentina, Brasil, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela caracterizan los temas, los personajes y el impacto de los bulos en sus respectivos países. Dos temas en muchos casos entrelazados, son comunes a estos textos que nos refieren realidades diferentes. Por un lado, destacan como las figuras presidenciales han utilizado la desinformación y los bulos como herramientas de comunicación pública directa. En dicha estrategia han intentado prescindir, o prescindido, del cuestionamiento ciudadano y periodístico. Peor, en varios casos, han descalificado como bulos y esta actividad se potenció durante la gestión de la pandemia con uso de información pseudocientífica o anticientífica, de carácter emotivo y triunfalista, de escasa transparencia, que permitió legitimar decisiones oficiales.

El presidencialismo, o mejor, el hiperpresidencialismo latinoamericano, se evidencia en el manejo directo de la información y de la desinformación. En

“*Fake News* en México: del Oficialismo a la Posverdad”, Salvador De-León-Vázquez explica que en México la falsedad de la información tiene una larga historia, pues los ejecutivos desde el S. XX han ejercido control de la información pública de diversas formas llegando en la actualidad, en el marco de la expansión y diversificación de la conversación mediática a un contexto de la posverdad política y sanitaria. Coincidiendo con el análisis realizado en “Desinformar para Gobernar: El Caso Salvadoreño”, Karla Ramos y Claudia Rivera abordan el uso de la desinformación por parte del mandatario salvadoreño Nayib Bukele durante la campaña electoral y a lo largo de su ejercicio presidencial, en particular durante la emergencia por la COVID-19. Explican cómo, en el caso de la pandemia, Bukele con frecuencia recurrió a informaciones no verificadas (posteriormente confirmadas por el periodismo salvadoreño como falsas), pseudocientíficas o anticientíficas, recurrió a tonos triunfalistas y patrióticos y justificó la toma de decisiones con escasa transparencia.

El mandatario *millennial* centroamericano coincide con el presidente no tan *millennial* mexicano en el uso de la desinformación y los bulos en la pandemia. Sin embargo, el presidente mexicano, como el nicaragüense y el brasileño, descalifica la pandemia, niega su gravedad e importancia, culpabiliza a los pacientes e incluso convoca a manifestaciones masivas contraviniendo las más elementales medidas de bioseguridad y protección.

Los analistas e investigadores brasileiros dan cuenta de cómo Bolsonaro también encontró en la pandemia espacios para propagar la desinformación, hacerse eco de informaciones pseudocientíficas e incluso anticientíficas. Lo que debía ser una información pública sobre salud debatida y explicada a la sociedad se limitó a propaganda que además tuvo eco en la sociedad y en los medios. A lo largo de “Desinformación en Brasil: Temas, Personajes y Dinámicas Comunicacionales”, Freitas Medo, Gueiros, Domingues y Erbes explican además cómo la catalogación sistemática de las noticias falsas en Brasil se vincula con conversaciones virtuales partidistas asociadas a algoritmos y al uso de milicias partidistas en redes sociales, en particular vinculadas con eventos electorales, ejercicio del poder ejecutivo y enjuiciamientos a un expresidente y a una presidenta en ejercicio. Estas informaciones falsas con contenido partidista fueron divisivas y los estudios que presentan destacan como refuerzan las posiciones y creencias previas.

De-León-Vázquez, analiza el uso por parte de López Obrador de la información directa, sin preguntas y en el cual se descalifica como bulos todo aquello que le afecte o afecte a su gestión. En la misma línea, los argentinos Adriana Amado y Nicolás Rotelli narran cómo la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Argentina es un ejemplo de la desinformación puesta al servicio de la campaña sanitaria oficial, utilizándola como elemento de legitimación de las decisiones oficiales. La escasa transparencia de los datos, el énfasis en la propaganda y la falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones marcaron la desinformación gubernamental. En “Desinformación Oficial y Vacunas COVID-19 en Argentina”, los investigadores que el gobierno insistió en tonos triunfalistas y exaltaciones patrióticas, así como en versiones sin respaldo de datos o de información científica, pero que resultaban funcionales para hacer anuncios unilaterales, sin lugar a preguntas o cuestionamiento por parte de la ciudadanía.

Las variables políticas y partidistas tienen su impacto en los bulos y la desinformación que ocurre tanto en Brasil como en México, así como en el resto de países analizados; pero alcanzan niveles de paroxismo en el caso nicaragüense. El capítulo de Lourdes Arróliga, periodista actualmente exiliada, “En Nicaragua Ortega Impone la Desinformación”, analiza cómo el gobierno sandinista impuso una estrategia de información “descontaminada” que pasa por la fabricación sistemática de producción de información falsa directa en la que pueblo y el presidente se presentan como uno. Asimismo, expone la estigmatización y persecución del periodismo independiente y la generación de un cuerpo normativo persecutorio y violatorio de los derechos humanos e informativos. El discurso oficial, plagado de desinformación, tuvo un momento clave en el marco de la pandemia en el que el gobierno tejió un hilo narrativo. Esto minimizaba y ocultaba el impacto de la misma culpabilizando a los pacientes y promoviendo medidas contrarias a las de bioseguridad.

Sin embargo, conviene destacar que pese al panorama de bulos y desinformación que campea en la región, en muchos casos de la mano de los presidentes, se cuentan diversas iniciativas y emprendimientos ciudadanos y periodísticos que permiten desarrollar y sumar elementos de protección y comprensión frente a la amenaza representada por la desinformación como producto de las *fake news*. Destacan las iniciativas ciudadanas mexicanas frente a los casos

de Ayotzinapa o en el caso del terremoto de 2017, el ejercicio de periodismo de verificación realizado por el periodismo salvadoreño, la resistencia del periodismo nicaragüense, o la creación ciudadana de información pública independiente sobre la pandemia en Argentina. Sin embargo, destaca sobre todo el esfuerzo realizado por el OVFN que pone a disposición de la ciudadanía su base de datos de bulos a través de un *dashboard* en su web y en una app, como explica León Hernández en “Venezuela: Tierra de Mentiras, Censura y Viralizaciones en Incertidumbre Informativa”. El investigador venezolano analiza las tendencias, temáticas y actores de las *fake news* en el país que dejan al ciudadano desorientado, trasciende el estudio de casos y considera las tendencias de los bulos. Explica Hernández que el país tuvo casos de manipulación informativa desde el S. XIX asociado con los procesos políticos independentistas. El investigador indica que, al cercenamiento del sistema mediático en el país, se suman aparatos de propaganda, mordazas estructuradas y laboratorios de bulos en el país configurando lo que califica de ‘fakecracia’, que deja a la ciudadanía a ciegas y, añadiríamos, encandilada.

Este tercer libro de Medianálisis y del OVFN se suma a *Las Fake News en Venezuela: la Mentira en la Censura*, editado en 2020, y a *Desmontando la Mentira: Dos Años bajo la Lupa del OVFN* editado en 2021. La primera de ambas obras cuenta con nueve capítulos escritos por once autores del periodismo y la comunicación en el país, quienes explican cómo las noticias falseadas han sido un arma del poder político. La segunda, editada en el marco del segundo aniversario del OVFN, está integrada por un ejercicio de aproximación teórica sobre los temas de la desinformación y un apartado práctico de comportamiento tipológico de contenidos dudosos y sus tendencias de viralización, de análisis de casos, documentos elaborados con funciones de manual y un listado, a modo de repositorio, de todas las publicaciones disponibles en el sitio web del observatorio.

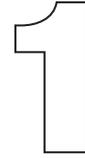
Con este tercer libro, *América Latina: Fake News, Poder Político y Desinformación en Tiempos de COVID-19*, el OVFN procura la comprensión del fenómeno de la desinformación y las *fake news* en la región. También pone de relieve las características específicas de cada uno de los países en el manejo que desde el poder y, en particular, en el marco de la pandemia se dio a la desinformación, a la información falsa y a la información falseada. La información directa de alguno de los presidentes hacia la población,

que prescinde de cuestionamientos ciudadanos y periodísticos, se ha impuesto en la mayor parte de los países, el uso y abuso de informaciones pseudocientíficas, anticientíficas para legitimar la toma de decisiones es otra de las constantes, como lo es la opacidad en la presentación de datos y rendición de cuentas. La desinformación y los bulos se alimentan de la emocionalidad. La comunicación política y la comunicación pública en los casos latinoamericanos analizados muestran el impacto de la desinformación en la región, del uso de las *fake news* o bulos y de la construcción divisiva de narrativas que menoscaban un futuro para el continente que parece no llegar.



# FAKE NEWS EN MÉXICO: DEL OFICIALISMO A LA POSVERDAD

SALVADOR DE-LEÓN-VÁZQUEZ



## Resumen

*En México, la falsedad de la información periodística tiene una larga historia. Comienza en la década de 1930 con la sujeción gubernamental de la prensa a través del control de los insumos para garantizar una representación propagandística de la realidad (oficialismo); transita hacia la calumnia de la oposición y los enemigos políticos en los setenta (guerra sucia), para desembocar en la sofisticación de las relaciones públicas en los inicios del S. XXI. En la actualidad, la ampliación de la conversación mediática por las innovaciones tecnológicas nos ha colocado en el contexto de la posverdad política y sanitaria.*

## 1. Introducción

En la segunda década del S. XXI, hemos incorporado al lenguaje del análisis periodístico términos como posverdad, noticias falsas (*fake news*) y verificación de datos o información (*fact checking*) para referirnos a fenómenos recientes que tienen como trasfondo el problema de la difusión intencional de información no veraz, con la particularidad de ser potenciada por las recientes innovaciones tecnológicas (Rodrigo-Alsina y Cerqueira, 2019).

Sin embargo, tanto en México como en el resto de América Latina, la publicación de productos periodísticos falsos – o falseados – tiene, en realidad, una larga data, la cual está relacionada con el control de las élites políticas sobre la representación de la realidad noticiosa. En este capítulo, se ofrece una caracterización actual de las *fake news* en México, pero tomando en cuenta ese pasado que presenta un marco de sentido para su comprensión contextualizada.

Una vez que la etapa bélica de la Revolución Mexicana concluyó y dio paso a la construcción del Estado mexicano moderno, se instituyeron una serie de prácticas que favorecieron ese control político de la prensa a través de estrategias de sujeción. Dice Fernández (1993) que dichas estrategias se consolidaron en la década de 1940 y fueron de dos tipos: la emisión de boletines de prensa y el control de los insumos para la producción de periódicos.

En primer lugar, los boletines de prensa, lejos de ser un mero recurso informativo del Estado, constituyeron una forma de orientar la interpretación periodística de los hechos. Las líneas editoriales que se alejaron de esa orientación sufrían las consecuencias de perder la subvención de la publicidad gubernamental. Esta condición ha sido conceptualizada bajo el término de oficialismo (Bohmann, 1994; Hallin, 2000).

El oficialismo consiste en la adecuación – incluso manipulación y falseamiento – en el discurso noticioso para evitar una representación desfavorable. Encontró su éxito en un débil mercado publicitario, sobre todo en las regiones del interior del país, que ocasionó que la subvención gubernamental deviniera en la principal forma de financiamiento de los medios informativos mexicanos.

Esta estructura de intervención sobre la prensa fue establecida por la extinta Dirección General de Información, en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), y se extendió hacia los estados (Fernández, 1993). Se puede afirmar que, “el uso de la política publicitaria con objeto de someter a los medios es una de las medidas más efectivas y duras del Estado mexicano para intervenir en el suministro de información” (Bohmann, 1994, p. 294).

Un aspecto que otorga pertinencia al análisis del oficialismo en el marco de las *fake news* es su función de disfrazar la propaganda gubernamental como noticias. Existe una gran cantidad de estudios al respecto, los cuales ubican dos momentos: el de la subordinación política de la prensa durante la segunda mitad del S. XX, y el del control sofisticado a través de los convenios comerciales de publicidad política a partir del S. XXI (Reyna, 2016).

Por otra parte, el control sobre los insumos para la producción de medios impresos funcionó gracias al monopolio estatal en la producción e importación de papel, vigente desde 1935 hasta 1990, lo que derivó en la dependencia del Estado para la publicación de periódicos y revistas durante gran parte del S. XX. Por su parte, la discrecionalidad en la asignación de frecuencias, hasta antes del 2013, fue la herramienta para el control de la radio y la televisión (Fernández, 1993).

Con estos mecanismos, la élite política mexicana se aseguró de mantener una alianza que le permitía el control sobre la opinión pública, mientras los empresarios de los medios se enriquecían con el reparto de la publicidad gubernamental. Parte

de esta estrategia pasaba también por los sobornos individuales a periodistas para asegurar su lealtad. Los sobornos a reporteros son conocidos coloquialmente como “chayotes” (Bohmann, 1994).

Como lo establece Hallin (2000, p. 99), el rasgo del oficialismo en México ocasionó que el periodismo resultara “pasivo y autocensurado, con la mayoría de la cobertura política basada en comunicados de prensa oficiales”. Aunque no se trata propiamente del fenómeno actual de las noticias falsas, el oficialismo sí representa un antecedente de la cultura periodística nacional que ha facilitado la naturalización de la presencia de contenidos no veraces en los medios noticiosos.

El representante por antonomasia del oficialismo fue Jacobo Zabludovsky, el periodista más influyente del país – aunque no necesariamente el más confiable –, presentador principal de los espacios noticiosos de Televisa durante cinco décadas, a quien González de Bustamante (2015) identifica como el productor de “lo presidencial”, pues a la par que periodista “trabajaba como” consejero para la oficina de prensa de la presidencia, difuminando la frontera entre las noticias oficiales y las de televisión” (p. 121).

Bajo ese marco, México arribó a las convulsas décadas de 1960 y 1970, en las que emergieron movimientos guerrilleros y sociales de cortes obrero, campesino, estudiantil y magisterial, al menos. De acuerdo con Mendoza (2011), el gobierno reprimió fuertemente estas expresiones con violencia fuera de los márgenes jurídicos como tortura, detenciones extrajudiciales, ejecuciones, desapariciones forzadas, entre otras; lo que se conoce con el apelativo de “guerra sucia”.

Uno de los momentos más recordados de la guerra sucia fue la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Después de varios meses de protestas en la Ciudad de México, y ante la cercanía de la celebración de los Juegos Olímpicos, el ejército fue desplegado para reprimir un mitin, lo que culminó en la matanza que dio fin al movimiento estudiantil. Los medios noticiosos no informaron nada, o lo hicieron tímidamente, ocultando la masacre misma, la responsabilidad del ejército y culpando a agentes del extranjero (González de Bustamante, 2015).

A juicio de González de Bustamante (2015, p. 184), la celebración de los Juegos Olímpicos en México “era una oportunidad para los funcionarios de gobierno

y los ejecutivos televisivos de mostrar el rostro moderno y económicamente exitoso del país a los televidentes de todo el mundo”, por lo que, aún con los terribles acontecimientos, la cobertura periodística fue censurada y maquillada para encubrir la protesta estudiantil y su represión.

Al llegar al S. XXI, un proceso transicional se hizo evidente en lo político, económico, social y comunicacional. En lo político, se desmoronó la dictadura partidista que se mantuvo en el país durante 70 años. En el año 2000, México experimentó por primera vez la alternancia política, cuando la oposición obtuvo la Presidencia de la República. Ese cambio se acompañó del fortalecimiento de la economía de mercado global, dejando atrás el modelo de sustitución de importaciones.

En lo comunicacional, el estilo de la subordinación política u oficialismo transitó al de los convenios comerciales de publicidad, pasando el centro de gravedad del autoritarismo puro y duro al dominio de las relaciones públicas profesionales. Aunado a ello, el desarrollo de las innovaciones tecnológicas abrió un campo de posibilidades para la difusión de la información, pero también de sus némesis: la desinformación y la diseminación de noticias falsas.

No obstante, es necesario reconocer que, a pesar la permanencia de un sector oficialista de la prensa mexicana, se ha desarrollado un sector de prensa crítica que interpela frontalmente al poder político. Inició con ciertos medios impresos que lograron acumular la suficiente fuerza para abrir espacios plurales de debate público, y fueron un factor para la modernización del periodismo en el país (Demers, 2000; Hughes, 2006; Trejo, 1996).

Hoy, las prácticas periodísticas están diversificadas en los procesos de convergencia. Coexisten los medios masivos tradicionales con los medios informativos digitales y las prácticas transversales de los periodistas individuales en diversas plataformas tecnológicas. Estas condiciones han complejizado no solo al periodismo en sí mismo, sino a las posibilidades de entender su ejercicio, su impacto y sus alcances.

Quizás sea por ese motivo que, a finales de la primera década del S. XXI, hubo un interés creciente en la sociedad civil – y particularmente en los espacios académicos – por fundar observatorios ciudadanos de medios. Se trata de una

tendencia que Ramonet (2004) identificó como el quinto poder, es decir, la vigilancia ciudadana de la prensa. La vigilancia de los vigilantes, porque también cometen abusos al constituir un poder fáctico (Herrera, 2006).

En la actualidad, la Red de Observatorios de Medios de Comunicación del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (ROM-CONEICC), concentra los esfuerzos de los observatorios académicos en México (Palau, 2017). En buena medida, los observatorios de medios son el antecedente de las actuales iniciativas de *fact checking* y, al parecer, ambas propuestas se nutren entre sí.

Si el aparato mediático hegemónico era difícil de vigilar, incluso para los observatorios universitarios que cuentan con el respaldo y la estructura institucional, la explosión que representa internet – con su ubicuidad y facilidad para el anonimato y la diseminación de información falsa – pone en riesgo del colapso cualquier esfuerzo por intentar la verificación de las noticias que se publican diariamente.

Ha sido necesaria la conformación de equipos multidisciplinarios en donde colaboran periodistas, académicos especializados en diversos temas, científicos de datos y las herramientas digitales necesarias para realizar análisis de grandes cantidades de información (*big data*) y su cribado a través de estrategias de minería y curaduría de datos. En ese contexto, nos encontramos ahora en todos los países del mundo.

Los procesos electorales contemporáneos en México, por ejemplo, se disputan tanto en el terreno físico (los barrios, las comunidades, las plazas), como en los medios interactivos. Las granjas de *bots* generadas por todos los partidos políticos, lo mismo para posicionar temas como para derrumbar tendencias opositoras en las plataformas digitales, o burlar los algoritmos, son una práctica común. Igual buscan encumbrar a su candidato como denostar al contrario a cualquier costo.

Un ejemplo de lo anterior corresponde a los *peña-bots*, nombre dado a las cuentas falsas de Twitter asociadas al apoyo de la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto, y posteriormente usadas para intentar dismantelar la protesta social en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (Galarza-Molina, 2019). De manera similar, la #RedAMLOVE fue la estrategia del actual

presidente Andrés Manuel López Obrador para movilizar los temas de discusión y sus atributos en las plataformas digitales (Signa-lab, 2019).

## 2. El estudio de las *fake news* en México

Recientemente, en México la desinformación y las noticias falsas han sido investigadas desde diversas perspectivas. La mayoría de esas investigaciones se enfocan a estudiar asuntos relacionados con tres grandes temas: los rumores, lo político y la salud. Es necesario señalar que estos temas suelen entrecruzarse, por lo que algunas veces no es tan nítido identificar a qué categoría corresponde cada abordaje.

Por otro lado, cuando se ha caracterizado el problema de las noticias falsas en México, existen otros aspectos que lo complementan, por ejemplo, la práctica del *fact checking*, el tipo de periodismo relacionado con su acotación o su diseminación, los efectos en la opinión pública o en las audiencias, su contexto sociocultural, entre otras cosas.

Tomando en cuenta lo anterior proponemos, a continuación, una revisión de las características de las *fake news* en México a partir de los estudios que se han realizado. Se trata de una exploración a través de trabajos académicos. Estas investigaciones permiten armar el rompecabezas – o al menos parte de él – que representa este fenómeno complejo, denso y multidimensional. La revisión está organizada en los tres ejes propuestos: las conversaciones sociales o rumores, el poder y la salud.

La búsqueda se realizó en las bases de datos de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc) y la Biblioteca Científica Electrónica en Línea (Scientific Electronic Library Online, SciELO). Los resultados generales fueron filtrados para identificar los estudios relacionados con la diseminación de noticias falsas. Sin embargo, es necesario reconocer que otros fenómenos informativos se cruzan, tales como la desinformación incidental, no intencional, o ‘subinformación’ (*misinformation*), las teorías de conspiración, los discursos de odio, la polarización, entre otros.

## 2.1 Conversaciones sociales y diseminación de falsos rumores

La primera categoría usada para nuestro análisis de la información falsa en México es demasiado amplia por su dispersión temática. Sin embargo, el vínculo que une a estas aproximaciones es el de aparecer como parte de las conversaciones sociales, algunas veces en forma de rumor, que después escalan hasta alcanzar su difusión mediática.

En ese sentido, encontramos el análisis de Cortázar (2012), quien estudia el rumor del tráfico de órganos humanos en México. Este autor identifica que la noticia comenzó en Centroamérica, cuando un funcionario hondureño se refirió al negocio de órganos como una de las causas de los secuestros, pero sin sustento en fuentes autorizadas. El rumor alcanzó notoriedad y se publicó, en diferentes momentos y con distintas narrativas, en noticieros de todo el mundo.

En México, el rumor fue diseminado por actores políticos, líderes religiosos y periodistas, quienes denunciaban la supuesta existencia de mafias dedicadas a lucrar con partes humanas en México. Identifica que, en todos los casos, las fuentes no son verificadas por los periodistas que las publican y concluye que se trata de una leyenda que escaló desde la imaginería popular hasta la visibilidad mediática (Cortázar, 2012).

La producción de nopal en China e inminente invasión masiva del mercado mexicano fue otra noticia falsa que se publicó en diarios de circulación nacional. Las autoridades municipales de Milpa Alta, Estado de México, una de las principales regiones de producción de la planta cactácea, difundieron y promovieron esa información. Incluso se tomaron medidas legales para impedirlo. Sin embargo, se trataba de un rumor sin fundamentos (Lutz y Padilla, 2012).

La noticia falsa del nopal chino se propagó debido, por un lado, a la percepción de la alta capacidad de la nación oriental para generar copias de productos originarios de cualquier parte del mundo y producirlos masivamente; por otro lado, según los autores, tenía sustento en una expresión de racismo y xenofobia en contra de los orientales. La noticia movilizó a científicos, periodistas y legisladores se pronunciaron en contra, y se generó una ley para la protección del nopal autóctono (Lutz y Padilla, 2012).

Podemos afirmar que el rumor del nopal chino fue una creación oportuna por parte de quienes integraron la dirección de Desarrollo Agropecuario de Milpa Alta durante dos trienios, explotando los temores de la ciudadanía y más particularmente las incertidumbres económicas de los nopalers milpaltenses. (Lutz y Padilla, 2012, p. 201)

Aunque no existen más trabajos al respecto, es posible reconocer en la conversación social la misma estructura narrativa, adaptada a diferentes productos culturales. En ese sentido, constantemente se denuncia, e incluso se publica, que ciudadanos chinos poseen el registro o la patente de imágenes cívicas o religiosas como la de la Virgen de Guadalupe (Romo, 2012).

En general, el miedo al otro, al desconocido, al extranjero, al diferente, es una fuente inagotable de rumores y noticias falsas. Si se coloca en un contexto como el mexicano, en el que la violencia extrema ha diluido gran parte de los vínculos sociales, se generan relatos del terror, con sus gramáticas del horror (Reguillo, 2013) y prácticas tan inimaginables que es difícil identificar dónde acaba la realidad y comienza la ficción.

Rossana Reguillo (2021) revisa la realidad colapsada en la que se encuentra México, país que se disloca entre el Estado fallido para enfrentar a la delincuencia organizada, y los brazos ejecutores del narco que han adoptado el modelo empresarial transnacional y extractivista que absorbe todo lo que puede, incluidas las vidas.

En este contexto, Cortázar (2008) usa el término de “leyendas urbanas” para hablar de historias centradas en la violencia, el daño intencional ocasionado a las personas comunes por pura maldad: agujas infectadas de SIDA, robo de riñones, calcomanías infantiles con droga, asesinos nocturnos, desapariciones en los vestidores de las tiendas, entre otras cosas. Algunas de estas historias de la cultura popular contemporánea pasan de boca en boca, circulan a través de aplicaciones digitales y, en ocasiones, llegan a los noticieros.

Hasta ahora se han presentado informaciones falsas que no corresponden al terreno de la posverdad, si aceptamos la reflexión de Rodrigo-Alsina y Cerqueira (2019) de que la posverdad, además de fincarse en las emociones y creencias, tiene

los componentes de obligar a creer en algo mediante el uso de las herramientas digitales.

Bajo esa óptica, el caso de la iniciativa denominada Verificado19S contiene todos los ingredientes para examinar la posverdad, las noticias falsas y las acciones ciudadanas para contrarrestarlas. El 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México conmemoraba un aniversario del sismo que 32 años atrás, en 1985, devastó la urbe, ocasionando miles de muertes y pérdidas materiales millonarias.

Quiso la naturaleza que la efeméride se volviera real, y la ciudad fue nuevamente sacudida por varios sismos de gran intensidad que ocasionaron derrumbes de edificaciones, pérdidas de vidas humanas y una severa crisis. Al igual que tres décadas antes, la ciudadanía se movilizó para apoyar las labores de rescate e, incluso, socorrer a otros. Twitter y otras plataformas digitales fueron utilizadas para la organización ciudadana; pero aparecieron cuentas falsas que difundieron información inexacta, generando gran confusión.

En medio del caos, la ciudadanía se organizó para generar espontáneamente una iniciativa de *fact checking*, Verificado19S, que contribuyó a identificar y desplazar la información falsa, para que la gente supiera cómo ayudar:

Verificado19S que fue creada tras el sismo ocurrido en México el 19 de septiembre de 2017 por la difusión de productos informativos falsos en redes sociales digitales como Facebook y Twitter que buscaban confundir a la población sobre las consecuencias de dicho desastre natural. (Pérez, 2020, p. 41)

La iniciativa Verificado19S fue, en medio de la tragedia, una herramienta eficaz que demostró el poder de la información para movilizar la participación ciudadana. Quedó patente que la información falsa puede tener graves consecuencias, incluso en pérdidas humanas. Además, también quedó de manifiesto lo importante de la verificación de datos y noticias en situaciones de crisis graves.

## 2.2 Fake news sobre lo político

Como se puede ver desde la introducción de este capítulo, las noticias falsas y la esfera política tienen una relación muy cercana: “en definitiva, las *fake news* relevantes siguen siendo patrimonio, aunque ya no exclusivo, de los poderes políticos

y comunicativos” (Rodrigo-Alsina y Cerqueira, 2019, p. 227). No es casual que la generación de noticias falsas frecuentemente vaya de la mano de procesos políticos de gran intensidad.

El personaje que colocó en la agenda mundial el tema de las *fake news* fue, precisamente, un actor político, Donald Trump, al enfrentarse a las cadenas noticiosas estadounidenses a través de su cuenta de Twitter (Becerra y Carlos, 2018), misma que convirtió en su garrote digital. Años antes, al ocupar la presidencia de México, Vicente Fox (2000-2006) también reclamaba a la prensa que presentara una realidad del país con la que él no estaba de acuerdo, insinuando que la prensa mexicana publicaba noticias falsas (Islas y Gutiérrez, 2002).

Así pues, es evidente que las *fake news* en el terreno de lo político, representan la extensión, en la cultura digital, de dos tendencias muy definidas en México. Por un lado, la acción propagandística de la estructura de las relaciones públicas gubernamentales que buscan manipular la información; por otro, la guerra del denuesto y el encubramiento, dependiendo si se trata del patrón o el enemigo de los *bots*, con información falseada, apelando a emociones como el miedo y utilizando a su favor los algoritmos.

Es contradictorio que el poder político se encienda ante la crítica periodística, porque, sin duda, la gran prensa industrial sigue representando el principal aparato propagandístico del gobierno, aunque también de las diversas fuerzas políticas. Como industria, las ganancias económicas rigen gran parte de la actividad periodística (Fishman, 1983). La clase gobernante, que tendría que hacer valer las leyes, desvía la mirada porque también se sirve esta condición.

La diversidad de expresiones del fenómeno en el terreno de lo político obliga a subdividir esta categoría en otras, en aras de presentar la discusión de manera ordenada. Por ello, se utilizan los siguientes incisos que corresponden a apartados en los que se agrupan diferentes reflexiones sobre la diseminación de noticias falsas, todas ellas bajo el común denominador de su ocurrencia en la esfera política.

a) *El modelo oficialista extendido hacia lo digital.*

Galarza-Molina (2014), la autora más prolífica en el tema de las *fake news* en México, analiza la publicidad política encubierta, una realidad que persiste a pesar

de la regulación existente. Mediante entrevistas cualitativas a expertos identifica las características de las nuevas relaciones contemporáneas entre prensa y gobierno posterior a la reforma electoral de 2007. La reforma estimuló la creación de espacios televisivos aparentemente noticiosos, pero que en realidad corresponden a publicidad política.

Para poner en contexto el estudio de Galarza-Molina, es necesario señalar que el Estado mexicano llevó a cabo una reforma de la legislación electoral después de las polémicas elecciones presidenciales del 2006, en las que Felipe Calderón fue declarado vencedor al aventajar apenas algunas décimas al candidato Andrés Manuel López Obrador, con 35.89 frente a 35.31 por ciento de la votación (Instituto Federal Electoral, 2006).

Un tema crucial de la reforma correspondió a la participación de los medios de comunicación, especialmente la televisión, en los procesos electorales. La reforma prohibió la contratación directa de espacios en los medios. A partir de entonces, el organismo electoral asigna los espacios mediáticos para los partidos políticos en campaña. Esos espacios corresponden a los tiempos oficiales que las empresas de radio y televisión deben otorgar gratuitamente al Estado.

La medida generó un gran malestar en los empresarios mediáticos que vieron mermadas las ganancias millonarias que obtenían en las campañas electorales. Optaron por invitar a los candidatos a espacios dentro de su programación, o hacer menciones de sus actos en las noticias, como si se tratara de coberturas periodísticas. En realidad, era promoción política cobrada como tal, obviamente ilegal: una manera de pasar por encima de la regulación.

La incidencia sobre la diseminación de información falsa es evidente, porque “conduce a una negociación velada entre televisoras y políticos para que su transmisión suceda de manera oculta”. Pero no solo eso, sino que no existe “claridad de la información que se presenta [lo que] puede resultar confuso para la audiencia/ electorado, pues no hay un reconocimiento patente de que la información ofrecida tiene un carácter publicitario” (Galarza-Molina, 2014, p. 53).

Por otro lado, habría que diferenciar las tácticas clientelares y propagandísticas practicadas por la prensa como industria, de la labor crítica y reflexiva de los periodistas de forma particular. Si bien el aparato corporativo es una condición

estructural que determina la labor cotidiana de los periodistas, no por eso dejan de observar y cuestionar la realidad en la que se encuentran insertos.

En ese sentido, otro estudio conducido por Galarza-Molina (2020c) recupera la percepción de los periodistas de la ciudad de Monterrey. A través de entrevistas en profundidad, tomando como categoría central los roles de los periodistas, se identifican los problemas que los informadores reconocen como desafíos para su práctica. En resumen, reconocen que la actividad periodística consiste en vigilar el entorno político; pero los arreglos clientelares de las élites política y mediática lo socavan.

Para nuestra discusión, se trata de un aspecto que cobra una gran relevancia, porque demuestra consistentemente que la desinformación, y la diseminación de noticias falsas – o, por lo menos, falseadas –, se gestan desde el interior de las relaciones entre prensa y poder político. Por lo tanto, no es extraño que las noticias falsas emanen de la gran prensa industrial, atrapada en los acuerdos publicitarios con la clase gobernante.

En México, existe una cantidad suficiente de trabajos que dan cuenta de esta actividad propagandística que ha colonizado el periodismo, en diferentes contextos regionales. Investigaciones como las de Cepeda (2017), De-León-Vázquez (2011), González (2018), Merchant (2018) y Meza y Enríquez (2018), solo por mencionar algunos, son estudios que dan cuenta de esas prácticas. En todos ellos, la producción periodística se muestra restringida por los acuerdos cupulares, la censura derivada de ellos, la violencia física y simbólica hacia los periodistas, entre otras cosas.

#### *b) El fact checking como práctica periodística*

Sin embargo, existen otras experiencias periodísticas que hacen frente a las determinaciones estructurales generadas por el aparato oficialista. Por ejemplo, la del periodismo colaborativo e independiente, que se practica en los medios noticiosos digitales, distintos a los medios tradicionales, los cuales han encontrado formas alternativas de financiamiento que les permite escapar de los arreglos propagandísticos.

Bajo esa perspectiva, y aportando a la reflexión sobre el combate a las *fake news*, existen hallazgos que vinculan el trabajo del periodismo colaborativo de

los medios independientes con la práctica de la verificación de información o *fact checking* para identificar y desmentir las noticias falsas (Pérez, 2020). Corresponde a un movimiento reformista profesional de los periodistas que interpelan al periodismo político convencional y poco democrático (Galarza-Molina, 2020a).

En México, una experiencia interesante de *fact checking* fue la que se integró para dar vida a Verificado 2018. La idea emanó de la experiencia de Verificado19S y fue articulada por el medio digital *Animal Político*. Su función fue la de verificar la información publicada relacionada con el proceso electoral para presidente de la República Mexicana llevado a cabo en el año 2018 (Galarza-Molina, 2020a, 2020b; Pérez, 2020).

Además de las noticias difundidas en los medios de comunicación, Verificado 2018 también se encargó de revisar las publicaciones en los medios interactivos, así como las afirmaciones realizadas por los candidatos en los debates televisados. Se conformó una red de aliados entre los que había medios de comunicación locales y nacionales, organizaciones ciudadanas, universidades y centros de investigación científica (Pérez, 2020).

Los aliados institucionales aportaron la experiencia de sus integrantes como periodistas, analistas sociales y políticos, ciudadanos comprometidos y científicos de datos (dateros). De esta manera, se podía identificar información sospechosa gracias a la experiencia de los periodistas y analistas, así como hacer análisis de *big data* por parte de los dateros para reportar anomalías en las tendencias de las redes e identificar *bots* mal intencionados (Pérez, 2020).

Galarza-Molina (2020a) y Pérez (2020) coinciden en apuntar que el antecedente directo de Verificado 2018 es la iniciativa de *fact checking* de El Sabueso, realizada por *Animal Político* y *AJ Plus*, de la cual también se tomó la metodología; pero es Galarza-Molina quien reconoce que esta práctica se enmarca en una tarea de reparación del campo del periodismo mexicano, aportando una acción que permite superar la publicación de declaraciones sin verificación previa.

No obstante, el esfuerzo de Verificado 2018 parece haber tenido poca resonancia en el público. Galarza-Molina (2020b) condujo un estudio en el que evaluó cualitativamente la percepción de las audiencias sobre esta iniciativa, usando para ello los comentarios realizados por los usuarios de Facebook. Encontró que el

contexto histórico de la subordinación de la prensa al poder político actuó como marco para desconfiar de la iniciativa.

Asimismo, el fenómeno de la polarización, que implica aceptar solamente la información coincidente con la propia postura política e ideológica, funcionó como elemento de rechazo a las revisiones de Verificado 2018. Aunque también se identificaron comentarios de aprobación y reconocimiento a su labor. En esos casos, explica la autora, se aprecia una sensibilización de los lectores sobre la utilidad del *fact checking*.

Como nota adicional, Buendía (2018) sugiere que las encuestas falsas (*fake polls*) son una fuente importante de noticias falsas en los procesos electorales mexicanos. Es sabido que los partidos políticos usan encuestas a modo para tratar de incidir sobre las preferencias de los votantes. Las encuestas falsas generan desinformación; pero son lo común, dice el autor, por lo que representan un reto a superar para las elecciones mexicanas.

Para Valenzuela *et al* (2022), el problema de la desinformación en los procesos electorales radica menos en los medios de comunicación tradicionales que en los medios interactivos. Su estudio revela que los votantes otorgan mayor credibilidad y confianza a la información proveniente de esas plataformas. Su conclusión es que es mejor encaminar los esfuerzos para incidir sobre los espacios digitales que sobre los medios de comunicación.

c) *Las propuestas normativas para atajar a las fake news.*

La diseminación de noticias falsas se ha convertido en una preocupación fehaciente por las consecuencias que trae consigo, tales como la imposibilidad de fundamentar decisiones vitales en información confiable. De ahí que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se incorpore a la discusión mediante la elaboración de un reporte detallado sobre el fenómeno de las *fake news* y su impacto en la libertad de expresión (Corzo *et al.*, 2019).

Uno de los aspectos relevantes del documento expedido por la CNDH es que, además de plantear una discusión conceptual sobre las *fake news* desde la teoría sociológica y los documentos de la gobernanza internacional, recupera una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las noticias falsas.

Si bien, reconoce que el posicionamiento no es explícito, sino indirecto, constituye un antecedente para avanzar en la acción vinculatoria.

En ese caso, la sentencia de la SCJN falló a favor de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica por mayoría de votos, en el sentido de defender ese derecho ante información falsa o inexacta publicada por los medios de comunicación y sus fuentes originales. Además, se asentó que la falta de ejercicio de ese derecho, no exonera a sus difusores de otras responsabilidades por daño moral u otras cuestiones.

El aporte mayor de la CNDH, desde nuestro punto de vista, lo representan las propuestas elaboradas “con el fin de contribuir con la sociedad para disminuir las campañas de desinformación, en especial las mal llamadas ‘noticias falsas’” (Corzo *et al.*, 2019, p. 31), que buscan fomentar prácticas favorables para los derechos y libertades de la información y la comunicación.

Las propuestas se dividen en cuatro ámbitos: agentes estatales, periodístico, personas defensoras de los derechos humanos y académico. En ellas se presentan acciones que los actores de los diferentes ámbitos podrían realizar para contribuir en la disminución de la información falsa.

#### *d) Los movimientos tecno-sociales y las experiencias de ciudadanía digital*

En una revisión de las características sobre las *fake news* en el México contemporáneo es imprescindible referir el caso del movimiento estudiantil #YoSoy132. Es importante enfatizar que su génesis se debió a la publicación de una noticia falsa. El problema empezó cuando Enrique Peña Nieto, como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudió a una reunión con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, en donde resultó abucheado.

Al día siguiente, algunos medios oficialistas de circulación nacional publicaron que la reunión había sido infiltrada por fuerzas políticas opuestas, y que los asistentes a la reunión no eran estudiantes de la institución convocante. No era verdad. Los estudiantes reaccionaron mediante el video “131 estudiantes de la Ibero responden” en la plataforma YouTube, identificándose con su credencial.

El video se viralizó, y convocó al apoyo de los estudiantes de gran cantidad de universidades en el país identificándose con el *hashtag* #YoSoy132 (Portillo, 2015).

El movimiento se identificó, entre otras cosas, por cuestionar la credibilidad de los medios de comunicación, particularmente de las empresas Televisa y Televisión Azteca. Portillo (2015) identifica en su análisis que las biografías de los participantes revelan una formación crítica, el acceso y apropiación de las tecnologías de comunicación, la posibilidad de estudios superiores, entre otras cosas. Tales características facilitaron el involucramiento y el reconocimiento de las causas abanderadas por el movimiento.

En México, el poder televisivo ha tenido una gran influencia, históricamente, en la elección de gobernantes. Los planteamientos de Fernández (1993) y Bohmann (1994) presentados al inicio del capítulo, revelan la cercanía del poder político y mediático durante todo el S. XX, haciendo notar el gran poder de la televisión para legitimar, mediante la manipulación informativa, la permanencia del PRI en el poder.

El movimiento #YoSoy132 reaccionó a esa inercia que amenazaba que los empresarios televisivos estaban echando a andar la vieja maquinaria que allanaría el camino del heredero del régimen para ocupar la silla presidencial – lo que finalmente pasó –. Aunque los términos de posverdad y *fake news* no existían en el vocabulario social de ese momento, lo que estaba siendo cuestionado, precisamente, era la nula transparencia de los intereses corporativos de los medios y la falta de democratización y escrutinio de los mismos.

Otras experiencias de ciudadanía digital relacionadas con el combate a las noticias falsas están menos articuladas; pero no por ello carecen de importancia. Como lo plantean Padilla *et al* (2019), las plataformas digitales constituyen una promesa para la participación ciudadana; pero si no se acompaña de un proceso de apropiación crítica y alfabetización digital, se corre el riesgo de estar a merced de información de dudosa procedencia y calidad.

En ese sentido, el riesgo de mayor circulación de noticias falsas a través de las plataformas digitales se debe a la facilidad del anonimato y la viralización. Además, existen otras prácticas malintencionadas que inciden en la veracidad de los datos como la piratería, las actividades hackers, los sabotajes, entre otros. A decir de

Aguirre (2014), esas condiciones disminuyen las posibilidades para la participación y la verificabilidad de la información, y hace imprescindible la alfabetización digital crítica.

De manera que un elemento fundamental para atajar la diseminación de *fake news* desde el lado ciudadano, consiste en adquirir las herramientas personales que permiten filtrar y discernir la información que cotidianamente circula en las plataformas digitales; pero es necesario trascender la esfera individual para colocar la acción en el terreno de lo colectivo, con el objetivo de crear los vínculos y la cohesión social necesarios para desmontar la información falsa.

En el caso de América Latina, y muy particularmente de México, es importante analizar cómo emerge el fenómeno de la desinformación considerando el contexto político y sociocultural, como proponen Sierra y Sola-Morales (2020). Encuentran que, el marco histórico de los medios mexicanos, fincado en el oficialismo del S. XX, explica la aparición de dinámicas de diseminación de información falsa en los medios digitales del S. XXI.

En su estudio identifican la existencia de siete dinámicas de los medios interactivos en México: a) presencia de *bots*, *trolls* e intentos de *hackeo*, b) *fake news* y rumores, c) ausencia de autoría en las noticias, d) polarización discursiva, e) ausencia de fuentes y omisión de violaciones a los Derechos Humanos, f) persecución contra periodistas, g) ocultamiento de información relevante (Sierra y Sola-Morales, 2020).

Al enmarcarlas en un contexto más amplio, el de América Latina, los autores sugieren que la presencia de esas dinámicas debe considerarse a la luz de la historia y la cultura política de toda la región. Las estrategias de propaganda, la forma de realizar las coberturas informativas, los conflictos sociales, el control de las élites, el cabildeo político, entre otras cosas, presentan similitudes significativas entre los países latinoamericanos.

Frente a esas condiciones compartidas, “es preciso construir un tejido crítico capaz de ejercer resistencia” (Sierra y Sola-Morales, 2020, p. 25) para encarar esas lógicas históricas que ocasionan que el modelo del oficialismo, que correspondía la época de los medios masivos tradicionales, aparezca nuevamente, aunque más sofisticado, en la era digital.

e) *El Estado frente a los ciudadanos y la violencia hacia los periodistas*

En México, existe un manto oscuro que se cierne sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Se trata de la violencia contra periodistas, que se expresa en 37 delitos cometidos constantemente en agravio de los informadores (FEADLE, 2021). Los delitos incluyen amenazas, agresiones físicas, secuestros, desapariciones y asesinatos. Más allá de los delitos en sí mismos, es la impunidad la que representa uno de los mayores problemas.

La ineficacia en la administración de justicia lleva a que los perpetradores permanezcan sin castigo; lo que hace parecer que en México se puede atentar contra los periodistas sin que existan consecuencias para los responsables. El impacto sobre la difusión de información verificada y legítima es evidente, pues el clima de hostilidad les obliga a callar. Los periodistas en México se autocensuran para proteger su vida.

La letalidad es real para los periodistas de todos los tipos de medios, desde los impresos hasta los digitales. Es particularmente peligroso ejercer el periodismo en las regiones dominadas por los cárteles del narcotráfico, alejadas de las metrópolis. Existe un conjunto importante de trabajos que analizan diversos aspectos de esta problemática, por lo que no se insistirá más sobre ello (del Palacio, 2015; Hincapié y López, 2018; Olvera y del Palacio, 2017; Rodelo, 2009; Trejo y Trejo-Quintana, 2018).

Sin embargo, es necesario examinar cómo estas condiciones afectan la veracidad de las noticias. La violencia contra informadores ha generado un efecto adverso que no es propiamente el de las noticias falsas, pero sí el del ocultamiento de información. Rodelo (2009) y Cepeda (2017) dan cuenta de la práctica de un periodismo precavido que consiste en autocensurarse en los informes sobre la delincuencia organizada como una estrategia para preservar la vida.

Este contexto de miedo y zozobra para los periodistas mexicanos que trabajan en las zonas de riesgo es consecuencia no solamente de la acción de los criminales sino también de la inacción del Estado para mantener el orden. Esta situación fue visibilizada por *El Diario* de Ciudad Juárez, cuando publicó su tristemente célebre editorial titulada ¿Qué quieren de nosotros? (2010).

El editorial fue publicado al día siguiente del asesinato de uno de sus fotógrafos. En él, *El Diario* interpela a los cárteles del narcotráfico: “ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”. Al tiempo que reconoce que el Estado ha perdido toda capacidad para protegerlos.

Además de la falla en la protección a periodistas, también está plenamente documentado que los agentes del Estado son quienes regularmente agreden a los periodistas. Nos referimos a policías, militares y funcionarios de diversos niveles que golpean, injurian o amenazan a los informadores. Además, en ciertos casos, inician procesos judiciales contra ellos con la finalidad de amedrentarlos y controlar el flujo informativo (Salazar, 2018, 2020).

El Estado mexicano también ha ejercido su fuerza y capacidad tecnológica para acallar las críticas que circulan en las plataformas digitales ejercidas por ciudadanos comunes. Un movimiento colectivo de protesta se articuló en las redes para exigir justicia en el caso de los dolorosos acontecimientos de la ciudad de Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014.

Al respecto, el Estado actuó de mala fe en la difusión de información falsa en varias ocasiones. La más memorable correspondió a la rueda de prensa ofrecida por el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, quien calificó de “verdad histórica” la versión en la que los normalistas habrían sido entregados por el alcalde de la ciudad a un cártel del narcotráfico, el cual los incineró en el basurero municipal de Cocula.

La versión tenía muchas inconsistencias que hicieron notar los reporteros asistentes. El procurador, visiblemente molesto por los cuestionamientos expresó tajante: “¡ya me cansé!” y abandonó el podio. La expresión se convirtió en el *hashtag* #YaMeCansé que durante varias semanas articuló la protesta digital en todo el país y más allá de las fronteras, junto con otras etiquetas como #AyotzinapaSomosTodos, #PaseDeLista1a43, #FueElEstado, entre otros (Galarza-Molina, 2019).

Una vez más, los peña-*bots* aprovecharon el algoritmo de *Twitter*, saturando las menciones de #YaMeCansé para obligar a la plataforma a tumbarlo. Ante ello,

la ciudadanía, se organizó de manera espontánea para generar nuevas etiquetas diarias que, al mismo tiempo, iban enumerando las veces que los peña-*bots* la derrumbaban: #YaMeCansé1, #YaMeCansé2, #YaMeCansé3, y así sucesivamente.

Ayotzinapa fue el dolor de cabeza permanente del presidente Enrique Peña Nieto. La forma de gestionar la información sobre los acontecimientos fue mediante datos falsos, o por lo menos erróneos, que rápidamente eran desmentidos por varias instancias que se involucraron en una vigilancia puntual de las declaraciones oficiales. Destaca la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyos dictámenes permitieron contrastar las noticias falsas construidas desde el gobierno mexicano y echar abajo la “verdad histórica” de Murillo Karam.

En la actualidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha inaugurado un estilo particular de difundir su propia información, saltándose la mediación periodística que representa la cobertura organizada por los medios noticiosos. Se trata de las Mañaneras, conferencias de prensa diarias que inician a las seis de la mañana y son transmitidas íntegramente por los medios públicos y los canales oficiales en internet (Presidencia de la República, 2022).

En varias ocasiones, López Obrador ha generado discusiones entre sus partidarios y sus detractores debido a las declaraciones que emite en estas conferencias, estimulando la polarización entre la ciudadanía. En diversos episodios, sus declaraciones implicaron desaciertos, generando confusión y desinformación entre la población.

Un ejemplo de lo anterior fue que, en medio del confinamiento obligatorio para la contención del brote por COVID-19, el presidente aparecía en actos públicos, sin cubrebocas, sin guardar sana distancia y, contrario a las medidas establecidas por la Secretaría [Ministerio] de Salud, pedía a la gente que se abrazara sin temor. El clímax fue la afirmación de que una imagen religiosa que guardaba en su bolsillo era suficiente protección frente al SARS-CoV-2.

En su estilo populista, constantemente reproduce frases, creencias populares y hasta estimula la polarización a través de apodosos estigmatizantes aplicados a ciertos actores sociales como “fifís” (las élites), “neoliberales”, “la mafia del poder”, entre otros. Particularmente llama la atención que, en un contexto como el mexicano, en el que los periodistas están siendo gravemente vulnerados, López Obrador ha

emprendido una cruzada contra lo que considera “la prensa fífi”, es decir, la que es crítica a su régimen.

El enfrentamiento con los periodistas se da en el plano discursivo, sin embargo, alienta la hostilidad contra los informadores. Se esperaría que el presidente condenara la violencia contra los periodistas y ordenara el esclarecimiento de los crímenes y su castigo; pero ha guardado silencio ante los asesinatos de comunicadores. En ese sentido, durante la Mañanera del 16 de febrero de 2022, el reportero Rodolfo Montes tomó la palabra para indicarle al presidente que no harían preguntas al mandatario en protesta por las muertes de periodistas. El día anterior había sido asesinado el quinto comunicador del año (Suárez, 2022).

En lugar de la condena a los crímenes, López Obrador ha reaccionado creando su propia iniciativa de *fact checking* que, desde el poder político pretende denunciar las noticias falsas contra la Cuarta Transformación (4T, el apelativo con el que el presidente denomina su mandato). En realidad, no se trata de noticias falsas, sino de cobertura crítica a sus acciones de gobierno. Esa iniciativa de *fact checking* lleva por nombre “Quién es quién en las mentiras”, y aparece en las Mañaneras de los miércoles.

La dinámica consiste en exponer a los periodistas que generan información crítica al gobierno. Mediante una metodología imprecisa, se seleccionan piezas periodísticas que son examinadas para desmentirlas, supuestamente, con datos oficiales, aunque la mayoría de las veces solamente se rebaten con declaraciones. De cualquier manera, es contradictorio que el primer mandatario de la nación realice un escrutinio del ejercicio de los periodistas, pues constituye un desbalance en el uso del poder y una inversión de las funciones de cada uno.

### 2.3 Fake news y salud: la infodemia en México

La tercera dimensión de este acercamiento a la diseminación de información falsa en México corresponde a la salud, pero de manera muy particular, a lo relacionado con la pandemia por COVID-19. Es muy conocido el término ‘infodemia’ (*infodemics*), utilizado por el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para referirse al hecho de que las noticias falsas se propagan con gran rapidez y son igual de peligrosas que el virus SARS-CoV-2 (Ghebreyesus, 2020).

Ante el riesgo que suponía la propagación de *fake news* sobre la enfermedad, en los primeros meses del año 2020, un grupo de 48 medios digitales se aglutinó en la iniciativa #TómataloEnSerioMX. Sus propósitos son verificar información, difundir mensajes coordinados de apoyo a las medidas sanitarias y brindar consejos de seguridad digital para evitar delitos cibernéticos, toda vez que la totalidad de la vida nacional migró a la modalidad *online* (De-León-Vázquez y Padilla, 2005).

Entre las noticias falsas que circularon en México con relación a la pandemia se encuentran las siguientes: el robo de líquido de las rodillas en los hospitales, el virus como una estrategia genocida del gobierno para despoblar el país y que el termómetro digital mataba neuronas a distancia (Espejel y Vargas, 2020). También se dijo que la enfermedad era falsa y la difusión era un montaje, así como que la ingesta regular de dióxido de cloro generaba inmunidad.

El estudio de Nieves-Cuervo et al (2021) indica que, con relación al COVID-19, el patrón de incapacidad del reconocimiento de noticias falsas en los mexicanos es del 66 por ciento, siendo una cifra bastante alta. Por su parte, Galarza-Molina (2021) encuentra que, en la ciudad de Monterrey, los ciudadanos dicen reconocer la gravedad de la propagación de las *fake news* en el marco de la pandemia, e incluso aseguran tener habilidades para verificarlas. Sin embargo, la adquisición de esas habilidades disminuye en los grupos poblacionales de mayor edad.

En una investigación sumamente pertinente, Galarza-Molina y Muñiz (2021) ofrecen evidencia empírica y puntual del impacto de las noticias falsas sobre la gestión de la pandemia. Mediante una encuesta aplicada en México identifican, en primer lugar, que la creencia en las *fake news* conduce a una menor observancia de las medidas preventivas.

En segundo lugar, encuentran que un mayor uso de medios interactivos, pero también de medios de comunicación tradicionales, son un predictor de mayor creencia en las noticias falsas y, por lo tanto, en el seguimiento de las medidas sanitarias. Este resultado es contrario a lo esperado, y los autores especulan que puede deberse a la saturación informativa y el fastidio social sobre el tema. No obstante, constata el problema de las *fake news* constituyen un obstáculo ante la solución de la crisis de salud.

### 3. Conclusiones

Como se ha discutido en el desarrollo de este texto, en México – y muy probablemente ocurra de forma similar en toda América Latina – el modelo propagandístico de nuestro sistema mediático funciona como un sustrato cultural e histórico que naturaliza la presencia de información falsa en los espacios comunicativos, sean los medios de comunicación tradicionales o las plataformas digitales.

Para el caso mexicano, el modelo propagandístico adopta el rasgo del oficialismo. La persistencia de la realidad oficial en los medios noticiosos probablemente predisponga a la ciudadanía a desconfiar de la información periodística, por el remanente histórico que instala en el subconsciente colectivo el recuerdo de las alianzas entre los medios y los políticos a lo largo de la historia moderna del país.

De ahí que, ante la explosión tecnológica que provee diversas plataformas para la difusión de información, con mínimos controles, se tienda a caer en la seducción de aceptar acríticamente lo que ahí se publica, sobre todo si coincide con nuestras creencias o con nuestros miedos. No obstante, la misma condición de los mínimos controles en los espacios digitales ofrece, al mismo tiempo, la promesa de la libertad para expresarse y participar.

La diferencia entre caer en la seducción acrítica de la información falsa o impulsar la libertad de expresión y la participación como pilares democráticos se encuentra en la adquisición de una alfabetización mediática para asumir críticamente los contenidos noticiosos. Esa decisión comienza en la esfera individual; pero debe cohesionar en lo colectivo para poder generar transformaciones sociales.

Bajo esa idea, existen esfuerzos e iniciativas ejercidos por personas comprometidas con los valores democráticos que intentan realizar una reparación del campo comunicativo. La desinformación, la polarización y los discursos de odio están asociados a la propagación malintencionada de noticias falsas que explotan el racismo, el sexismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, la misoginia y otros males sociales enraizados en nuestras emociones.

No obstante, como hemos visto en este capítulo, las estructuras de poder en México favorecen, y a veces alientan, la propagación de información falseada de acuerdo con los intereses de las élites. Estrategias de este tipo están presentes tanto en los rumores forman parte de en las conversaciones sociales, como en los esfuerzos de dominación política o en la gestión de las crisis sociales como la generada por la pandemia de COVID-19.

Es necesario asumir una perspectiva relacional en el análisis de la diseminación de *fake news*, para evitar caer en las falacias conspirativas. Es importante entender que, como otras formas simbólicas, las noticias falsas son productos culturales que llevan la impronta del contexto en el que se generan. Eso quiere decir que están construidas a partir de las relaciones y vínculos sociales tales como disputas, alianzas, conflictos, consensos y disensos por medio de los que interactuamos.

Eso es más o menos visible en los diferentes ejemplos presentados en el capítulo: las negociaciones cupulares entre élites, los rumores malintencionados, las iniciativas de *fact checking*, la instalación de granjas de *bots* que aprovechan los algoritmos para generar ventajas políticas, las confrontaciones directas entre los poderes y los contrapoderes como en los movimientos tecno-sociales o en las reivindicaciones de los periodistas violentados.

Algunas de estas acciones mantienen el cariz de las intenciones maliciosas de la diseminación de mentiras con la finalidad de asegurar ganancias políticas. Otras buscan desmontarlas para exhibir la verdad, en defensa de los valores democráticos. En cualquier caso, insistimos, representan el resultado de las relaciones históricas y sociales de actores concretos.

## Referencias

- Aguirre, J. F. (2014). El potencial de los medios digitales ante la participación ciudadana tradicional y en el presupuesto participativo. *Comunicación y Sociedad*, 22(22), 211–229. <https://doi.org/10.32870/CYS.V0I22.54>
- Becerra, J., Carlos, M. (2018). Trumplomacy, la relación México - Donald Trump en la era digital: un estado del arte. *Global Media Journal México*, 15(28), 116–135. <https://doi.org/10.29105/gmjmx15.28-8>
- Bohmann, K. (1994). *Medios de comunicación y sistemas informativos en México*. Alianza.
- Buendía, J. (2018). *Fake Polls as Fake News: The Challenge for Mexico's Elections*. Wilson Center Mexico Institute. <https://bit.ly/3N5Qyqp>
- Cepeda, D. A. (2017). Periodismo violentado en México. Entre las agresiones, la autocensura y el bajo salario en provincia. *Argumentos*, 30(85), 39–61. <https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/19>
- Cortázar, F. J. (2008). Esperando a los bárbaros: leyendas urbanas, rumores e imaginarios sobre la violencia en las ciudades. *Comunicación y Sociedad*, 9, 59–93. <https://doi.org/10.32870/CYS.V0I9.2025>
- Cortázar, F. J. (2012). La leyenda del robo de órganos. *Comunicación y Sociedad*, 17, 151–177. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i17.278>
- Corzo, E., Santiago, R., Adame, C. A. y Palacios, C. I. (2019). *Reporte sobre las campañas de desinformación, “noticias falsas (fake news)” y su impacto en el derecho a la libertad de expresión*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. <https://bit.ly/3O3CBuz>
- Del Palacio, C. (Ed.). (2015). *Violencia y periodismo regional en México*. Juan Pablos.
- De-León-Vázquez, S. (2011). Comunicación pública, transición política y periodismo en México: el caso de Aguascalientes. *Comunicación y Sociedad*, N.E.(15), 43–69. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i15.1139>
- De-León-Vázquez, S. y Padilla, M. R. (2005). Periodismo colaborativo y COVID-19: cobertura de la pandemia en medios digitales mexicanos.

- Revista Culturales*, 9, 1–34. <https://doi.org/10.22234/recu.20210901.e623>
- Demers, F. (2000). *ALÉNA, démocratisation du Mexique et “journalisme fonctionnel”. Le cas du quotidien Siglo 21 de Guadalajara, 1991-1998* [Tesis Doctoral no publicada. Université Laval]. <http://hdl.handle.net/20.500.11794/41811>
- Espejel, R. y Vargas, N. (2020). Impacto mediático digital de las fake news en México. *Actas de Periodismo y Comunicación*, 6(2), 1–7. <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas>
- FEADLE. (2021). *Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión Actualizado al mes de Julio de 2021*. <https://bit.ly/3knUvdU>
- Fernández, F. (1993). *Los medios de difusión masiva en México*. Juan Pablos.
- Fishman, M. (1983). *La fabricación de la noticia*. Tres Tiempos.
- Galarza-Molina, R. A. (2014). Clase política y medios: explorando el fenómeno de la publicidad política encubierta en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 59(221), 51–76. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/47699>
- Galarza-Molina, R. A. (2019). Counterpublics on Twitter: analysis of the #PaseDeListalal43 about the Ayotzinapa case. *Global Media Journal México*, 16(31), 27–46. <https://doi.org/10.29105/gmjmx16.31-2>
- Galarza-Molina, R. A. (2020a). Fact-checking en el periodismo mexicano: Análisis de la experiencia Verificado 2018. *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, 27, 1. <https://doi.org/10.29101/crcs.v27i0.12902>
- Galarza-Molina, R. A. (2020b). Fact-Checking en México. Análisis de la percepción del público de Verificado 2018. *Revista Mexicana de Opinión Pública*, 29, 41. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2020.29.70352>
- Galarza-Molina, R. A. (2020c). Roles democráticos y retos para la práctica de periodistas mexicanos. In *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* 65( 239), 167–191. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://doi.org/10.22201/FCPYS.2448492XE.2020.239.68265>

- Galarza-Molina, R. A. (2021). Percepciones y estrategias ciudadanas ante las fake news en Nuevo León, México. *Virtualis*, 12(22), 137–164. <https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/339>
- Galarza-Molina, R. A. y Muñiz, C. (2021). La creencia en fake news y su rol en el acatamiento de medidas contra COVID-19 en México. *Universitas*, 35, 19–38. <https://doi.org/10.17163/uni.n35.2021.01>
- Ghebreyesus, T. A. (2020). *Conferencia de Seguridad de Múnich*. <https://bit.ly/3yh8Xwo>
- González de Bustamante, C. (2015). *“Muy buenas noches”. México, la televisión y la guerra fría*. Fondo de Cultura Económica.
- González, R. A. (2018). Entre la espada y la pared : violencia y publicidad oficial como obstáculos para la modernización del periodismo mexicano. *Argumentos*, 30(85), 159–174. <https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/24>
- Hallin, D. C. (2000). Media political power, and democratization in Mexico. En M.-J. Park y J. Curran (Eds.), *Dewesternizing media studies* (pp. 97–110). Routledge.
- Herrera, S. (2006). Funciones de los observatorios de medios en Latinoamérica. *Global Media Journal México*, 3(6), 1–27. [https://gmjmexico.uanl.mx/index.php/GMJ\\_EI/article/view/95](https://gmjmexico.uanl.mx/index.php/GMJ_EI/article/view/95)
- Hincapié, S. y López, J. A. (2018). Violencia contra periodistas y rendición social de cuentas : el caso mexicano. *Ciencia Política*, 13(26), 127–152. <https://doi.org/10.15446/cp.v13n26.70244>
- Hughes, S. (2006). *Newsroom in conflict: Journalism and the Democratization of Mexico*. University of Pittsburgh Press.
- Instituto Federal Electoral. (2006). *Estadística de las Elecciones Federales de 2006*. <https://bit.ly/3xRUIwG>
- Islas, O. y Gutiérrez, F. (2002). Fox y prensa. Relaciones peligrosas. *Razón y Palabra*, 28, 1–5. <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n28/oislas.html>

- Lutz, B. y Padilla, A. (2012). El rumor del nopal chino: construcción institucional y efectos sociales de noticias falsas. *Comunicación y Sociedad*, 17, 179–204. <https://doi.org/10.32870/CYS.V0I17.279>
- Mendoza, J. (2011). La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de memoria colectiva. *Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, 7(2), 139–179. <https://polismexico.izt.uam.mx/index.php/rp/article/view/110>
- Merchant, D. D. (2018). Censura y manipulación de la información en Baja California. *Argumentos*, 30(85), 65–83. <https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/20>
- Meza, A. y Enríquez, J. Á. (2018). Violencia simbólica en el campo periodístico de Sonora, México. *Global Media Journal México*, 15(28), 49–65. <https://doi.org/10.29105/gmjmx15.28-4>
- Nieves-Cuervo, G. M., Manrique-Hernández, E. F., Robledo-Colonia, A. F. y Grillo-Ardila, E. K. (2021). Infodemia: noticias falsas y tendencias de mortalidad por COVID-19 en seis países de América Latina. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 45, 1. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.44>
- Olvera, A. y del Palacio, C. (2017). Acallar las voces , ocultar la verdad. Violencia contra periodistas en Veracruz. *Argumentos*, 30(85), 17–35.
- Padilla, M. R., De-León-Vázquez, S., Medina, N. I. (2019). Aproximaciones para el estudio de la participación de audiencias en espacios informativos. En L. Cardoso, G. Calvi y M. Triguboff (Eds.), *Políticas y producción audiovisual en la era digital en América Latina* (pp. 137–156). CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rmjp>
- Palau, S. M. (Ed.). (2017). *La observación de medios*. CONEICC. <https://rom.coneicc.org.mx/publicaciones/>
- Pérez, R. (2020). *Periodismo colaborativo de verificación de hechos, una aproximación a la iniciativa Verificado 2018* [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Aguascalientes]. Repositorio Bibliográfico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://bit.ly/3OmNgAa>

- Portillo, M. (2015). Construcción de ciudadanía a partir del relato de jóvenes participantes del #YoSoy132. *Global Media Journal México*, 12(23), 1–18. <https://doi.org/10.29105/gmjmx12.23-1>
- Presidencia de la República. (2022, Junio 23). *Conferencias de prensa matutinas* [Video]. YouTube. <https://bit.ly/3HOPkir>
- ¿Qué quieren de nosotros? (2010, Septiembre 19). *El Diario*, 1–2. <https://bit.ly/3bntBlc>
- Ramonet, I. (2004). Información, comunicación y globalización. El quinto poder. *Chasqui*, 88, 26–30. <https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i88.281>
- Reguillo, R. (2013). De las violencias: caligrafía y gramática del horror. *Desacatos. Revista de Ciencias Sociales*, 40, 33. <https://doi.org/10.29340/40.254>
- Reguillo, R. (2021). *Necromáquina. Cuando morir no es suficiente*. NED Ediciones, ITESO.
- Reyna, V. H. (2016). Cambio y continuidad en el periodismo mexicano: una revisión bibliográfica. *Comunicación y Sociedad*, 27, 79–96.
- Rodelo, F. V. (2009). Periodismo en entornos violentos: el caso de los periodistas de Culiacán, Sinaloa. *Comunicación y Sociedad*, 12, 101–118. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i12.1637>
- Rodrigo-Alsina, M. y Cerqueira, L. (2019). Periodismo, ética y posverdad. *Cuadernos.Info*, 44, 225–239. <https://doi.org/10.7764/cdi.44.1418>
- Romo, P. (2012, Octubre 21). Desprotegida, la marca de la Guadalupana. *El Economista*, 1–1. <https://bit.ly/3QCPpcU>
- Salazar, M. G. (2018). Aliados estratégicos y los límites de la censura: el poder de las leyes para silenciar a la prensa. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 64(235), 495–522. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2019.235.62643>
- Salazar, M. G. (2020). ¿Cooptar o reprimir? Intervenciones autoritarias sobre la prensa local mexicana. *América Latina Hoy*, 84, 1–20. <https://doi.org/10.14201/alh.20916>

- Sierra, F. y Sola-Morales, S. (2020). Golpes mediáticos y desinformación en la era digital. La guerra irregular en América Latina. *Comunicación y Sociedad*, e7604(0), 1–31. <https://doi.org/10.32870/cys.v2020.7604>
- Signa-lab. (2019). *Democracia, libertad de expresión y esfera digital. Análisis de tendencias y topologías en Twitter. El caso de la #RedAMLOVE*. [https://signalab.iteso.mx/informes/informe\\_redamlove.html](https://signalab.iteso.mx/informes/informe_redamlove.html)
- Suárez, K. (2022, Febrero 16). AMLO: Un grupo de periodistas decide no participar en la conferencia matutina de López Obrador en protesta contra la violencia. *El País*, 1–2. <https://bit.ly/3tYsjUg>
- Trejo, R. (1996). Prensa y gobierno: las relaciones perversas. Los medios, espacios y actores de la política en México. *Comunicación y Sociedad*, 25–26, 35–55. [http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/comsoc/pdf/25-26\\_1996/35-55.pdf](http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/comsoc/pdf/25-26_1996/35-55.pdf)
- Trejo, R. y Trejo-Quintana, J. (2018). *Persecución a periodistas*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Estudio-Periodistas-2018.pdf>
- Valenzuela, S., Muñiz, C. y Santos, M. (2022). Social Media and Belief in Misinformation in Mexico: A Case of Maximal Panic, Minimal Effects? *The International Journal of Press/Politics*, 1–22. <https://doi.org/10.1177/19401612221088988>

# DESINFORMACIÓN EN BRASIL: TEMAS, PERSONAJES Y DINÁMICAS COMUNICACIONALES

# 2

ULISSES MATHEUS BRAGA DE FREITAS MELO | BRUNO RAFAEL  
GUEIROS BARBOZA | MARTIN ERBES | JULIANO DOMINGUES

## Resumen

*Este capítulo presenta un panorama del fenómeno de las fake news en Brasil a partir de la identificación y contextualización de temas, personajes y dinámicas de difusión de la desinformación. Su objetivo es ofrecer una respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo se manifiesta el fenómeno de las fake news en el país? El texto se divide en tres etapas. En la primera se presentan las herramientas teórico-conceptuales sobre las que se sustenta la interpretación del fenómeno; luego están los personajes y dinámicas relacionadas con el proceso de producción y difusión de la desinformación; y, finalmente, un balance general de los datos y el contexto analizado.*

## 1. Introducción

La difusión de noticias falsas está en la agenda del debate público en Brasil desde al menos 2014, año considerado un hito en el uso de robots como estrategia de comunicación político-electoral (Ruediger *et al.*, 2018). Desde entonces, este se ha convertido en un tema obligatorio en las disputas electorales. Además, la agenda se fue diversificando paulatinamente y comenzó a abarcar temas ambientales, fraude en las máquinas de votación electrónica y medidas para combatir la pandemia de la COVID-19.

El ambiente brasileño tiene tres características propicias para la difusión de desinformación: acceso generalizado y gradual a internet, desconfianza en las instituciones democráticas, incluida la prensa, y una percepción errónea de la realidad. Datos de 2021 muestran que hay 152 millones de usuarios de internet en el país, lo que representa el 81% de la población de 10 años y más, con avances significativos en las zonas rurales (CGI.br/NIC.br, 2022). El mismo movimiento paulatino de popularización del acceso se da en relación al uso de dispositivos digitales: actualmente existen 440 millones de unidades activas, entre computadores, tabletas, *notebooks* y, principalmente, teléfonos inteligentes, lo que significa dos dispositivos por habitante en promedio (Meirelles, 2022).

Llaman la atención las cifras de usuarios de redes sociales y medios digitales: hay 165 millones en WhatsApp, 138 millones en YouTube, 122 millones en Instagram, 116 millones en Facebook y 73,5 millones en TikTok (Volpato, 2022). En este contexto, otro aspecto propicio para la desinformación se refiere a lo que el Instituto Ipsos denomina índice de percepción errónea o índice de ignorancia. En 2016, Brasil ocupó el sexto lugar y, en 2017, el segundo en una lista de 38 países, solo por detrás de Sudáfrica (IPSOS, 2017, 2018). Otro dato relevante: el 34% de los brasileños considera muy difícil o un poco difícil diferenciar las noticias falsas de las verdaderas (IPSOS, Statista, 2020). Además, ha aumentado la desconfianza en las instituciones en relación con los poderes de la República, el Ministerio Público y la prensa. En septiembre de 2021, el 32% de la población desconfiaba de la prensa, mientras que en agosto de 2012 ese porcentaje era del 18% (Datafolha, 2021).

Se entiende, por lo tanto, que estos aspectos ofrecen condiciones favorables para la producción y difusión de las llamadas *fake news*. Ante esta situación, el presente texto presenta un panorama de la manifestación de este fenómeno en Brasil a partir de una breve contextualización de temas, personajes y dinámicas asociadas a esta estrategia de comunicación. Su propósito principal es ofrecer una respuesta teórica y empíricamente válida al siguiente problema de investigación: ¿cómo se manifiesta el fenómeno de las *fake news* en el país?

Para ello, el texto se estructuró en tres momentos. En el primero, se presentan las herramientas teórico-conceptuales sobre las que se sustenta la interpretación del fenómeno. Se recurre principalmente al debate sobre los impactos en los flujos de comunicación en el mundo contemporáneo provocados por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Se entiende que las dinámicas informativas en el llamado ciberespacio y la idea de posverdad son elementos necesarios para entender la difusión de *fake news*. Luego, el texto pasa a los aspectos empíricos relacionados con el fenómeno. A partir de la presentación de lo más avanzado de la investigación sobre el tema en Brasil, se observa cuáles son los temas y personajes recurrentes, así como los métodos más utilizados.

Los autores de este capítulo reconocen la complejidad y transdisciplinariedad del objeto de esta reflexión y, en ese sentido, destacan que el presente trabajo no pretendió abarcar la manifestación de este fenómeno en su totalidad, ni mucho menos. El objetivo de este texto es solo presentar de manera introductoria y desde

una perspectiva panorámica la situación relacionada con el fenómeno de las noticias falsas en Brasil, como una forma de incentivar agendas de investigación e intervención en el área.

## **2. Apuntes teórico-conceptuales**

### **2.1. La dinámica del ciberespacio**

El final del S. XX marca una transformación social y económica de la cultura, en lo que Lipovetsky y Serroy (2011) denominan la “era hipermoderna”. Consiste el resultado de un capitalismo planetario sustentado en el avance tecnológico, el consumismo total, los medios y las redes digitales. La posibilidad de compartir datos, combinada con procesadores en redes de alta velocidad, sentó las condiciones para el desarrollo de una red de conexiones descentralizadas que se convirtió en internet.

El escenario de esta sociedad y de esta nueva cultura está construido por la expansión del universo de la comunicación, la información y la mediatización. El escenario que se presenta es el del desarrollo tecnológico y las industrias de la comunicación, que posibilitaron el consumo sobreabundante de imágenes, al mismo tiempo que se multiplican los canales, la información y los intercambios (Lipovetsky; Serroy, 2011). La cultura – llamada ahora hipercultura – impone una dinámica frenética que obliga a una continua remodelación de la vida en sociedad, incluidas sus formas de organización y gobierno, marcadamente globalizadoras, que presupone una nueva estructura de relación del hombre consigo mismo y con el mundo. Lo que proporciona esta nueva cultura es, en principio, su estructura técnico-operativa: un conjunto de prácticas realizadas por personas conectadas a una red informática. El resultado es una serie considerable de acciones que no habrían tenido lugar, por falta de aparatos tecnológicos adecuados, en otros momentos o lugares (Martino, 2014).

Así, la civilización del S. XXI está experimentando una telepresencia generalizada (Levy, 2010), un contexto en el que se multiplica el volumen de información disponible, aumenta la densidad de enlaces en bases de datos, hipertextos y redes, así como proliferan sin control los contratos y contactos entre

individuos. Este caótico desbordamiento de información es característico del ciberespacio, cuya vocación es la de poner en sinergia todos los dispositivos de información, registro, comunicación y simulación. Todavía en el S. XX, Lévy (2010, p. 95) observó que “la perspectiva de la digitalización general de la información [...] hará del ciberespacio el principal canal de comunicación y soporte de la memoria de la humanidad desde principios del próximo siglo”. Los medios digitales pasan a afectar directamente la relación de la humanidad con el conocimiento y con el mundo, que se transforma por completo en esta nueva intermediación.

Para Han (2017), los nuevos medios tienen un poder destructivo en la relación con el otro, ya que el mundo digital empobrece la alteridad. En las redes sociales digitales, los lazos entre los individuos suelen ser fluidos, rápidos, se establecen según la necesidad en un instante y se rompen al siguiente. La virtualización y la digitalización conducen cada vez más a la desaparición de los lazos resultantes de las fricciones naturales de las relaciones personales. El sujeto performático posmoderno tiene una cantidad exagerada de opciones; pero es incapaz de establecer conexiones intensas. La hipermodernidad también ha cambiado la relación de la humanidad con la idea de progreso. Como las relaciones, el progreso se ha vuelto ambivalente: el horizonte de la tecnociencia se ha desdibujado y traído incertidumbre (Lipovetsky; Serroy, 2011).

En el torbellino de información sin jerarquía, los usuarios tienen la posibilidad de proyectarse donde quieran y construir su camino personal. Para Han (2017), la positividad de poder construir tus propios caminos es más eficiente que la negatividad del deber (construir un camino). El poder ilimitado se convierte en el imperativo de una sociedad en la que el desempeño es el maestro. En lugar de las prohibiciones y la ley, entran el proyecto, la iniciativa y la motivación.

Paradójicamente, en la contemporaneidad, la libertad no se ve amenazada por la falta, sino por el exceso de información. La sobredosis informativa carece de un método de orientación que permita una mínima distancia de análisis y crítica para darle sentido (Lipovetsky; Serroy, 2011). En la hipermodernidad, la atención profunda, necesaria para la reflexión crítica, se desplaza hacia la ‘hiperatención’, una forma de atención dispersa, que se caracteriza por cambios repentinos de enfoque entre varias actividades, información y procesos (Han, 2017). En la misma línea, D’Ancona (2018, p. 52) señala que “pese a sus maravillas, la web tiende

a amplificar lo estridente y a prescindir de la complejidad”. Ante la idea de una vida radicalmente transitoria, la reacción es con la hiperactividad, con la histeria del trabajo y la producción. Las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado la circulación y el almacenamiento de información, agilizando las búsquedas y agilizando la vida. Sin embargo, no son capaces de garantizar la reflexión crítico-racional ni formas de interacción comunicativa (Gomes; Maia, 2008). En el diluvio de información del S. XXI, comprender y filtrar datos se convierte en uno de los mayores desafíos.

La formación de identidades y creencias en este torbellino se entiende como una especie de mercado a conquistar a través de construcciones narrativas. Castells (2013) señala que el mundo social de internet es tan diverso como la sociedad misma, con sus contradicciones e idiosincrasias por lo que el ruido de las comunidades virtuales no representa un sistema coherente de valores y normas. Se mueve como un organismo vivo y siente continuamente la opresión de los intentos de control de los actores poderosos. La dinámica de las comunidades virtuales permite una acción agresiva sobre sus usuarios, pues exponen sus datos, aunque no los identifiquen individualmente. Con ello, los pone a merced de los ataques a la construcción identitaria de los individuos: es como si siempre existiera la oportunidad de atraer clientes y consumidores con las barreras del tiempo-espacio eliminadas.

Para Hall (2013), el consumismo global crea posibilidades de “identidades compartidas”, como consumidores del mismo tipo de bien, clientes de los mismos servicios y audiencias de los mismos mensajes e imágenes entre personas, aunque estén muy distantes entre sí en espacio y tiempo. La desorientación provocada por el exceso de información genera crisis y confusión sobre las identidades y también sobre el significado.

Rheingold (citado por Martino, 2014) va más allá al afirmar que la comunicación mediada por computadoras desdibuja los límites de la identidad y crea nuevas sintaxis. Esta identidad se transforma en algo múltiple y fluido, en el que verdadero y falso son difíciles de establecer plenamente. Así, la cuestión de la autenticidad del ser alguien siempre está en juego cuando se habla de comunidades virtuales.

Si el volumen de datos del diluvio informacional no permite la selección, jerarquización y organización de la información que transita en el entorno digital, este proceso fue tomado por los grandes actores de la cibercultura con la creación de códigos que filtran estos datos según quién entra en internet. Pariser (2011) denomina filtro-burbuja a este filtrado. El filtro de burbujas, a partir de su historial de navegación, búsqueda y lo que les gusta y hacen a personas similares a usted, permite al usuario habitar una zona de confort y encontrar lo que es agradable. Cuando un individuo está en un filtro, existe un incentivo para reforzar creencias y suposiciones sobre su cosmovisión y preferencias políticas. El filtrado es, por lo tanto, una herramienta importante para la intensificación de las posiciones extremistas, el fanatismo religioso y el radicalismo político-ideológico.

Pariser (2011, p. 88) agrega que “consumir información que encaje con nuestras ideas del mundo es fácil y placentero; consumir información que nos desafía a pensar de nuevas maneras o cuestionar nuestras suposiciones es frustrante y difícil”. Gomes y Maia (2008) argumentan que la gran mayoría de los participantes en las discusiones políticas en las redes expresan sus opiniones, investigan y brindan información, sin estar vinculados a un debate en sí. La práctica de la argumentación para resolver discursivamente *impasses* o diferencias entre puntos de vista es relativamente reducida en comparación con otras modalidades de comunicación. Internet también puede ser utilizado de forma jerárquica, reproduciendo patrones autoritarios de comunicación de grupos sectarios, incluso abriendo posibilidades para una comunicación más horizontal y favoreciendo efectos desinhibidores.

Otro factor a observar, concretamente tras las transformaciones provocadas por internet en el campo de la comunicación y la llegada de las aplicaciones de mensajería instantánea, es el marco utilizado por quienes producen la información. Obtiene una participación importante en el proceso de difusión de noticias, ya que se acelera y amplifica el potencial para compartir y visualizar contenidos. En este contexto, el encuadre funciona como un catalizador de la posverdad, ya que su posicionamiento ideológico se identifica a través de algunas secuencias de artículos, sus lectores tienden a difundir enlaces de noticias sin siquiera revisar el texto.

Si, por un lado, el filtro de burbujas contribuye a la personalización de los contenidos, al seleccionar resultados con mayor probabilidad de que el usuario los vea, mostrar perfiles y sitios con temáticas de mayor interés y hacer publicidad a

la medida para cada persona. Por su parte, los filtros de personalización “sirven como una especie de filtro invisible de autopropaganda, adoctrinándonos con sus ideas, amplificando nuestro deseo por cosas que nos son familiares y dejándonos ajenos a los peligros de un territorio desconocido” (Pariser, 2011, pág. 15). En este territorio se produce el intercambio de información entre emisores y destinatarios imprevisibles y anónimos para el usuario común.

La tecnología digital juega entonces un papel importante en la organización de multitudes. Si bien algunos de ellos pueden desarrollarse con poca infraestructura de medios y, como resultado, estar menos organizados, Bennett y Segerberg (2013) señalan la creciente incidencia de la organización conectada a través de densas plataformas de medios digitales. El papel clave que juegan las redes sociales explica por qué los límites de la red en este tipo de acción son fluidos, pero capaces de niveles impresionantes de acción y planificación coordinada (Bennett, Segerberg, 2013). Este potencial movilizador de los sitios de redes sociales también explica el interés y la disputa de actores globales por el dominio de las plataformas.

Dejar a las multitudes de usuarios a su propio camino plantea grandes riesgos para los actores que detentan el poder económico y político. Chomsky (2013) argumenta que las grandes empresas de medios continúan en la estrategia de “construir consenso” y manipular a los incautos. Esto cobra intensidad cuando estas empresas pasan a manejar enormes bases de datos, las cuales reciben información sobre hábitos, preferencias, historial de navegación y perfil de los usuarios de la red. D’Ancona (2018, p. 51) encuentra que las grandes empresas tecnológicas que proporcionan “el palco, el escenario y los accesorios para este drama emocionalmente global se han convertido en los beneficiarios de cantidades sin precedentes de información sobre sus miles de millones de actores: los llamados grandes datos”.

## 2.2. La idea de posverdad

El término posverdad se popularizó como el título de un libro del autor estadounidense Ralph Keyes en 2004: *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (*La Era de la Posverdad: Deshonestidad y Engaño en la Vida Contemporánea*). Fue solo en 2016 que la palabra comenzó a ganar más notoriedad,

luego de que su uso aumentara en un 2000% desde 2004 (Castilho, 2016). La Universidad de Oxford también aportó una definición para este vocablo que hasta el año anterior no formaba parte de su diccionario: “circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales” (OUP, 2016).

Para D’Ancona (2018, p. 34), mentiras, manipulaciones y falsedades políticas no son lo mismo que posverdad. La novedad no está en la deshonestidad de los políticos, sino, sobre todo, en la respuesta del público: “la indignación da paso a la indiferencia y, finalmente, a la connivencia”. Esta “respuesta pública” estaría directamente ligada a los avances tecnológicos de las últimas décadas. En la primera década de este siglo, la disponibilidad de banda ancha de alta velocidad transformó internet en el medio de publicación más barato y rápido jamás inventado, con profundas implicaciones para la cultura y el comportamiento de la sociedad.

El colapso de la confianza es la base social de la posverdad: todo lo demás fluye de esta única y destructiva fuente (D’Ancona, 2018, p. 42). Keyes (2018, p. 22) afirma que:

La deshonestidad inspira más eufemismos que la cópula o la defecación. Esto ayuda a insensibilizarnos a sus implicaciones. En la era de la posverdad no solo tenemos la verdad y la mentira, sino una tercera categoría de declaraciones ambiguas que no son exactamente ciertas, pero tampoco una mentira. Puede llamarse verdad mejorada. neoverbidad Suave verdad. Verdad artificial. luz de la verdad.

Según Mazar, Amir y Ariely (2008), tres aspectos influyen en la frecuencia y magnitud de la deshonestidad: las recompensas externas, la probabilidad de ser descubierto y la intensidad del castigo. Los psicólogos muestran que, como parte de la socialización, las personas interiorizan las normas y valores de la sociedad a la que pertenecen. El resultado práctico es que, en comparación con las personas que lo rodean, una persona puede ser más complaciente con sus propias mentiras. En el documental *(Des)Honestidad: La Verdad sobre las Mentiras*, Ariely afirma: “Si te convences de que todos los demás lo hacen, es más fácil pensar que es algo normal y eres susceptible de compartir mentiras en un nivel superior.”

Cuando la verdad se derrumba como valor social, se ponen en peligro las continuidades de la práctica social que la sustentaba. Antes del surgimiento del movimiento contra la vacunación, se suponía que las enfermedades

contra las que los niños eran vacunados de forma rutinaria eran cosa del pasado. Sin embargo, tanto en la salud pública como en la política, la posverdad genera una volatilidad asombrosa. Cuando se confía menos en la investigación basada en evidencia que en una colección de anécdotas y se presta menos atención a la autoridad institucional que a las teorías de la conspiración, las consecuencias pueden ser imprevistas y fatales. (D’Ancona, 2018, p. 73).

El potencial de que la información errónea llegue a un gran número de personas ha crecido exponencialmente con los teléfonos inteligentes. La radiodifusión por satélite, la mediación móvil y la creación de aplicaciones específicas de comunicación (como Facebook, Instagram o WhatsApp) han multiplicado el número de individuos conectados a las redes sociales – sumergidos en un entorno de transmisión de datos a alta velocidad – de forma que los mensajes se comparten entre grupos casi instantáneamente (Castells, 2016). D’Ancona (2018, p. 53) afirma que “nunca ha habido una forma más rápida de difundir una mentira que publicarla en línea”. En los primeros días de la Web 2.0, se suponía ampliamente que la revolución digital tendría un poder de autocorrección global, que la mentira sería expulsada por los mecanismos de defensa de la responsabilidad del usuario; pero esto no sucedió (D’Ancona, 2018).

La discusión sobre la posverdad y el uso de términos como ‘noticias falsas’ y ‘realidades alternativas’ está asociada a las menciones de las obras *Nineteen Eighty-Four*, de George Orwell, y *Brave New World*, de Aldous Huxley, así como como el incremento en el número de ventas de estos títulos. En enero de 2017, según el diario *Deutsche Welle*, el libro *1984* llegó a lo más alto de la lista de los más vendidos en Amazon.com y la editorial Penguin programó la impresión de otros 75.000 ejemplares. Ambas novelas, en sus distopías en el futuro cercano, son recordadas en discusiones sobre el poder simbólico. La diferencia esencial entre las historias de Orwell y Huxley es que, mientras en *Nineteen Eighty-Four* el poder simbólico caminaba junto al poder coercitivo, siendo ejercido por un gobierno totalitario, opresor y punitivo (Orwell, 2009), en la trama de Huxley (2014) las personas se esclavizan, siendo seducidos y engañados por el consumo y el entretenimiento, en un régimen aparentemente democrático.

El tema se vuelve más complejo a medida que aumenta la desconfianza en las instituciones. El periodismo, por ejemplo, tendría la tarea de revelar la complejidad,

los matices y las paradojas de la vida pública, y contribuir a la democracia como proveedor de noticias confiables. Sin embargo, D’Ancona (2018, p. 45) destaca que “justo cuando más se requiere la confianza en los medios, ésta, según las encuestas de opinión mundial, ha caído al número más bajo de la historia”. Es en este ambiente donde se establece la posverdad.

Existe una esperanza actual de que la tecnología en sí misma sea una respuesta a la era de la posverdad a través de aplicaciones y software que podrían identificar el origen y verificar la veracidad de lo que se publica. Sin embargo, la tarea es compleja y las soluciones deberían contemplar la verificación de diversas plataformas e identificar los matices lingüísticos y la intención y sentimiento de los usuarios. Eso todavía parece estar muy lejos, incluso para el software más avanzado de la actualidad.

### 3. Aspectos empíricos

#### 3.1. Temáticas

Las noticias falsas comenzaron a catalogarse sistemáticamente en Brasil hace relativamente poco tiempo. Los primeros estudios que abordaron el tema analizaron los efectos comunicacionales de posibles “burbujas” de información proporcionadas, en parte, por la influencia de los algoritmos presentes en las redes sociales (Recuero *et al.*, 2017; Soares *et al.*, 2018). Estas primeras iniciativas se debieron en gran medida a los informes iniciales de compartir narrativas específicas en entornos de conversación virtual partidistas.

Sin embargo, comenzaron a realizarse estudios sobre el intercambio de desinformación en línea en Brasil, principalmente después de tres eventos importantes que llamaron la atención de los investigadores. Dos de esos hechos marcaron la política nacional: el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y el juicio al expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Estos episodios registraron un intenso debate en las redes y reportes de compartir información falsa en grupos en línea y sitios web. Simultáneamente a esto, tuvo lugar otro evento en los EE. UU. Donald Trump fue elegido de una plataforma de campaña que utilizó en gran medida noticias falsas y teorías de conspiración (Allcott y Gentzkow, 2017).

Tales eventos no solo influyeron en los investigadores para promover una nueva agenda de investigación, sino que también se convirtieron en objeto de su análisis. Uno de los primeros estudios en esta área fue el de Recuero y Gruzd (2019), quienes desentrañaron la estructura en cascada de las noticias falsas que se difundieron a través de Twitter durante la detención y juicio político de los líderes del Partido de los Trabajadores (PT). Este análisis encontró una circulación limitada de desinformación en las redes sociales en su conjunto, y descubrió que gran parte del intercambio de dicho contenido tuvo lugar dentro de ciertos núcleos ideológicos. El éxito de las *fake news* en estos medios, por tanto, dependía de la participación de determinados actores (perfiles) comprometidos.

Esta agenda de investigación, sin embargo, fue cobrando fuerza en varios sectores de la Academia y varios trabajos comenzaron a recopilar datos a gran escala sobre el contenido de la comunicación política en las redes sociales. Algunas de estas investigaciones promovieron pruebas de metodologías de recolección de datos (Resende *et al.*, 2018; Caetano *et al.*, 2018; Monteiro *et al.*, 2018). Estos proyectos ya recopilaron información sobre la desinformación compartida en Twitter, Facebook y, especialmente, WhatsApp, mejorando las técnicas utilizadas. Los análisis exploratorios encontraron una gran presencia de desinformación en todas las redes analizadas, ya sea a partir de textos engañosos, montajes, videos descontextualizados, o incluso URL que llevaban al usuario a sitios de noticias falsas y excesivamente partidistas (Resende *et al.*, 2018).

Los resultados obtenidos de estos análisis mostraron que los principales objetivos de la información falsa entre 2017 y 2018 fueron el expresidente Lula y el entonces presidente Michel Temer (Resende *et al.*, 2018). En este punto, los investigadores ya tenían una idea del potencial atractivo de WhatsApp, especialmente después de la huelga de camioneros que tuvo lugar en mayo de 2018. Los datos recopilados por Resende y otros (2018) también indicaron un apoyo significativo para el precandidato a la presidencia Jair Bolsonaro, quien se insertó en los debates populistas, nacionalistas y favorables a la dictadura militar.

Sin embargo, fue solo después de la campaña electoral que tuvo lugar en la segunda mitad de ese año que estudios más profundos pudieron catalogar la amplitud de la distribución de desinformación en las redes sociales brasileñas. Las investigaciones comenzaron a medir el éxito de las campañas en línea antes y durante

el período electoral, al mismo tiempo que los primeros análisis profundizaron el debate sobre cómo este formato de comunicación desinformativa había tenido éxito en las elecciones (Ribeiro y Ortellado, 2018; Gomes y Dourado, 2019). Sin embargo, independientemente de las redes sociales estudiadas, lo que encontraron los trabajos fue un dominio real de los grupos bolsonaristas en la comunicación virtual. Este éxito, sin embargo, se dio en conjunto con el uso recurrente de la desinformación y las noticias excesivamente partidistas en las discusiones sobre política (Dourado, 2020, 2021; Resende *et al.*, 2019; Bursztyrn y Birnbaum, 2019; Soares, 2021; Maros *et al.*, 2021).

Por lo tanto, es posible subdividir esta gran masa de desinformación en tres líneas temáticas. Si bien esta clasificación es limitada, permite observar los principales temas debatidos en estos grupos antes y durante la elección. Una de las principales narrativas presentes en las *fake news* y teorías conspirativas que se compartieron mezclaba el sentimiento anti-PT y anti-Lula (Davis y Straubhaar, 2020; Dourado, 2020) con el anticomunismo, simbolizado por la figura del gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro (Chagas *et al.*, 2019; Chagas y Carreiro, 2021; Resende *et al.*, 2019). Mucha de la información falsa con este enfoque indicaba una simpatía y reverencia del candidato del PT Fernando Haddad al gobierno venezolano.

Otra línea temática de publicaciones tuvo como agenda principal la lucha contra la corrupción y el fraude electoral (Dourado, 2020). Esta noticia logró un razonable éxito durante las elecciones, inundando el debate público con acusaciones de falsas acusaciones y condenas vinculadas al mencionado candidato del PT y al expresidente Lula, muchas veces señalado como el verdadero candidato de la izquierda. Asimismo, uno de los mensajes más compartidos en WhatsApp tras la primera vuelta decía que el Tribunal Superior Electoral (TSE) no había contado 7,2 millones de votos a favor de Jair Bolsonaro, lo que garantizaría su victoria en esta etapa electoral.

Finalmente, algunas de las desinformaciones más difundidas entre el público en general fueron aquellas que contenían cuestiones morales, como la enseñanza de pautas de género en las escuelas, la religiosidad, el ocultismo y las libertades sexuales (Dourado, 2020). Esta desinformación estaba dirigida principalmente al público más religioso y pudo haber contribuido, entre otros factores, al éxito de la campaña bolsonarista entre los votantes evangélicos (Nicolau, 2021). Vale la pena

señalar que Bolsonaro incluso publicó una de estas desinformaciones en un sábado en vivo en el periódico más visto de la televisión brasileña.

### 3.2. Personajes y métodos

Las conclusiones de los trabajos surgidos tras el período electoral dejaron clara la tendencia partidista de utilizar y compartir esta desinformación (Dourado, 2020 y 2021; Soares, 2022). El análisis de los enlaces compartidos en grupos políticos en WhatsApp durante la campaña electoral mostró cómo los grupos bolsonaristas adoptaron sitios web que producían noticias falsas e excesivamente partidistas como fuente de información, mientras que los grupos de izquierda mezclaron medios partidistas, hiperpartidistas y tradicionales en sus discusiones (Bursztyn y Birnbaum, 2019), compartiendo significativamente los enlaces de las agencias de verificación (Dourado, 2020), algo similar a lo que sucedió en las elecciones estadounidenses de 2016 (Eady *et al.*, 2019). Estos datos reiteran el surgimiento de una polarización asimétrica en la comunicación política brasileña, que se hizo evidente a partir del amplio análisis del contenido compartido por los votantes que votaron por el candidato de extrema derecha (Soares, 2022).

De esta manera, con el éxito electoral de Jair Bolsonaro, el debate público en línea fue testigo del surgimiento y estructuración de una compleja red de distribución de desinformación, corroborada por declaraciones casi diarias del presidente en entrevistas y vidas. Los casos de difusión de desinformación, dirigida a sectores de la sociedad que se oponían al gobierno, se convirtieron en algo común. Desde instituciones educativas federales hasta organizaciones no gubernamentales (ONG), que acusaron a las agencias estatales de omisión en el combate de incendios en la selva amazónica, varias organizaciones fueron atacadas por gigantescos diluvios de desinformación.

Con el tiempo, la estrategia de desinformación se ha vuelto más clara, habiéndose repetido varias veces en los últimos años. En más de un momento, se desarrolló el siguiente escenario: luego de las críticas de cierto sector de la sociedad al presidente, toda una milicia digital – parte de ella con sede en el gobierno – distribuyó desinformación favorable a Bolsonaro, o críticas a la oposición. Esta desinformación fue luego reproducida por el mandatario en sus vidas y entrevistas,

siendo acompañada de impactantes declaraciones que generaron discusiones con la propia oposición y el seguimiento de los medios tradicionales. Posteriormente, las citas presidenciales fueron criticadas y contextualizadas, reproduciendo las premisas desinformativas en las que se basó el mandatario. Al mismo tiempo, estas mismas frases y temas fueron debatidos y respaldados por canales de comunicación tradicionales alineados.

Este proceso terminó por poner la agenda pública (McCombs, 2014) en manos del presidente. Ya sea por la reproducción acrítica de los simpatizantes, el periodismo declarativo por parte de los medios (Oliveira, 2020), o la revuelta de los opositores, Bolsonaro dictó el tema que sería abordado en los diarios más importantes del país. Estos debates inocuos se conocieron como cortinas de humo. Sin embargo, dicho control de la agenda pública llegó a encontrar una barrera más fuerte con el advenimiento de la pandemia de la COVID-19.

De hecho, desde el momento en que se registraron los primeros casos de coronavirus en Brasil, Jair Bolsonaro, siguiendo – una vez más – el ejemplo de Donald Trump (Lisboa *et al.*, 2020; Carvalho *et al.*, 2021), optó por la estrategia narrativa de subestimando los riesgos de la pandemia y comenzaron a implosionar institucional y discursivamente las campañas lideradas por los gobiernos locales, que buscaban reducir la transmisión del virus a través de confinamientos y fomentando el uso de mascarillas. Lo que se vio a partir de esto fue la parcialización de las discusiones relacionadas con el origen y la gravedad de la enfermedad y su posible contención y tratamiento. Encabezados por el presidente, quien habló en televisión nacional el 24 de marzo de 2020 comparando la COVID-19 con una “gripecita”, varios *influencers*, medios de comunicación y políticos comenzaron a reproducir desinformación sobre el origen del virus SARS-CoV-2, mintiendo también sobre posibles consecuencias del uso prolongado de mascarillas y recomendando el consumo de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, sin tener base científica para ello (Calil, 2021).

Este discurso fue reproducido en varias redes sociales, siendo el núcleo duro bolsonarista el principal difusor de desinformación en línea durante la pandemia (Recuero *et al.*, 2021; Soares *et al.*, 2021). Lo que se vio, nuevamente, fue la reproducción de la polarización asimétrica a partir del intercambio de información errónea. Los estudios encontraron dos grandes grupos de intercambio

de información que no interactuaban entre sí ni en Facebook ni en Twitter. Este entorno polarizado proporcionó grandes cámaras de eco entre los partidarios de la narrativa del gobierno y sus opositores (Recuero *et al.*, 2021; Soares *et al.*, 2021).

Sin embargo, la influencia de la campaña de desinformación no se limitó al discurso. Jair Bolsonaro y sus seguidores lograron interferir directamente en las entidades profesionales, las compañías de seguros de salud y en el comportamiento de sus electores, quienes comenzaron a utilizar los medicamentos ineficaces indicados por el jefe del Ejecutivo para tratar la COVID-19.

Este efecto práctico del discurso presidencial, junto con la gran cantidad de muertes por COVID-19, combinado con la oposición masiva de científicos y medios tradicionales, así como el advenimiento de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el papel del gobierno federal durante la pandemia, inició una erosión sin precedentes de la imagen del líder de extrema derecha. Al ver la continua reducción de su popularidad, el presidente comenzó a atacar sistemáticamente al Supremo Tribunal Federal (STF), que había garantizado la autonomía de las entidades federativas (los niveles nacional, estatal y municipal del Estado) para aplicar políticas de reducción de contagios. Estos ataques reprodujeron el mencionado método de control de la agenda pública, siendo reforzado por la difusión de desinformación sobre la corte y sus ministros.

Sin embargo, el enfrentamiento escaló durante la pandemia, alcanzando niveles de crisis institucional desde el momento en que el presidente comenzó a utilizar, nuevamente, noticias falsas para atacar el sistema electoral y amenazar con violar las decisiones del STF. Este enfrentamiento entre el presidente y el STF dio origen a la llamada “investigación de noticias falsas” (Investigación N.º 4.781), en la que se indaga sobre la difusión de amenazas a magistrados de la Corte Suprema.

Sin embargo, lo que este relato deja en claro es que la desinformación en línea es solo la superficie de toda una estrategia de comunicación política efectiva, especialmente dirigida a actores previamente comprometidos. Al notar esta complejidad, la Academia comenzó a analizar los aspectos de comportamiento del electorado brasileño y los modelos lingüísticos de desinformación compartida. Estos estudios no solo catalogaron la desinformación, sino que cuestionaron, por ejemplo, la capacidad de persuasión de las noticias falsas sobre el individuo. Los

experimentos realizados apuntaron a la falta de capacidad de la desinformación para cambiar el voto de los votantes apartidistas, especialmente cuando son sometidos a un control (Pereira *et al.*, 2022). Sin embargo, la información falsa con contenido partidista presentó un potencial polarizador en los encuestados que simpatizaban con un partido específico, principalmente el PT, y en aquellos que rechazaban fuertemente el partidismo en sí mismo, los antipartidistas (ver Samuels y Zucco, 2018). Estos hallazgos indican que tales individuos tienden a rechazar la información correctiva, manteniendo la creencia errónea a favor de sus supuestos políticos (Pereira *et al.*, 2022).

Otros análisis siguieron un enfoque diferente, buscando desentrañar la estructura de desinformación compartida en las redes sociales brasileñas. Algunos estaban destinados a construir modelos predictivos, basados en el procesamiento del lenguaje natural (natural language processing, NLP), capaces de identificar información errónea basada en la estructura textual (Monteiro *et al.*, 2018). Otros estudios han encontrado características textuales específicas vinculadas a noticias falsas con contenido político. Esta desinformación, en particular, resultó ser, en promedio, más corta y sencilla en el lenguaje que la información verdadera, estando llena de términos acusatorios y nombres de líderes políticos (Melo, 2022). Estos resultados se acercan a los encontrados por Maros y otros (2021), quienes analizaron el contenido de información falsa compartida por audio en WhatsApp, encontrando más sentimientos negativos y el uso de un lenguaje directo con el oyente a través del pronombre “tú”.

Tales hallazgos presentan un escenario complejo de cara a las elecciones federales de 2022. Por un lado, la estructura de difusión de la desinformación está bien establecida, lo que genera temor en votantes y analistas. Por otro lado, sin embargo, vemos que en los últimos cuatro años la prensa, la Academia y los propios votantes han llegado a tener más contacto con campañas educativas y debates públicos sobre la estructura de difusión de la desinformación, y cómo es utilizada por sectores de la sociedad y la élite política. Esto no significa, sin embargo, que vayamos a ver estabilidad informativa durante la campaña, al contrario, es de esperar que las estrategias de 2018 se repitan a mayor escala, ya que la difusión de la desinformación estará impulsada por un mayor presupuesto contingente, y aún

puede haber una posible respuesta de otros sectores políticos, que pueden apostar por el mismo método de comunicación de la desinformación.

## 4. Conclusiones

Este capítulo tuvo como objetivo abordar la manifestación del fenómeno de las noticias falsas en Brasil guiado por el siguiente problema de investigación: ¿cómo se manifiesta el fenómeno de las noticias falsas en el país? Para ello, identificó y analizó, de forma panorámica e introductoria, los principales temas, personajes y métodos asociados al proceso de difusión de la desinformación en el contexto brasileño.

Este examen permitió verificar en qué medida las transformaciones relacionadas con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación son condiciones necesarias para la comprensión del fenómeno investigado. Los conceptos de ciberespacio, telepresencia e hipermodernidad, aplicados a cambios en términos de flujos de comunicación en entornos de difusión de desinformación, resultan claves de análisis relevantes en este sentido.

Datos relacionados a la capilaridad y penetración de internet en Brasil demuestran que el país es un ambiente propicio para la producción y difusión de desinformación como estrategia discursiva relevante en el proceso de construcción de la realidad social. Conectados permanentemente a través de dispositivos digitales e inmersos en las redes sociales y los medios digitales, los individuos de esta sociedad de ritmo frenético y marcado por la atención dispersa serían más susceptibles de convertirse en el blanco de un diluvio de desinformación, a través del cual se comparten creencias y valores, es decir, significados y cosmovisiones. Es en este contexto que han surgido y proliferado las *fake news* o narrativas alternativas, especialmente sobre política.

Las instituciones, principalmente del Poder Judicial, han mostrado un esfuerzo para combatir este fenómeno, como un acuerdo de cooperación firmado entre el TSE y el STF en mayo de 2022. El acuerdo es parte de un conjunto de acciones denominadas Programa de Combate a la Desinformación del STF, que involucra a 35 instituciones, entre colegios profesionales, universidades y empresas de tecnología.

La iniciativa se inspiró en el Programa de Lucha contra la Desinformación del TSE, hecho permanente en agosto de 2021. Cabe mencionar también las reuniones entre ministros del TSE y representantes de las redes sociales digitales (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube), sobre la iniciativa del propio Tribunal Electoral, para debatir la lógica de funcionamiento de estas plataformas durante las elecciones de 2022 en Brasil.

Por tanto, se aprecia el reconocimiento, aunque tardío, por parte de las instituciones de inspección y control sobre los impactos de la difusión de la desinformación en el país. Estas iniciativas terminan representando, en cierta medida, un contrapunto a la postura indulgente y alentadora del Ejecutivo Federal en relación con el tema.

## Referencias

- Allcott, H. y Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Batista Pereira, F., Bueno, N. S., Nunes, F. y Pavão, N. (2022). Fake news, fact checking, and partisanship: the resilience of rumors in the 2018 Brazilian elections. *The Journal of Politics*, 719419. <https://doi.org/10.1086/719419>
- Bennett, W. L. y Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge University Press.
- Bursztyjn, V. S. y Birnbaum, L. (2019). Thousands of small, constant rallies: a large-scale analysis of partisan WhatsApp groups. *2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)*, 484–488. <https://doi.org/10.1145/3341161.3342905>
- Caetano, J. A., de Oliveira, J. F., Lima, H. S., Marques-Neto, H. T., Magno, G., Meira Jr, W. y Almeida, V. A. F. (2018). *Analyzing and characterizing political discussions in WhatsApp public groups* (arXiv:1804.00397). arXiv. <http://arxiv.org/abs/1804.00397>
- Calil, G. G. (2021). A negação da pandemia: Reflexões sobre a estratégia bolsonarista. *Serviço Social y Sociedad*, 30–47. <https://doi.org/10.1590/0101-6628.236>
- Carvalho, P. R., Sousa, P. C. C. de, y Schneider, M. A. F. (2021). Desinformação na pandemia de Covid-19: Similitudes informacionais entre Trump e Bolsonaro. *Em Questão*, 27(3), 15–41. <https://doi.org/10.19132/1808-5245273.15-41>
- Castells, M. y Joscelyne, V. L. M. (2016). *O poder da comunicação* (5.º ed.). Paz y Terra.
- Castells, M. y Medeiros, C. A. (2017). *Redes de indignação e esperança: Movimentos sociais na era da internet* (2.º ed.). Zahar.
- Castilho, C. (2016, setembro 28). Apertem os cintos: Estamos entrando na era da pós-verdade. *Observatório da Imprensa*. <https://www.observatoriodaimprensa>.

com.br/imprensa-em-questao/apertem-os-cintos-estamos-entrando-na-  
era-da-pos-verdade/

- CGI.br/NIC.br. (2022). *TIC Domicílios*. Cetic.br - Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. <https://cetic.br/pesquisa/domicilios/>
- Chagas, V. y Carreiro, R. (2021). *Macarthismo no Zap: Como se comporta a rede anticomunista de apoiadores de Jair Bolsonaro* (p. 201).
- Chagas, V., Modesto, M. y Magalhães, D. (2019). O Brasil vai virar Venezuela: Medo, memes e enquadramentos emocionais no WhatsApp pró-Bolsonaro. *esferas*, 14, 1–17. <https://doi.org/10.31501/esf.v0i14.10374>
- D’Ancona, M. (2018). *Pós-Verdade: A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news* (1.º ed.). Faro Editorial.
- Datafolha. (2021, setembro 24). *Datafolha: Cai confiança da população nas instituições e nos três Poderes*. Folha de S. Paulo. <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/09/datafolha-cai-confianca-da-populacao-nas-instituicoes-e-nos-tres-poderes.shtml>
- Dourado, T. (2021). *A natureza política das fake news sobre a eleição presidencial de 2018 no Brasil* (p. 324).
- Dourado, T. M. S. G. (2020). *Fake News na eleição presidencial de 2018 no Brasil* [Tesis doctoral, Comunicación y Cultura Contemporáneas, Universidad Federal de Bahía, Salvador]. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/31967>
- Gomes, W. da S. y Dourado, T. (2019). Fake news, um fenômeno de comunicação política entre jornalismo, política e democracia. *Estudos em Jornalismo e Mídia*, 16(2).
- Gomes, W. y Maia, R. C. M. (2008). *Comunicação e democracia: problemas e perspectivas* (1.º ed.). Paulus Editora.
- Hall, S. (2020). *A identidade cultural na pós-modernidade*. Lamparina.
- Han, B.-C. (2015). *Sociedade do cansaço* (1.º ed.). Editora Vozes.
- Eady, G., Nagler, J., Guess, A., Zilinsky, J., Tucker, J. A. (2019). How many people live in political bubbles on social media? evidence from linked survey

and twitter data. *Social Media and Politics (SMaPP-Global)*. (9)1. <https://doi.org/10.1177%2F2158244019832705>

Huxley, A. y Oliveira, V. de. (2014). *Admirável mundo novo (Brave new world)* (22.º ed.). Biblioteca Azul.

IPSOS. (2016). *Índice da percepção equivocada*.

Keyes, R. (2004). *The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life* (1.º ed.). St. Martin's Press.

Lévy, P. (2010). *Cibercultura* (3.º ed.). Editora 34.

Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2010). *A Cultura-mundo: Resposta a uma Sociedade Desorientada* (1.º ed.). Edições 70.

Lisboa, L., Ferro, J. V., Brito, J. R. y Lopes, R. (2020, junho 30). A Disseminação da desinformação promovida por líderes estatais na pandemia da COVID-19. *Anais do Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade (WICS 2020)*. Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade, Brasil.

Maros, A., Almeida, J. M. y Vasconcelos, M. (2021). A Study of misinformation in audio messages shared in WhatsApp groups. En: J. Bright, A. Giachanou, V. Spaiser, F. Spezzano, A. George, y A. Pavliuc (Coord.), *Disinformation in open online media: Third Multidisciplinary International Symposium, MISDOOM 2021, Virtual Event, September 21–22, 2021, Proceedings* (p. 85–100). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-87031-7\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-87031-7_6)

Nina, N., Amir O., Ariely, D. (2008) The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance. *Journal of Marketing Research* 45(6), 633-644. <https://doi.org/10.1509%2Fjmk.45.6.633>

Martino, L. M. S. (2014). *Teoria das mídias digitais: Linguagens, ambientes, redes* (2.º ed.). Editora Vozes.

McCombs, M. y Valenzuela, S. (2014). *Setting the agenda: Mass media and public opinion* (3.º ed.). Polity.

Meirelles, F. de S. (2022). *Uso da TI - Tecnologia de informação nas empresas*. FGV/EAESP.

- Melo, U. (2022). *Feita sob medida: Estrutura de uma notícia falsa e seu papel no convencimento do eleitor* [Tesis de Maestría en Ciencia Política, Universidad Federal de Pernambuco, Recife].
- Monteiro, R. A., Santos, R. L. S., Pardo, T. A. S., de Almeida, T. A., Ruiz, E. E. S. y Vale, O. A. (2018). Contributions to the Study of Fake News in Portuguese: New Corpus and Automatic Detection Results. En A. Villavicencio, V. Moreira, A. Abad, H. Caseli, P. Gamallo, C. Ramisch, H. Gonçalo Oliveira, y G. H. Paetzold (Org.), *Computational Processing of the Portuguese Language* (11122) p. 324–334. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-99722-3\\_33](https://doi.org/10.1007/978-3-319-99722-3_33)
- Nicolau, J. (2020). *O Brasil dobrou à direita: Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018* (1.º ed.). Zahar.
- Oliveira, I. D. de. (2020). *Jornalismo declaratório* (1.º ed.). Casa Flutuante.
- Orwell, G., Jahn, H. y Hubner, A. (2009). *1984 (Nineteen Eighty-Four)* (1.º ed.). Companhia das Letras.
- Oxford University Press (OUP). (2016). *Word of the Year 2016*. <https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/>
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: How the new personalized web is changing what we read and how we think*. Penguin Books.
- Producing *Antipetismo*: Media activism and the rise of the radical, nationalist right in contemporary Brazil—Stuart Davis, Joe Straubhaar, 2020. *International Communication Gazette*. 82(1), 82-100 <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1748048519880731>
- Recuero, R. da C., Zago, G. da S. y Soares, F. B. (2017). *Mídia social e filtros-bolha nas conversações políticas no Twitter*. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/166193>
- Recuero, R. y Gruzd, A. (2019). Cascatas de *fake news* políticas: Um estudo de caso no Twitter. *Galáxia (São Paulo)*, 31–47. <https://doi.org/10.1590/1982-25542019239035>

- Recuero, R., Soares, F. y Zago, G. (2021). Polarização, Hiperpartidarismo e câmaras de eco: Como circula a desinformação sobre Covid-19 no Twitter. *Revista Contracampo*, 40(1), <https://doi.org/10.22409/contracampo.v40i1.45611>
- Resende, G., Melo, P., C. S. Reis, J., Vasconcelos, M., Almeida, J. M. y Benevenuto, F. (2019). Analyzing textual (mis)information shared in WhatsApp Groups. *Proceedings of the 10<sup>th</sup> ACM Conference on Web Science*, 225–234. <https://doi.org/10.1145/3292522.3326029>
- Resende, G., Messias, J., Silva, M., Almeida, J., Vasconcelos, M. y Benevenuto, F. (2018). A system for monitoring public political groups in WhatsApp. *Proceedings of the 24<sup>th</sup> Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, 387–390. <https://doi.org/10.1145/3243082.3264662>
- Ribeiro, M. M. y Ortellado, P. (2018). O que são e como lidar com as notícias falsas. *Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos*, 15(27), 71–83.
- Ruediger, M. A., Grassi, A., Freitas, A., Contarato, A. da S., Silva, D. C. da, Beltrão, K. I., Calil, L., Silva, L. R. da, Barboza, P. y Bastos, R. (2018). *Robôs, redes sociais e política no Brasil: Casos de interferências ilegítimas no debate público por automação de perfis* [Informe]. FGV DAPP. <http://bibliotecadigital.fgv.br:80/dspace/handle/10438/24843>
- Samuels, D. J. y Zucco, C. (2018). *Partisans, antipartisans, and nonpartisans: Voting behavior in Brazil* (1.º ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108553742>
- Soares, F. B. (2022). Systematic disinformation: The spread of misleading information as a collective dynamic on Twitter. *Brazilian Creative Industries Journal*, 2(1), 5–26. <https://doi.org/10.25112/bcij.v2i1.2884>
- Soares, F. B., Recuero, R. y Zago, G. (2018). Influencers in polarized political networks on Twitter. *Proceedings of the 9<sup>th</sup> International Conference on Social Media and Society*, 168–177. <https://doi.org/10.1145/3217804.3217909>
- Soares, F. B., Viegas, P., Bonoto, C. y Recuero, R. (2021). Covid-19, desinformação e Facebook: Circulação de URLs sobre a hidroxocloroquina em páginas e grupos públicos. *Galáxia (São Paulo)*. <https://doi.org/10.1590/1982-2553202151423>

- Statista. (2020). *Identifying false information online in countries worldwide 2020*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1227193/identifying-misinformation-difficulty-worldwide/>
- Volpato, B. (2022, maio 23). *Saiba quais são as 10 redes sociais mais usadas no Brasil em 2022*. Resultados Digitais. <https://resultadosdigitais.com.br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/>

# DESINFORMACIÓN OFICIAL Y VACUNAS COVID-19 EN ARGENTINA

ADRIANA AMADO Y NICOLÁS ROTELLI

# 3

## Resumen

*La campaña de vacunación contra la COVID-19 en Argentina es un ejemplo de cómo la desinformación puede ponerse al servicio de la campaña sanitaria oficial. Tres factores principales configuraron la estrategia de desinformación gubernamental: poca transparencia de los datos sanitarios, el foco en la propaganda más que en la información científica, y la falta de coordinación de la información de las distintas jurisdicciones.*

## 1. Introducción

El problema de la desinformación mostró en la pandemia su complejidad. No se trató únicamente de epistemologías científicas contra creencias supersticiosas, ni de información digital dudosa contra noticias tradicionales confiables. La crisis dejó en evidencia que la desinformación pone en juego múltiples factores y que no se restringen a un vehículo o a un actor. Más allá de la escala global de la crisis sanitaria y la circulación planetaria de la información, en cada país la estrategia de comunicación se cruzó con variables políticas, sociales y económicas que impactaron en cuestiones emocionales. La incertidumbre favoreció escenarios en los que el miedo fue utilizado para generar comportamientos ciudadanos en nombre de la seguridad y, en ese contexto. El desconocimiento de la amenaza facilitó la proliferación de versiones y soluciones, que la propia dinámica de la pandemia favorecía. Recomendaciones médicas que, con el correr de los días, se reformulaban, políticas públicas que variaban de país en país, declaraciones imprecisas de referentes globales eran un escenario que favorecía la proliferación de versiones alternativas.

En ese contexto, la información se convirtió en un factor esencial para la comunicación pública para legitimar las decisiones extraordinarias de los gobiernos en pandemia; pero también fue importante su contracara, la desinformación, cuando estas decisiones estaban más allá de las recomendaciones científicas o de los organismos internacionales. La desinformación es la estrategia de comunicación que

busca la erosión de la credibilidad de las instituciones y los actores que participan en la conversación en un determinado momento. No necesariamente necesita de la difusión de falsedades, sino que le alcanza con distribuir o validar contenido impreciso o inexacto para generar confusión. También es una herramienta muy usada por gobiernos autocráticos que construyen poder desde la descalificación de las instituciones y el periodismo (Armitage y Vaccari, 2021). Esto es particularmente útil cuando la posición a defender carece de validación como ocurrió con la vacuna COVID-19 comprada por Argentina al Fondo de Inversión Ruso a fines de 2020.

El proceso de vacunación contra la COVID-19 comenzó en Argentina el 29 de diciembre de 2020, cuando ya se habían reportado 43.319 muertes relacionadas a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, para el país, el año 2021 fue el de mayor gravedad medido por la cantidad de contagios y víctimas fatales. Argentina terminó 2021 con 117.169 muertes por COVID-19. A junio de 2022, el país llevaba acumuladas más de 129 mil muertes, cifra que lo ubica entre en el puesto 14.º a nivel mundial. Estos trágicos resultados en la gestión de la pandemia se siguieron de dos medidas sanitarias que tomó la administración de Argentina: una cuarentena muy extensa de 234 días en 2020, con restricciones totales a la circulación, y un inicio prematuro de la vacunación, que demoró luego muchos meses en llegar a un porcentaje relevante de la población.

Esas medidas atentaron contra derechos humanos como la educación, el trabajo, el libre tránsito. A partir de 20 marzo de 2020 el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo N.º 297/2020 estableció el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (Argentina.gob.ar, 2020a), que tuvo a lo largo de los dos años siguientes 948 medidas ampliatorias o modificatorias, sin intervención del Parlamento. La situación de emergencia que justificaba esas decisiones se prolongó más allá de lo que la mayoría de los países dispusieron y la falta de información fue funcional para justificar las excepciones.

La falta de transparencia de las decisiones de gobierno y la inconsistencia de la información se hizo patente en el proceso de vacunación, dado que, al hacerse simultáneamente en todo el mundo, se pudo comparar con los procesos en otros países. La información local se podía contrastar con la que publicaban agencias médicas, revistas científicas y medios internacionales y con las decisiones de organizaciones internacionales. Sin embargo, el gobierno insistió en versiones

que no tenían respaldo de datos o de información científica, pero que resultaban convenientes para hacer anuncios unilaterales. El giro desinformativo radicó en sostener que se apoyaba en información científica diferente de la que tenían otros países o los organismos internacionales, haciendo exaltación patriótica de independencia de potencias centrales.

## 2. La fuente oficial como agente de desinformación

La propuesta de este capítulo es analizar los motivos para la elección de esa estrategia de desinformación a partir de tres factores que configuraron un entorno legitimador de decisiones gubernamentales en contra de las recomendaciones sanitarias mundiales y en desventaja con otros países del Cono Sur más eficientes en sus campañas de vacunación. La campaña de vacunación en Argentina se caracterizó por la escasez de datos verificables y el foco en la propaganda más que en la información científica. El gobierno argentino priorizó la compra de vacunas que no contaban con la información suficiente para su aprobación por las agencias internacionales y en condiciones comerciales desfavorables.

El caso argentino ilustra la complejidad de factores que impactan en el panorama informativo en un determinado momento para que la desinformación sea posible. La información pública depende de diversos actores como empresas, organizaciones y los propios gobiernos. La pandemia que comenzó en 2020 fue una circunstancia especial que afectó a todo el mundo al mismo tiempo y permitió comparar respuestas sanitarias y comunicativas. Esto puso en evidencia que la calidad de la información no está determinada por el tipo de fuente. Hubo medios que desinformaron (Linville *et al.*, 2022), gobiernos y personalidades que dieron versiones dudosas (Brennen *et al.* 2020; Pérez-Dasilva *et al.*, 2020), y personas de bajo perfil que cobraron protagonismo desde información de calidad, como científicos y divulgadores (Amado, 2021) que aportaron saberes imprescindibles para la discusión de la pandemia. En ese sentido, considerando la distinción entre las palabras inglesas *disinformation* y *misinformation*, este capítulo se ocupará del fenómeno de la mala calidad de la información aportada por las fuentes oficiales, englobado en el segundo concepto:

Así como ofrece oportunidades para la diversidad, la comunicación pública abre oportunidades para diferentes variantes de información basadas en

distintas epistemologías. La literatura identifica la “mala información” como creencias erróneas según criterios de evidencia en ciertas áreas de experticia y la desinformación como operaciones deliberadas de propaganda para mentir y confundir (Tumber y Waisbord, 2021). La primera refleja la existencia de criterios que determinan que cierta información es falsa; la segunda explica creencias incorrectas como resultado de la desinformación perpetrada intencionadamente por actores políticos, sociales y económicos. (Waisbord, 2022)

El caso de las vacunas contra la COVID-19 puede ejemplificar cómo el manejo propagandístico de la información puede resultar en desinformación. Una tendencia detectada durante la pandemia fue que la desinformación emitida por políticos y otras figuras públicas representó el 69% del contenido total sobre el tema en las redes sociales (Brennen *et al.*, 2020). En otras palabras, era la que tenía más impacto y, por lo tanto, la que debe ponerse en foco a la hora de terminar la calidad de la información en circulación. En ese sentido, se analizarán las circunstancias en que las fuentes oficiales proveían desinformación que, al ser parcial o incompleta, restringió el derecho de acceso a la información pública a saber qué tipo de vacunas y con qué avales estaban distribuyéndose en Argentina.

La posición periférica de Argentina demoró la dispersión del coronavirus en el país. Ello le permitió al gobierno argentino compararse, durante los primeros meses de pandemia, con los países que atravesaron la primera ola. Ese triunfalismo llevó al presidente a hacer comparaciones de la gestión sanitaria con España, Suecia, Finlandia y Brasil que merecieron pedido de aclaraciones diplomáticas por las imprecisiones con las que exaltaba las decisiones de Argentina (Soria, 2020). Esa fue la primera evidencia de que la desinformación era parte de la comunicación oficial.

La baja cantidad de contagios y muertes que se informaron los primeros meses fue el argumento inicial para medidas de aislamiento muy estrictas, como una cuarentena de 243 días, a saber, 234 en 2020 y nueve en 2021 (Our World in Data). El sistema educativo suspendió las clases presenciales prácticamente por dos ciclos lectivos, desde marzo de 2020 hasta finales de 2021. La circulación en el transporte público estaba limitada a quienes fueran parte de servicios esenciales y el aislamiento con el mundo fue total. Los vuelos estuvieron prácticamente suspendidos hasta el 14 de octubre de 2020. Incluso se prohibió el ingreso al país

a los argentinos que estaban en el extranjero para la fecha de emisión del decreto de aislamiento. En junio de 2020 solo se autorizaba el ingreso de 600 pasajeros por día, número luego incrementado a 1.700 en septiembre, aún por debajo de la cuota de por sí pequeña de los 2.000 autorizados al inicio de la pandemia. No solo muchos argentinos tuvieron que pasar meses en el extranjero hasta regresar al país, sino que algunas provincias no autorizaban la vuelta a sus casas, ni siquiera con certificados de salud.

Estas medidas agravaron la situación de Argentina, haciendo más pronunciada para el país la caída económica, 9,9% del PBI según datos del Banco Mundial, a consecuencia de la pandemia en todo el mundo (World Bank, 2021). En el segundo semestre de 2020, la pobreza urbana en Argentina alcanzó el 42% de la población, con un 10,5% de pobreza extrema y un 57,7% de pobreza infantil, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

A pesar de estos datos desfavorables, el gobierno argentino mantuvo un enfoque triunfalista en su comunicación, dando a sus decisiones un tono patriótico. Bajo esa lógica, se comunicó un inicio temprano de la vacunación COVID-19 el 29 de diciembre de 2020. Sin embargo, al 31 de marzo de 2021 solo el 1,5% de la población estaba vacunado con las dos dosis, porcentaje que en Chile llegaba al 20% (Our World in Data). Con tan bajo porcentaje, los grupos prioritarios como personal médico y adultos mayores empezaron la temporada de frío sin la protección de la vacuna. Al 31 de julio de 2021, en pleno invierno austral, Chile y Uruguay habían superado el 65% de la población con dosis completas, mientras que Argentina no llegaba al 16%. Solo para inicios de 2022 la diferencia entre la primera y la segunda bajó a 12%, aunque para entonces ya se recomendaba la aplicación de una dosis de refuerzo imprescindible para enfrentar la variante Ómicron. También fue lento el proceso de la dosis de refuerzo que requieren las variantes aparecidas a fines de 2021. A mayo 2022 solo al 40,7% de la población se le había administrado dosis de refuerzo.

Esa demora en la vacunación durante los primeros ocho meses se intentó compensar con una aceleración hacia fines de 2021, en la medida en que se acercaban las elecciones de medio término. A los fines de mantener un discurso triunfalista, los porcentajes que presentaba el gobierno como logros de su gestión eran los de la población con una dosis. Sin embargo, para octubre de 2021, cuando se celebraron

las elecciones de medio término, solo la mitad de la población contaba con dosis completa. A pesar de la insistencia de que una dosis era suficiente, para esa época la vacunación completa con vacunas aprobadas por agencias internacionales eran una condición para viajar al extranjero. Esa contradicción entre una verdad a medias y los parámetros internacionales de la vacunación confirma el escenario de posverdad en que se maneja la estrategia comunicacional.

La decisión de comprar inicialmente las vacunas de Rusia y de China, sin el debido respaldo técnico ni transparencia en la contratación, aún no ha sido justificada por el gobierno. Los hechos demostraron que, más allá de las cuestiones geopolíticas, surgieron varios problemas. Las vacunas chinas, además de ser más caras, requirieron una dosis adicional debido a su baja eficacia. Por su parte, la vacuna rusa tenía dos dosis diferentes. La segunda dosis nunca fue entregada por el Instituto Gamaleya en igual cantidad a las primeras enviadas, por lo que hubo que experimentar una combinación con otras vacunas. Mientras tanto, a tres meses de iniciada la vacunación, el Ministerio de Salud tomó la decisión sanitaria de diferir la aplicación de la segunda dosis por lo menos tres meses, lo que en la práctica fue mucho más.

Argentina llegó a tener la mitad de la población vacunada apenas el 30 de septiembre de 2021. Cuando se confirmó el primer caso de Ómicron, el 5 de diciembre de 2021, el porcentaje era de 68%. Al 31 de diciembre de 2021, el porcentaje de ciudadanos con vacunación completa en Argentina era de 73,3% (Chile 86,1%, Uruguay 76,9%); pero solo el 13,52% tenía la dosis de refuerzo, mientras que en Chile 57,42% y Uruguay 44,1%. Estas cifras confirman que el país siempre fue atrás de los otros países del Cono Sur. Con la complicación adicional de tener grandes diferencias dentro de los 24 territorios provinciales. Por ejemplo, para esa fecha, provincias como Misiones, Chaco, Mendoza, Chubut rondaban en el 60% mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superaba el 94% con dosis completas.

La campaña de vacunación tardó once meses en llegar a un porcentaje de población que garantizara niveles de inmunidad colectiva. La falta de datos para comprender lo que estaba pasando y la indistinción entre información científica y piezas publicitarias del fabricante generaban imprecisiones que eran diseminadas en medios de prensa. La carencia de datos, el exceso de propaganda y la escasez de

información científica fueron tres factores en los que se potenció la desinformación oficial durante la pandemia.

### 3. Poca transparencia en la información sanitaria

El manejo de la información sobre la pandemia fue discrecional ya que, más allá de anuncios del presidente y los ministros, la información era escasa. La poca transparencia de los datos públicos es un problema en Argentina, al punto de que al inicio de la pandemia los datos más actualizados de muertes por enfermedades respiratorias eran de 2018. Esto dificultó, por ejemplo, el cálculo de exceso de muertes durante el año más crítico, con la consecuencia acontecida en otros países de Latinoamérica de subestimar el número real de muertes por COVID-19 (Inter Press Service, 2020). Eso hace sospechar que el cálculo de víctimas del coronavirus en Argentina pueda ser aún mayor del que se conoce.

La falta de transparencia de los datos significó que durante muchos meses la información proveniente de Argentina no fuera consolidada en sitios web internacionales. Los datos sanitarios no estuvieron disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud hasta julio de 2020. De la misma manera, la información de la campaña de vacunación se publicó, incluso con datos incompletos, apenas para marzo de 2021, es decir, tres meses después de iniciada en diciembre de 2020. Las inconsistencias en el registro de tests de COVID-19 determinaron que el sitio *Our World in Data* de la Universidad de Oxford, excluyera los datos de Argentina entre septiembre y diciembre de 2020. Una vez reestablecida la base de datos, los gráficos del sitio muestran un salto de 3.351 muertes el 31 de octubre 2020, en un contexto de 300 decesos diarios (Our World in Data). La misma irregularidad de incluir en un día defunciones ocurridas semanas atrás confirma el subregistro de los meses previos.

Parte de las dificultades es la ausencia de un sitio web de datos abiertos que pudieran ser consultados dinámicamente. La información abierta permite el análisis cruzado que subsana rápidamente cualquier inconsistencia. Los números oficiales del avance de la COVID-19 no fueron publicados hasta mediados de 2020. Además, el sitio web ministerial solo publicaba algunos datos totales, más un conjunto de datos (*dataset*) que fue descifrado por iniciativa de particulares.

En pocos casos, medios como *La Nación Data* brindaban consultas interactivas y gráficas con las cifras. No obstante, lo más destacable fue la iniciativa de varios ciudadanos que empezaron compartiendo gráficos en Twitter y desarrollaron luego un sitio donde publicaban actualizaciones diarias de manera accesible a las consultas. Resulta llamativo que, durante todos estos años, ninguna universidad ni centro de investigación se dieron a esta tarea, como por ejemplo hicieron la Universidad de Oxford, desde su portal *Our World in Data*, o la Universidad John Hopkins, la primera que ofreció a todos una visualización automática de los datos mundiales.

Estas dificultades de acceso a la información pública son una de las mayores diferencias con prácticas en el periodismo occidental. Apenas desde 2017 ha habido en Argentina una ley de acceso a la información pública que buscó revertir años de una cultura política del secretismo y de falta de estadísticas públicas. Sin embargo, el seguimiento a la gestión de la pandemia mostró que las dificultades persisten. Aunque la ley dispone que los datos deben ser accesibles, en muchos casos, se hace una publicación parcial o en formatos que solo pueden ser consultados por especialistas.

La escasa transparencia en la administración de las vacunas no es privativa de la pandemia de COVID-19 vivida entre 2020 y 2022. Los cuestionamientos por la mala gestión alcanzan a diversas gestiones de gobierno, más allá de las diferencias políticas e ideológicas manifiestas. Por caso, una legisladora realizó una solicitud de informes a raíz de inconsistencias entre las dosis de vacunas antigripales adquiridas por el Estado argentino y las efectivamente aplicadas entre los años 2010 y 2017 (Ruiz *et al.*, 2020).

Ante cuestionamientos a la metodología de carga y comunicación de los datos por parte del Ministerio de Salud (Costa, 2020a; Costa, 2020b), dos ciudadanos argentinos decidieron desarrollar, a partir de información del conjunto de datos oficiales (Ministerio de Salud, 2022), un sitio web abierto para analizar los datos de la pandemia: covidstats.com.ar. El objetivo que se trazaron fue analizar los indicadores y volcarlos en gráficos para que los ciudadanos, principalmente periodistas, pudieran acceder de manera sencilla al estado de la pandemia en cada provincia argentina sobre cantidad de infectados, casos sospechosos, fallecidos, entre otros datos.

Estos expertos, cuyas cuentas de Twitter son @plenque (Mauro Tiberti) y @fedetiberti (Federico Tiberti), compartieron sus informes en las redes sociales, alcanzando gran repercusión en los medios tradicionales. En uno de estos informes, por ejemplo, pudieron determinar que, entre el 16 de julio y el 7 de agosto de 2020, el 22% de los decesos contabilizados en el sistema oficial fueron ingresados 10 días después de que sucedieran (Costa, 2020a). Con su análisis, demostraron la importancia de contar con datos abiertos y accesibles que permitieron conocer el avance de la pandemia desde las redes sociales, que fueron un espacio de debate y contraste de la información gubernamental. También fue un ejemplo de cómo las fuentes ciudadanas pueden colaborar con el periodismo en temas que requieran conocimientos especializados.

Estos eventos muestran cómo la pandemia encontró al sistema sanitario sin herramientas de transparencia, a la Academia sin interés para hacer accesibles los datos y al periodismo, dependiente de la sociedad civil, situación que define el sistema informativo argentino (Amado, 2018).

### 3.1. La agencia responsable de la aprobación de la vacuna

El acceso a la información pública y la transparencia de las decisiones son factores que aportan confianza ciudadana a las políticas públicas. Esto es más crítico en procesos como las vacunas contra la COVID-19, que aceleraron los procesos de investigación y aprobación como nunca antes había ocurrido. De ahí que tanto los desarrolladores como las agencias de medicamentos maximizaron el acceso a la información y abrieron a la comunidad las audiencias de presentación de documentación de los fabricantes para la aprobación.

El Instituto de Salud Pública de Chile, por ejemplo, transmitió en directo vía *streaming* la reunión del comité de expertos que analizó la viabilidad de la vacuna para COVID-19. Lo mismo hizo la Administración de Medicinas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) en los EE. UU. con un proceso público y abierto (Minay y Rivera, 2020). En ambos casos, todos los videos quedaron publicados en los canales de YouTube y resultan una fuente de consulta sobre los detalles técnicos de las vacunas. En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), fue la institución a cargo de la evaluación de las vacunas y detalla

en su sitio web las etapas de las vacunas analizadas, indicando la información de los resultados de las Fases 2 y 3, la documentación presentada, las solicitudes de la agencia en el proceso y el enlace a los estudios científicos publicados (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2020).

En comparación con la accesibilidad de la información de las agencias de países vecinos, el sitio web de la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se limitó a publicar las resoluciones oficiales y sus correspondientes comunicados de prensa. De nuevo, un procedimiento de desinformación por el cual se dirigía a la prensa y a la ciudadanía a ese sitio web, indicando que allí estaba toda la información. Sin embargo, en la práctica lo publicado era escaso. Eso dificultaba el seguimiento del procedimiento local de aprobación de las vacunas, ya que no eran accesibles datos necesarios para conocer los avales científicos de las vacunas, las contraindicaciones y la información imprescindible se debía procurar en las agencias extranjeras.



Capturas de pantalla de la web de la agencia sanitaria ANMAT, diciembre de 2020

La difusión pública de las instancias de aprobación de medicamentos y vacunas, tan importantes para transmitir tranquilidad a la población, no existieron en Argentina. De hecho, no hubo presentaciones públicas de los funcionarios de la ANMAT, que no solo son desconocidos para la opinión pública, sino que tampoco estuvieron disponibles para los periodistas. Una captura de pantalla de

las autoridades del organismo, en la época en que se iniciaron las autorizaciones de las vacunas para COVID-19, muestra que la mayoría de ellas no tenían formación científica. Por supuesto, cuando se hicieron las designaciones, el gobierno que estaba iniciando sus gestiones. Aunque no fueron sustituidos durante la pandemia, fueron inaccesibles a la prensa, al punto de que no existen declaraciones públicas, ni en relación con sus funciones ni como parte del comité de expertos.



Captura de pantalla del Mapa del Estado (organigrama de las instancias de poder público), argentina.gob.ar, 16 de octubre 2020

### 3.2. Anuncios presidenciales sin interacción con periodistas

La falta de información oficial también se reflejó en las conferencias de prensa presidenciales, que mermaron en la medida en que aumentaban las víctimas y la crisis sanitaria empeoraba. El presidente Alberto Fernández había asumido en diciembre de 2019, con lo que la pandemia lo encontró en los primeros meses de gestión. La práctica consuetudinaria del peronismo, especialmente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003 a 2015) fue preferir anuncios en medios propios (Amado, 2014). Como no se autoriza el acceso a la prensa a los eventos, los periodistas solo comentan las imágenes emitidas por la presidencia, sin posibilidad de solicitar explicaciones; lo mismo ocurrió en pandemia. La vía alternativa son los pedidos de acceso a la información, que la burocracia puede demorar en varias semanas, sin que sea garantía de que se responda a lo solicitado.

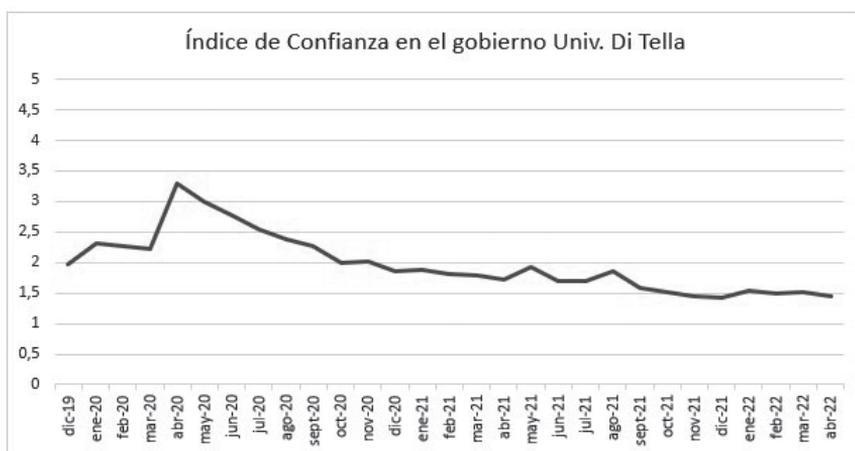
Para los primeros anuncios de cuarentena, el presidente eligió conferencias de prensa, que reemplazó luego por anuncios grabados y entrevistas personales a ciertos medios elegidos por afinidad a su administración. Según surge de una revisión del sitio web de prensa del poder ejecutivo, en sus primeros 16 meses de gobierno, el presidente Alberto Fernández concedió 15 conferencias de prensa y 95 entrevistas exclusivas. La vicepresidenta Cristina Fernández no hizo declaraciones ni tuvo apariciones durante la pandemia.

Durante 2020 se celebraron sólo cuatro conferencias de prensa específicas sobre novedades en la gestión de la pandemia. Las mismas se discontinuaron en junio de ese año, antes del pico de casos de la primera ola en octubre. Esta herramienta de comunicación, central para observar el diálogo público de funcionarios y periodistas en contextos de crisis, fue reemplazada a partir de julio 2020 por anuncios audiovisuales grabados y comunicados de prensa. Así, se perdió una oportunidad para brindar certidumbre desde la comunicación gubernamental y accesibilidad a las preguntas. No en vano, la conferencia de prensa fue la herramienta más usada por los líderes en todo el mundo.

La única comunicación estable del Ministerio de Salud durante 2020 era el reporte de víctimas y de contagios. No solo se trataba de un sombrío mensaje en momentos en que la población estaba encerrada en sus casas sino también llegó al absurdo, con el desacierto de un reporte cantado para el día de la niñez en agosto de 2020.

No puede dejar de relacionarse esta estrategia de desinformación y falta de transparencia con la rápida caída de credibilidad del gobierno en su primer año de gestión, que coincidió con la pandemia. Esta evolución se observa mediante el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella. Este instrumento evalúa la fiabilidad de la gestión de gobierno a partir de varios indicadores, en una escala que varía entre un mínimo de 0 y un máximo de 5 (Universidad Torcuato Di Tella, 2022). En el mes de marzo 2022, la confianza en el presidente Fernández se mantenía en un índice de 2,22 puntos, por encima de cualquiera de los presidentes estudiados desde 2003. Luego de las medidas iniciales para afrontar la pandemia, se produjo un pico de 3,29 puntos que fue visto como un respaldo de la sociedad en el momento más difícil. Sin embargo, ese pico de confianza tuvo una drástica caída en los meses siguientes. El índice

de diciembre 2020 fue 1,88 puntos y el de diciembre de 2021 en 1,42 al final del proceso de vacunación, muy por debajo de los valores iniciales, si bien en niveles cercanos a los de Cristina Kirchner en sus dos periodos presidenciales (2007-2015).



Fuente: Universidad Torcuato Di Tella

Más allá de las deficiencias en la gestión de la pandemia, que aún no han sido analizadas en profundidad, el resultado de la gestión deja una sociedad más escéptica y más golpeada. No puede dissociarse esta gestión de pandemia con los resultados de las elecciones legislativas de noviembre de 2021 (Osborne, 2021), en las que el peronismo obtuvo los porcentajes más bajos de los últimos años, perdiendo la hegemonía en la Cámara de Diputados, mantenida desde 1989, y permitiendo que la oposición equilibrara las fuerzas en el Senado. También demuestra que el apoyo electoral que tuvo el peronismo en este siglo no guarda relación con la confianza social.

La desinformación encuentra en los gobiernos populistas un catalizador (Armitage y Vaccari, 2022). Tanto presidente como vicepresidente atacaron a expertos y periodistas independientes, alegando parcialidad en respuesta a cualquier cobertura mediática negativa, igual que otros líderes populistas en el mundo (Newman *et al.*, 2019). Esa polarización es particularmente efectiva en sociedades donde oficialistas y opositores no logran encontrar puntos comunes. Eso

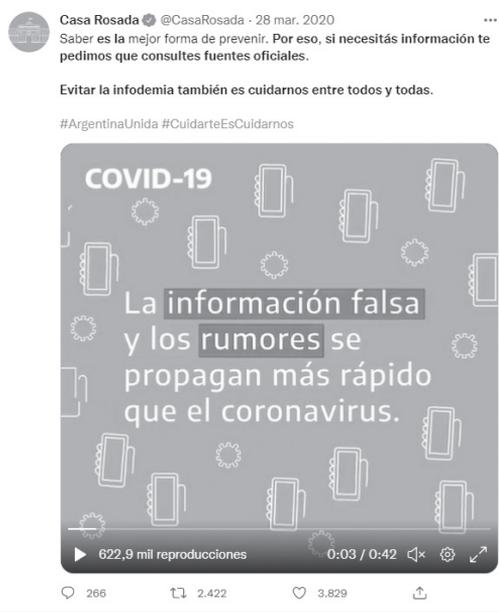
se explotaba en la comunicación presidencial, que descalificaba como antipatriótico a quien pidiera razones de las decisiones o lo acusara de antivacunas. Sin embargo, en Argentina ninguna encuesta identificara un porcentaje relevante de esa posición. Se trataba de desautorizar cualquier información que no surgiera de las fuentes oficiales y en ese juego, se genera desconfianza en las noticias en general.

No es extraño que de los 46 países estudiados por el reporte anual del Instituto Reuters para Estudios Periodísticos (Reuters Institute for the Study of Journalism), Argentina fuera el de mayor caída de interés en las noticias: la Argentina muestra la mayor caída de interés en las noticias: de 77% al 48% entre 2017 y 2022 (Newman *et al.*, 2022). Si después de la pandemia el mundo recupera levemente la confianza en las noticias (44%), Argentina sigue por debajo de esa media: 36% dice confiar en las noticias en general, por debajo de la mejor marca de 41% registrada en 2018. Comparte el podio de países con déficit de confianza, es decir, con más personas que desconfían de las noticias que las que confían: Estados Unidos (-15 puntos), Bulgaria (-12), Francia (-8), Hungría (-6), Chile (-4) y Argentina (-3). La táctica de la desconfianza de la opinión pública en las noticias que caracteriza como regímenes de posverdad.

#### 4. Propaganda en pandemia

En este contexto de desinformación, el gobierno decidió profundizar su tensión con la prensa durante la pandemia. De este modo, magnificaba un escenario de desinformación en el que sugería no creer en ninguna información que no fuera la emanada de las fuentes gubernamentales. Desde el Poder Ejecutivo, se impulsaron iniciativas destinadas a detectar desinformación y las noticias falsas, generaron controversia con el periodismo y las organizaciones que lo representan.

La campaña publicitaria oficial advertía a los ciudadanos que existía un contexto de infodemia y “Por eso, si necesitás información te pedimos que consultes fuentes oficiales. Evitar la infodemia también es cuidarnos entre todos y todas.”, y así desautorizaba otras fuentes que no fueran las fuentes gubernamentales (Casa Rosada, 2020). A pesar de que existen en Argentina dos organizaciones no gubernamentales (ONG) de *fact checking*, el Poder Ejecutivo impulsó desde dos organismos sendas iniciativas para señalar las que consideraba noticias falsas de la COVID-19.



Captura de pantalla de la cuenta Twitter oficial de Presidencia (@casarosada), marzo de 2020

En este contexto, se impulsó la creación de “Confiar”, un portal creado para combatir la “Infodemia. La epidemia informativa de la pandemia” según rezaba en su página inicial. En este sentido, la llamada Defensoría del Público, un organismo que a pesar de su nombre carece de autonomía – y es dependiente de la autoridad de control de la ley audiovisual sancionada en 2009 –, como medida adicional a su tarea de control de los contenidos, impulsó la creación de un observatorio de “la violencia simbólica y las noticias maliciosas ya emitidas” en radio y televisión (Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2020).

Este tipo de medidas tomadas con la excusa de la crisis sanitaria, son consideradas restricciones a la información y presiones a la prensa para mediciones como el índice global de la Freedom House (Shahbaz y Funk, 2020), que registró un retroceso para Argentina, a pesar del cual se mantiene en la categoría de los países libres. Las organizaciones profesionales, como el Foro de Periodismo Argentino y la Asociación de Entidades Periodísticas, expresaron su preocupación por que organismos gubernamentales señalaran cuál era la información adecuada de la pandemia.

Cabe mencionar que Argentina tiene un sistema de medios estatales muy diferente de los sistemas públicos europeos, pues el sistema de Radio y Televisión Argentina no tiene autonomía presupuestaria y sus autoridades son designadas políticamente por cada gobierno (Amado, 2014). De igual manera, la agencia de noticias Télam, desde donde se impulsó una de las iniciativas, no es equiparable a otras agencias noticiosas de gestión pública, sino que depende de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.

Los medios estatales se hacían eco de la legitimación de la vacuna Sputnik, repitiendo la información que esta publicaba en sus medios institucionales. Un ejemplo es el anuncio publicado por el presidente Fernández en Twitter al haber contraído COVID-19 a inicios de abril de 2021, siendo uno del 1,6% de argentinos que tenían las dos dosis de Sputnik V a esa fecha. La cuenta comercial de la vacuna recalzó su eficacia (no demostrada hasta ese momento por estudios científicos de fase 3 en la región) como respuesta al tuit presidencial. A su vez, el noticiero de la TV estatal argentina aprovechó el hecho para destacar que la vacuna era efectiva, sin más evidencia que el informe de la unidad médica presidencial.

**Alberto Fernández** @alferdez · 12h  
Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo.

**Sputnik V** @sputnikvaccine · 9h  
The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

**Televisión Pública** @TV\_Publica  
La Unidad Médica Presidencial confirmó, a través de un comunicado, que el test PCR del presidente @alferdez dio positivo de #Covid19. Además, informó que "el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida"

63 reproducciones

16:37 · 03 abr. 21 · Twitter Media Studio

#### 4.1. Sistemas estatales de medios

Dentro de esta concepción de la comunicación pública, el sistema de medios estatal argentino llevaba años construyendo afinidades con el sistema ruso. En la segunda presidencia de Cristina Kirchner, en 2014, RT (anteriormente Russia Today) en español fue el primer canal extranjero en sumarse a la grilla de la televisión digital, además de Telesur. Que se trataba de un sistema de propaganda y de desinformación se hizo evidente a raíz de la guerra de Ucrania de 2022. En ese momento, la Unión Europea encontró que incumplía las leyes de los operadores en cuanto a fiabilidad de la información. Para entonces, se reveló que la organización RT contaba con 200 trabajadores hispanohablantes y oficinas en Caracas, La Habana y Buenos Aires (Deutsche Welle, 2022). En Hispanoamérica, RT en español contaba con más de 3,5 millones de seguidores en Twitter, 4,3 millones en YouTube y más de 18 millones en Facebook. A raíz de la invasión rusa a Ucrania, el medio ha sido vetado en redes sociales por sus prácticas de desinformación; pero desplegó esa misma táctica durante la pandemia.

Los programas de RT Actualidad, o los de la agencia de noticias rusa en español *Sputnik Mundo* no solo contenían publicidad sobre las supuestas virtudes de la vacuna rusa, sino también diseminaban dudas con relación a las vacunas más novedosas de ARN fabricadas por EE.UU. De hecho, la vacuna rusa fue la única que tuvo una cuenta de Twitter en varios idiomas, en las que publicaba avisos y comentarios.

**Sputnik V** @sputnikvaccine · 1d  
69% of Russian doctors and medical specialists trust the #SputnikV vaccine as the most efficient and safe, compared with both Russian and international peers, according to a poll by Levada, a Russian polling agency most quoted in international media.

In terms of the safety and efficacy of different vaccines, do you trust the following vaccine producers:

	BETTER TRUST	BETTER DON'T TRUST	HARD TO SAY
Sputnik V	66%	17%	14%
CovVac	49%	34%	16%
EpiVacCorona	41%	28%	31%
Pfizer	28%	31%	41%
Moderna	20%	31%	50%
AstraZeneca	13%	45%	41%

26 232 819

**Sputnik V** @sputnikvaccine · 1d  
The Levada Center polled 1850 doctors and medical workers across Russia on March 23-29, 2021.

1 16 115

**Sputnik V** @sputnikvaccine · 1d  
Tell your friends to follow Sputnik V on Twitter! Our social media followers will be the first to be invited to get #SputnikVaccinated in Russia when the program starts.

**Sputnik V vaccination in Russia! Who's on board?**

955 3,920 10.3K

**Sputnik V** @sputnikvaccine · 1d  
Sputnik V mission is to save lives and bring back normality to everyone around the world. It's of paramount importance to us. Just to be clear, this was not an April Fools' Day joke. We are working to start this program in July.

108 278 1,581

Capturas de Twitter de la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V (@sputnikvaccine), abril 2021.

Como ya acostumbra la propaganda rusa, la producción masiva de contenidos no encuentra filtros en un ecosistema periodístico e informativo debilitado (Manfredi *et al.* 2022). El sistema de medios argentino tiene una fuerte dependencia de información proveniente del Estado, también una dependencia de financiación, que se hizo más pronunciada durante la cuarentena. La razón de ello es que la mayoría de actividades de empresas privadas, también anunciantes en los medios, estaban suspendidas. La información oficial y la inversión publicitaria estatal eran un condicionamiento que además se sumaba al temor a las represalias del gobierno y de la sociedad al decir algo que pudiera poner en peligro la salud pública. Si el gobierno emitía como oficiales los contenidos rusos que elogiaban las virtudes de la vacuna, en un momento en que era la esperanza para salir de la pandemia, era muy difícil desmentir la información gubernamental. Ello ocurría mientras las opiniones de la OMS o la Agencia Europea de Medicamentos confirmaban que no había información fidedigna para aprobar la vacuna Sputnik V.

La desinformación de fuentes extranjeras es un fenómeno con antecedentes en Latinoamérica. Un estudio de varias universidades y organizaciones de la región habla del uso de este *sharp power* – estrategias de censura y manipulación institucional en política exterior – en Argentina, Chile, Colombia, y Perú (The

Global Americans, 2021). Señalaba que los medios más activos eran RT, Telesur, *Sputnik Mundo*, y *Xinhua Español*, con muchos seguidores en las cuentas de Twitter y Facebook. Para China, Argentina es una fuente importante de materias primas clave, como soja, carne y mariscos, mientras que, para Rusia, la tibia relación del gobierno argentino con EE. UU. es de gran interés, ya que le permite a Moscú proyectar su influencia en la región.

El académico ruso-colombiano Vladimir Rouvinski señaló la cercanía histórica de la vicepresidente Kirchner con Vladimir Putin, y el impacto comunicativo:

Rusia quiere usar a América Latina como un escenario del espectáculo político, sobre todo para la opinión pública rusa, para demostrar que Rusia está de vuelta como gran potencia y que puede incluso tener influencia en zonas tan lejanas como América Latina. Los medios rusos están utilizando a América Latina como un espectáculo político.

Esto explica por qué muchos países de Latinoamérica tuvieron la posibilidad de adquirir rápidamente vacunas de Rusia y de China.

Un estudio publicado por investigadores de la Clemson University analizó la conversación sobre la vacuna rusa Sputnik V en la red social Twitter, que tuvo su pico a fines de 2020 en los países que compraron más dosis de esa vacuna: Argentina, México y Venezuela (Linville *et al.*, 2022). El estudio muestra que Argentina y Venezuela fueron los países que más promocionaron esa vacuna en su lanzamiento, especialmente desde cuentas de políticos y periodistas, más activos incluso que la propaganda rusa (7% de los tuits). La paradoja es que, a la vez que se intensificaba la promoción a través de las redes sociales, se demoraba la entrega de vacunas a estos países latinoamericanos.

Las cuentas oficiales de gobierno y los políticos argentinos fueron los responsables de una cuarta parte de todas las conversaciones sobre el tema de la vacuna Sputnik V en Twitter durante 2020 y 2021. La mayoría de los contenidos promovidos por cuentas estatales y políticos argentinos destacaban inicialmente la cantidad de dosis que había comprado el país, su llegada y detalles de cómo se estaba desplegando la campaña de vacunación nacional (Linville *et al.*, 2022). Otro porcentaje similar de los tuits (28%) fueron realizados desde cuentas verificadas, en la mayoría por periodistas. Así, puede observarse que más de la mitad de las

publicaciones en redes sociales sobre la Sputnik V fueron impulsadas por fuentes oficiales argentinas y periodistas locales. La conversación social fue en su mayoría desde el poder institucional y los medios hacia los ciudadanos de a pie.

Un ejemplo de esto es que, ante la falta de información de la vacuna que se estaba ofreciendo al personal médico y a los grupos de riesgo, el gobierno intentaba mostrar que era segura comunicando que presidente y vicepresidente se vacunaban con la Sputnik V. El primer mandatario recibió la primera dosis el 21 de enero de 2021 (Gobierno de Argentina, 2020b), mientras que la vicepresidenta lo hizo el 24 de enero (Kirchner, 2021). También, en un tono épico, se publicaban asiduamente los viajes de los funcionarios a Rusia y los vuelos de Aerolíneas Argentina que iban a buscar a Moscú las dosis.

Como punto interesante del estudio, a mediados de 2021 y ante la falta de suministro de dosis por parte de Rusia, la conversación social giró a la crítica y los cuestionamientos, especialmente desde la ciudadanía, hacia la campaña de vacunación del gobierno. Esto aconsejó retraer a los voceros políticos y poner voceros técnicos en carácter oficioso. En línea con las conclusiones del Barómetro Edelman, que mostraban que los gobiernos y los medios fueron percibidos en la Argentina durante la pandemia como actores sociales con escasa legitimidad (Edelman, 2021), el Gobierno nacional recurrió a médicos epidemiólogos para justificar las medidas.

Sin embargo, se tomó la decisión de priorizar epidemiólogos vinculados a los ensayos de vacunas en el país, por sobre otras especialidades médicas que hubieran dado una perspectiva integral al tratamiento de la salud. Ese enfoque de los asesores presidenciales avaló las medidas de restricción de la circulación, mientras que otros especialistas alertaban sobre la importancia de otros factores como los controles médicos, atención primaria de la salud, o consecuencias psicológicas de la cuarentena prolongada (López, 2020). En Uruguay, en cambio, el Grupo Asesor Científico Honorario, consultado por el gobierno durante la primera etapa de la pandemia, estuvo conformado por representantes de diversas disciplinas, procurando atender las diferentes consecuencias de la pandemia en la salud humana.

## 5. Vacunación por razones políticas más que sanitarias

La enumeración de hitos del programa de vacunación confirma que hubo inconsistencias desde el inicio que no lograron ser justificadas. La gran demora en la vacunación debilitó el principal argumento de que el gobierno argentino tuvo que salir a comprar las vacunas disponibles. Las irregularidades en el proceso se pueden observar en tres aspectos. El más delicado son las pruebas de Fase 3, en la que los investigadores buscan ver la eficacia de la vacuna y confirmar su seguridad en grandes sectores de población representativa de los países en los que se va a aplicar. De ello depende la aprobación por las autoridades sanitarias. El tercer factor son las condiciones comerciales, relacionados con los costos y la distribución. En estos tres aspectos, las deficiencias de la vacuna Sputnik V se diluyeron en un contexto de desinformación.

### 5.1. Pruebas de Fase 3 en el país

Según una investigación periodística, el gobierno compró vacunas a China, que estaba haciendo sus ensayos clínicos locales a través laboratorios de los científicos voceros del comité asesor del Ministerio de Salud (Ruiz, 2021). Los laboratorios Sinopharm y Cansino comenzaron los ensayos clínicos en Argentina en el último trimestre de 2020. Sinopharm y el Instituto Gamaleya de Rusia fueron los principales proveedores de vacunas de este país en la etapa inicial.

La vacuna Sinopharm desarrolló parte de las pruebas en Fundación Huésped, Fundación Vacunar, equipo en el que estaba Pedro Cahn, asesor presidencial, y Centros Vacunar, patrocinador local Elea-Phoenix. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, cuyas responsabilidades incluyen aprobar el uso de las vacunas en el territorio argentino, fue empleada de la Fundación Vacunar hasta abril de 2020, según registros laborales. Por su parte, Cansino lo hizo en la Fundación Dr. Mario Socolinsky-Proteger, con Eduardo López, también parte del grupo asesor.

Sin embargo, la vacuna Corminaty, desarrollada por Pfizer-Biontech, fue primera que inició los estudios de Fase 3 en Argentina, a cargo de Fernando Polack, director científico de la Fundación Infant. Las pruebas de esta vacuna se realizaron a partir de agosto de 2020 en el Hospital Militar Central, en Buenos Aires. A

pesar de que era una de las vacunas con más avales en cuanto a publicaciones científicas y haber sido la primera aprobada para ser aplicada en menores de edad, Argentina fue de los últimos países en que la adquirió. A mediados del año 2020 hubo gestiones para dar prioridad en la compra de esa vacuna a la Argentina, que luego quedaron en suspenso por un año. De hecho, la aprobación de la vacunación de niños y adolescentes con factores de riesgo se demoró hasta julio de 2021 y fue posible luego de que padres de esos niños realizaran acciones de protesta en las redes sociales, a través de grupos autoorganizados como la “Red VacunaMe” y que el gobierno de EE.UU. enviara una donación. Argentina fue el único país de Latinoamérica que no negoció ni compró vacunas a Pfizer. Esta vacuna, junto con la de Moderna, fue de las más usadas para la dosis de refuerzo en Argentina, con lo que esa compra pone en dudas la demora en la adquisición.

Para la época en que se estaban haciendo los estudios de Fase 3 en el país, el presidente Vladimir Putin anunció el 11 de agosto de 2021 que un regulador de atención médica ruso había aprobado la vacuna, antes de contar con esas pruebas. El Instituto de Investigación Gamaleya, parte del Ministerio de Salud de Rusia, lanzó un ensayo de Fase I en junio de la vacuna que llaman Gam-Covid-Vac Lyo, una combinación de dos adenovirus, Ad5 y Ad26 (de ahí, que las dos dosis fueran diferentes). Antes, en julio, el presidente de la cámara alta del Parlamento de Rusia había anunciado que el país podría comenzar la producción de vacunas para finales de año.

El primer estudio de Fase 3 de esta vacuna fue publicado en febrero de 2021 (Logunov *et al.*, 2021), aunque tuvo muchas observaciones de la comunidad científica. En esa oportunidad presentaron un análisis (Cattivi Scenziati, 2021) detallado de ese estudio el grupo conformado por Enrico Bucci (Universidad de Temple, EE.UU.), Raffaele Calogero (Universidad de Turín, Italia), Dr. Piero Carninci (Centro Rikende investigaciones médico-científicas, Japón), Pellegrino Conte (Universidad de Palermo, Italia), Dr. Andrea Grignolio, (CNR, Italia), Luigi Marchionni (Weill Cornell Medicine, EE.UU.), Dr. Angelo Parini (INSERM, Francia), Gianluca Sbardella (Universidad de Salerno, Italia). En su publicación, planteaba que el artículo de *The Lancet* que reportaba una alta eficacia y seguridad de la vacuna Sputnik V adolecía de varias deficiencias. La principal era que no había sido acompañado por los datos en los que se basaban las conclusiones.

Esto impedía una verificación de las cifras presentadas. Además, mencionan que varios investigadores que los solicitaron a los autores recibieron una negativa. La muestra tampoco representaba a poblaciones similares a las que se estaba aplicando en Argentina. Aunque reconocían que la expectativa era que la vacuna Sputnik mostrara algún grado de eficacia y seguridad, por tratarse de una tecnología probada, la objeción pasaba por la falta de comparación con otros productos y datos sólidos para su evaluación por parte de la comunidad científica.

## 5.2. Autorización de emergencia

El 22 de diciembre de 2020, la ANMAT otorgó el registro de emergencia de la vacuna BNT162b2, nombre comercial Comirnaty, distribuida por Pfizer, mediante la resolución 9210/20, incorporándola a su “registro de vacunas de interés sanitario en emergencias”. Se sumó así a las aprobaciones obtenidas para entonces en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y posteriormente en 146 países. Las otras vacunas que obtuvieron el registro fue COVID-19 ChAdOx1-S recombinante, nombre comercial COVID-19 Vacuna AstraZeneca, el 30 de diciembre de 2020, y Ad26.COVS-S (recombinante), nombre comercial COVID-19 Vaccine Janssen, el 31 de octubre de 2021.

El 24 de diciembre de 2020 se le dio autorización de emergencia la vacuna Sputnik V. mediante la Resolución 2020-2/84/APN-MS “con carácter de emergencia (...), de conformidad con las recomendaciones” de la ANMAT. Esa diferencia en la autorización se debía a la falta de los debidos antecedentes, como destacaban cuando medios periodísticos rusos por fuera del sistema oficial. Un ejemplo de ello fue la cadena TVRain, que indicaba que todavía no se habían completado los estudios de la Fase III de esa vacuna (La Nación, 2020d).

De hecho, un mes después, el 21 de enero de 2021, el comunicado que informaba la vacunación del presidente incluyó este párrafo:

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –ANMAT- estableció en el día de ayer que, por medio del informe de ampliación, la vacuna Gam-COVID-Vac se encuentra en un margen aceptable la seguridad, inmunogenicidad y eficacia para el grupo etario de mayores de 60 años. Las vacunas Gam-COVID-Vac son elaboradas en base a una plataforma probada, basada en vectores adenovirales humanos,

y requiere una segunda dosis entre los 21 y 60 días de recibida la primera dosis. (Gobierno de Argentina, 2020b)

Esa información provisoria, como ninguna posterior, no modificó la autorización de emergencia. Aunque unos meses después fue desconocida por la decisión de llevar a más de 90 días la segunda dosis. En el resto del mundo, el intervalo era entre 4 y 12 semanas; pero en Argentina, al 31 de marzo 2021, con solo el 7,45% de población que había recibido una dosis, se decidió avanzar con poner el máximo en ese momento como base. El argumento era “vacunar a más personas con la primera dosis y de esta manera favorecer el acceso al proporcionar una protección adecuada al mayor número de personas lo más pronto posible”.

Sin estudios locales y a partir de la información de las vacunas que no se estaban aplicando para entonces en Argentina, se decidió diferir la segunda dosis de las que sí se administraban mediante autorización de emergencia: Sputnik V, Covishield/ChadOx-1 y Sinopharm, a un intervalo mínimo de 12 semanas desde la primera dosis. La misma resolución daba por sentado que iban ser más. Para entonces, cuando todavía no se tenían los resultados definitivos la vacuna AstraZeneca (su variante fabricada en India Covishield/ChadOx-1 era la que se daba en el país), se estaba aplicando con una diferencia de cuatro semanas, como las de ARN de los laboratorios Pfizer-Biontech y Moderna. Estas vacunas no estuvieron disponibles en Argentina hasta 2022; pero fueron las que tenían estudios más avanzados para la época, que eran el estándar de la vacunación.

A ello se agrega que la vacunación no tuvo el mismo ritmo en las diferentes jurisdicciones ni llegó a los grupos priorizados. No solo porque hubo una vacunación irregular a funcionarios (Centenera, 2021), sino porque los escasos datos que brindaba el ministerio, aun siendo insuficientes, confirmaban que el personal de salud o los mayores de 60 años tardaron meses en recibir el esquema inicial de dos dosis.

Otro gran problema en la estrategia sanitaria fue la falta de un sistema centralizado de información. Algunos distritos cargaban manualmente los datos, lo que no permitía consultar en tiempo real el *stock* de vacunas y su aplicación. En 2022, cuando ya hay más de un 80% de la población del país con dos dosis, se aprecian diferencias enormes en la distribución entre las distintas jurisdicciones. Por ejemplo: en la Provincia de Formosa, en diciembre 2021, se distribuyeron 210.000

dosis, lo que es un número significativo frente a provincias con similar cantidad de habitantes (Instituto Geográfico Nacional, 2022) como Chubut (56.000 dosis), Neuquén (97.000 dosis) o Jujuy (21.000 dosis).

Lo cierto es que, a la fecha en que se iniciaron procesos de vacunación, no había avales científicos para el registro. La vacuna de Gamaleya no contaba con más que un comunicado de prensa de la propia empresa cuando se empezó a administrar en Argentina. Algo similar a lo que ocurrió con Sinopharm cuando se empezó a dar en niños. La ministra de Salud había declarado, en conferencia de prensa, que ya había millones de niños chinos vacunados cuando se empezó a aplicar en Argentina, cuando eso no era cierto (Huizhong, 2021).

### 5.3. Condiciones comerciales

La vacuna de Sinopharm tiene el precio más alto entre las vacunas adquiridas por el gobierno argentino. Aunque no existía información pública desde el gobierno argentino, investigaciones cruzadas permitieron estimar que el Estado desembolsó USD 20 por cada dosis en los primeros dos contratos y después el precio bajó a USD 15 por vacuna debido al alto volumen de unidades adquiridas. Esta situación no se justificó debidamente ni siquiera en solicitudes de información hechas por el Parlamento.

La escasez de información pública provocaba que durante 2021 las principales fuentes de información fueran los sitios web internacionales, como el Tablero de Vacunas de Unicef (UNICEF, 2022). El primer dato que se obtuvo es que la preferencia por las vacunas de China y de Rusia implicaba un mayor costo. Por entonces, los precios que se conocían eran: Covishield en USD 4, AstraZeneca en USD 8, Sputnik V en USD 9,95, Sinopharm en USD 20.

Esos precios fueron confirmados tiempo después por la ONG Poder Ciudadano, que desarrolló un sitio web a partir de información solicitada a entes oficiales mediante pedidos formales de acceso a la información pública. El precio final pagado por cada dosis de AstraZeneca fue de USD 4, por Sputnik V USD 9,95 y por Sinopharm USD 11.

Lo cierto es que la decisión de adquirir prioritariamente la vacuna de Gamaleya generó una consecuencia nociva en el plan de vacunación. Al ser la única vacuna con vectores diferentes para cada una de sus dos dosis, no se pudo completar su administración a muchos que habían recibido la primera dosis hasta cuatro meses o más después. El esquema de vacunación completa demoró 11 meses a llegar a más del 60% de la población y solo cuando se hicieron estudios de combinación de vacunas que permitieron suplementar la dosis inicial de Sputnik V con otras. La adquisición de la vacuna rusa trajo complicaciones en todo el mundo (Infobae, 2021) sin contar que no contó con la aprobación de organismos internacionales. Por eso, representó un problema para los viajeros en una primera etapa.

La elección de unas vacunas que no tuvieron la aprobación de las agencias internacionales fue utilizada políticamente para demostrar la alineación del partido en el gobierno a un eje geopolítico contrario a los Estados Unidos. Ese mensaje político permitía poner en evidencia los apoyos y las disidencias, por lo que sirvió como mecanismo de cohesión política. Afín con la diplomacia política de Rusia:

[L]a desinformación de Estado persigue la desestabilización de países vecinos, la injerencia electoral con el ánimo de promover candidatos y debates divisivos, propuestas de cooperación multilateral alternativas a las lideradas por la Unión Europea y Estados Unidos, entre otras iniciativas. (Manfredi *et al.*, 2022: 211).

La competencia en el mercado de las vacunas COVID-19 era el escenario ideal para traer estos actores a la opinión pública.

## 6. Conclusiones: cuando la desinformación viene del poder

El caso de la vacuna COVID-19 en Argentina ilustra otras expresiones de la desinformación que son muy nocivas en la medida en que provienen de aquellas fuentes que tienen la obligación de garantizar la información pública. La desinformación que se apoya en emociones, como fue el miedo irracional a un virus desconocido, tiene efectos fisiológicos más que epistemológicos. Se trata de comunicar un estado emocional con fines motivacionales (mover a la acción) y adaptativos (preparar al organismo para la acción) (Manfredi *et al.*, 2022). En este enfoque, la falsedad es un mecanismo psicológico eficiente para detectar facciones y mostrar cómo la ideología y los principios morales se anteponen a las evidencias (Malo, 2021). En el caso que

se analiza, esta función adaptativa de la falsedad se observa en las tres formas típicas: favoreciendo la coordinación del grupo, detectando quiénes están comprometidos con el grupo y señalando el dominio.

La desinformación tuvo varias expresiones: poca transparencia de información de vacunas, la legitimación de Rusia y China como proveedores preferenciales en contra de las vacunas de Estados Unidos, la justificación de la demora de la segunda dosis en más de seis meses contra las 8 a 12 semanas recomendadas, y la alteración de la vacunación de acuerdo al cronograma que establecía la orden sanitaria gubernamental. En este último punto se inscribe el caso de los vacunados prioritarios del grupo cercano al gobierno (que se conoció como el #vacunagate) y que ocurrió en enero de 2021, cuando el personal médico estaba esperando su vacunación prioritaria.

Para Rusia, fue una estrategia de comunicación muy efectiva para obtener resultados en su política exterior. Hizo uso de la combinación de poder financiero para producir una vacuna con tecnología que aplicaba para otras enfermedades, más un sistema consolidado de distribución de mensajes junto con la producción de contenidos legitimados desde el poder. No solo consiguió vender vacunas sin ofrecer estudios de efectividad en la población argentina o de la región, sino que, al no entregar la segunda dosis comprometida, obligó a demorar la vacunación completa en el país. A junio de 2021 se estimaban más de 6 millones de personas que habían recibido la primera dosis Sputnik V sin que tuvieran acceso a la segunda (Fitz Patrick y Cruccianelli, 2021).

En numerosas oportunidades, el gobierno hizo referencia a la desinformación y a los antivacunas. Incluso desarrolló campañas de publicidad al respecto y hasta impulsó iniciativas estatales contra lo que llamaba, indistintamente, *fake news*, por el simple hecho que venía a cuestionar las irregularidades del plan de vacunación. El discurso populista se apoya mucho en la desinformación (Manfredi *et al.*, 2022) que produce desde sus aparatos de comunicación, aunque suele presentarse como su víctima. La discusión va más allá de si se tratada de noticias simuladas en oposición a las noticias auténticas, o de la denominación que se le da a la desinformación (Rubio Nuñez, 2018). Este caso tiene relevancia para entender los riesgos en la salud y en la credibilidad política cuando la principal fuente de desinformación es el gobierno.

La desinformación es un fenómeno complejo, que está en el fondo de los sistemas de propaganda existentes mucho antes de la aparición de las plataformas digitales. Las variantes de parodia, propaganda, sensacionalismo o manipulación de imágenes existieron antes de que la tecnología pusiera su producción al alcance de cualquiera; pero la desinformación no tiene igual impacto en todas las circunstancias. La circulación de memes como burla hacia una figura pública, o una recomendación de prácticas alternativas que circulan en comunidades acotadas, no es igual que una operación deliberada de enmascarar decisiones que afectan la salud pública. La manipulación por desinformación está particularmente relacionada con el miedo, que es la motivación primera para buscar orientación. Por eso, las situaciones de incertidumbre son propicias para la proliferación de falsedades que aprovechan estratégicamente prejuicios y preconcepciones. Especialmente cuando de la amenaza no se tiene conocimiento directo, como ese virus de origen exótico.

Esta expresión de la desinformación no suele estar considerada en los verificadores, porque muchas son piezas publicitarias gubernamentales o declaraciones oficiosas de los funcionarios. Tampoco puede considerarse en los verificadores oficiales propuestos por el gobierno para combatir la supuesta infodemia que lo amenazaba. No puede dejar de recordarse que la politización de la Academia hizo que la mayoría de los científicos apoyaran la desinformación o evitaran difundir información que la contradijera (Baratta, 2021). La autoridad que emanaba del Poder Ejecutivo se impuso por cualquier epistemología científica (Waisbord, 2022).

Cuando el sistema consiente la circulación de versiones alternativas, en las que información imprecisa o deliberadamente errónea entra en competencia con información de calidad, el efecto en general causar suspicacia acerca de todo. Si a eso se suma que desde el poder se acusa como falso lo que está sustentado en evidencias a la vez que fundamenta sus decisiones en razones ideológicas sin fundamento, todo se vuelve desinformación. En un artículo para *The New Yorker*, se alude al economista Matthew Gentzkow, quien señala este efecto colateral de la exacerbación del fenómeno desinformativo:

Pero podría haber tenido un efecto mucho mayor porque nos preocupamos mucho por ello, un impacto más amplio en la confianza”, dijo. “Aunque no se expusiera a tanta gente, la narrativa de que el mundo está lleno de noticias falsas, y que no se puede confiar en nada, y que otras personas están siendo

engañadas al respecto... bueno, eso podría haber tenido un impacto mayor que el contenido en sí” [traducción libre] (Lewis-Kraus, 2022)

La posverdad es el estado de escepticismo generalizado que lleva a una sociedad a desconfiar de todo. Ante la imposibilidad de legitimar la información propia, se genera un clima de descalificación de las fuentes en general. Lo que estamos viendo en Latinoamérica es que, a diferencia de lo que se dice muchas veces, la gente cada vez cree menos. Las últimas cifras del Latinobarómetro, así como de otros reportes que investigan la confianza ciudadana, nos muestran que la gente tiene más suspicacia y que Latinoamérica es uno de los continentes con mayor escepticismo (Latinobarómetro, 2022). Precisamente, ahí está el desafío, porque el periodismo no solo tiene que recuperar confianza en su labor en una sociedad desilusionada o descreída de todo, sino que también tiene que colaborar para consolidar esa confianza social perdida.

De todas las decisiones que tomó en la pandemia, por la única que ha sido denunciado el presidente Fernández es por haber violado la estricta cuarentena de 2020 celebrando, con invitados, el cumpleaños de su pareja en la residencia presidencial. El hecho fue revelado por un ciudadano que se dedicó a revisar en 2021 las planillas de ingreso que habían sido solicitadas por una ONG. El incidente excede este capítulo; pero muestra que la salida de la desinformación es siempre la información pública abierta a la ciudadanía. Al cierre de este capítulo, en junio de 2022, el juez a cargo no había aceptado aun el arreglo monetario que el presidente y su pareja ofrecieron para evitar el procesamiento; pero el impacto social y político que significó la revelación ha sido un punto de inflexión para la comprensión de la importancia de la transparencia de la información y la participación ciudadana para reclamarla.

## Referencias

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2020). Andamento da análise das vacinas na Anvisa. Recuperado el 26/03/2021 de <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/andamento-da-analise-das-vacinas-na-anvisa>
- Amado, A. (Ed.). (2014). *La comunicación pública como espectáculo: relatos de la Argentina del S. XXI*. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung.
- Amado, A. (2018). Entre el big data y el small data. Información pública y periodismo. *Diálogo Político*, (2), 69–83.
- Amado, A. (2021, octubre). Ciencia, portavoces, ¿infodemia? *Diálogo Político*.
- ANMAT, Portal de Vacunas COVID-19. <https://www.argentina.gob.ar/anmat/covid-19-acciones/vacunas> (c. junio de 2022).
- Armitage, R. y Vaccari, C. (2021). Misinformation and disinformation. *The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism*, June, 38–48. <https://doi.org/10.4324/9781003004431-5>
- Baratta, M. V. (2021). *No esenciales: la infancia sacrificada*. Del Zorzal.
- Brennen, A. J. S., Simon, F. M., Howard, P. N. y Nielsen, R. K. (2020). Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation. *Oxford Internet Institute*. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-04/Brennen%20-%20COVID%2019%20Misinformation%20FINAL%20%283%29.pdf>
- Casa Rosada. (2020). Saber es la mejor forma de prevenir [página Facebook]. Recuperado el 28 de marzo de 2020 de <https://sw-ke.facebook.com/CasaRosadaArgentina/videos/infodemia/166068601133040/>
- Cattivi Scenziati. (2021). *More concerns on the “Sputnik” vaccine*. [https://cattiviscenziati.com/2021/02/09/more-concerns-on-the-sputnik-vaccine/amp/?\\_\\_twitter\\_impression=trueys=09](https://cattiviscenziati.com/2021/02/09/more-concerns-on-the-sputnik-vaccine/amp/?__twitter_impression=trueys=09)
- Centenera, M. (2021, febrero 19). Un escándalo de vacunas a figuras influyentes le cuesta el cargo al ministro de Salud de Argentina. *El País*. Recuperado el de <https://elpais.com/internacional/2021-02-20/un-escandalo-de->

vacunas-a-figuras-influyentes-le-cuesta-el-cargo-al-ministro-de-salud-de-argentina.html

- Costa, J. M. (2020, agosto 8) [2020a]. Coronavirus en la Argentina: las últimas tres semanas, el 22% de las muertes se computaron con más de 10 días de retraso. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-uno-cada-cinco-muertes-pais-fueron-nid2415945/>
- Costa, J. M. (2020, septiembre 26) [2020b]. Coronavirus. Buenos Aires cambió el método de registro de muertos y sumó más de 3500: ahora son 12.566. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-polemica-carga-tardia-muertos-buenos-aires-nid2461186/>
- Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. (2020). NODIO: una iniciativa de la Defensoría para fortalecer la pluralidad de voces. Recuperado el 12/10/2020 de <https://defensadelpublico.gob.ar/nodio-una-iniciativa-de-la-defensoria-para-fortalecer-la-pluralidad-de-voces/>
- Deutsche Welle. (2022, mayo). *Medios rusos en Latinoamérica: invasión versus ilusión*. <https://learnrgerman.dw.com/es/los-medios-rusos-en-america-latina-cuando-la-invasion-choca-con-la-ilusion/a-61311270>
- Edelman. (2021). *2020 Edelman Trust Barometer*. <https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer>
- Fitz Patrick Mariel y Sandra Cruccianelli (2021, 21 de juni), “Seis millones de personas esperan la segunda dosis de Sputnik y el Gobierno aún no sabe cuándo llegarán”. *Infobae*. <https://www.infobae.com/politica/2021/06/23/seis-millones-de-personas-esperan-la-segunda-dosis-de-sputnik-y-el-gobierno-aun-no-sabe-cuando-llegaran/>
- Gobierno de Argentina (2020a). *Decreto DNU 297 / 2020 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.). Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio*. Recuperado el 20/06/2022 de <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-297-2020-335741>
- Gobierno de Argentina (2020b). *El presidente y el ministro de Salud recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19*. Recuperado el 25/06/2022

de <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-y-el-ministro-de-salud-recibieron-la-primera-dosis-de-la-vacuna-contr-el>

- Huizhong, W. (2021, octubre 25). China to start vaccinating children to age 3 as cases spread. *Associated Press*. <https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-lifestyle-business-beijing-travel-4680b533429a7e3e75c6f99745b3664b>
- Infobae. (2021, julio 24). *Sputnik en falta: demoras, quejas y cancelaciones de la vacuna rusa atraviesan América Latina*. <https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/24/sputnik-en-falta-demoras-quejas-y-cancelaciones-de-la-vacuna-rusa-atraviesan-america-latina/>
- Instituto Geográfico Nacional. (2022). *División política, superficie y población*. Recuperado el 10/06/2022 de <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica>
- Inter Press Service. (2020, julio 15). *Muertes por covid-19 se subestiman enormemente en América Latina*. <https://ipsnoticias.net/2020/07/muertes-covid-19-se-subestiman-enormemente-america-latina/>
- Kirchner, C. (@CFKArgentina). (2021, enero 24). *En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás*. [tuit, enlace a la publicación] Twitter <https://twitter.com/cfkargentina/status/1353380755779407872>
- La Nación Data, en <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-detalle-infectados-fallecidos-coronavirus-argentina-nid2350330/#/> (c. en junio de 2022)
- Latinobarómetro. (2022). *Latinobarómetro Informe 2021 Adiós a Macondo*. Recuperado de <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>
- Lewis-Kraus, G. (2022). How Harmful Is Social Media? *The New Yorker*.
- Linville, D., Warren, P. y White, D. (2022). *Russian Social Media Promotion of Sputnik V in Latin America*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Logunov, D. Y., Dolzhikova, I. V., Shcheblyakov, D. V., Tukhvatulin, A. I., Zubkova, O. V., Dzharullaeva, A. S., ... Gintsburg, A. L. (2021). Safety

- and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. *The Lancet*, 397(10275), 671–681. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00234-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8)
- López, V. (2020, junio 19). Las víctimas ocultas del coronavirus en Argentina: la desatención de otras enfermedades podría dejar al menos 6.000 muertos. *Clarín*. [https://www.clarin.com/sociedad/efectos-colaterales-coronavirus-desatencion-enfermedades-podria-dejar-6-000-muertos\\_0\\_R231Z5QuW.html](https://www.clarin.com/sociedad/efectos-colaterales-coronavirus-desatencion-enfermedades-podria-dejar-6-000-muertos_0_R231Z5QuW.html)
- Malo, P. (2021). *Los peligros de la moralidad*. Deusto.
- Manfredi, J. L., Amado, A. y Gómez-Iniesta, P. (2022). State disinformation: Emotions at the service of the cause. *Communication and Society*, 35(2), 205–221. <https://doi.org/10.15581/003.35.2.205-221>
- Minay, S. y Rivera, V. (2020, diciembre 16). ISP revisará hoy permiso de Pfizer y gobierno planea vacunar entre Navidad y Año Nuevo. *La Tercera*. <https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-revisara-hoy-permiso-de-pfizer-y-gobierno-planea-vacunar-entre-navidad-y-ano-nuevo/VRG4W3NFPNCPLOLHXMZ7HH456E/>
- Ministerio de Salud (2022), Conjunto de Datos, <http://datos.salud.gob.ar/dataset/covid-19-casos-registrados-en-la-republica-argentina>
- Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A. y Kleis Nielsen, R. (2019). *Digital News Report 2019*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2619576>
- Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C., Kirsten, E. y Kleis Nielsen, R. (2022). *Digital News Report 2022*. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Our World in Data, <https://ourworldindata.org/coronavirus>. C. junio 2022.
- Osborn, C. (2021, noviembre). How Sputnik V Helped Bring Down Argentina's Peronists. *Foreign Policy*. Recuperado de <https://foreignpolicy.com/2021/11/19/argentina-elections-covid-pandemic-sputnik-v-fernandez-russia-vaccine-diplomacy/>

- Pérez-Dasilva, J.-A., Meso-Ayerdi, K. y Mendiguren-Galdospín, T. (2020). Fake news y coronavirus: detección de los principales actores y tendencias a través del análisis de las conversaciones en Twitter. *El Profesional de La Información*, 29(3), 1–22. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.08>
- Rubio Nuñez, R. (2018). Los efectos de la posverdad en la democracia. *Revista de Derecho Político*, 1.
- Ruiz, I. (2021, julio 7). Ensayos de Sinopharm y Cansino: tan cerca de la ciencia como de la política en Argentina. *Ojo Público*. <https://ojo-publico.com/2866/ciencia-y-politica-ensayos-de-sinopharm-y-cansino-en-argentina>
- Ruiz, I., Czubaj, F. y Arambillet, D. (2020, agosto 20). El Estado compró 30 millones de vacunas antigripales entre 2010 y 2017 que no se aplicaron. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/politica/el-estado-compro-30-millones-vacunas-antigripales-nid2426509/>
- Shahbaz, A. y Funk, A. (2020). *Information Isolation: Censoring the COVID-19 Outbreak*. <https://freedomhouse.org/report/report-sub-page/2020/information-isolation-censoring-covid-19-outbreak>
- Soria Guadalupe, A (2020, 28 de agosto). Finlandia se sumó a la lista de países que respondieron a dichos de Fernández. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/politica/finlandia-se-sumo-lista-paises-respondieron-declaraciones-nid2432989/>
- The Global Americans. (2021). *Measuring the impact of misinformation, disinformation, and propaganda in Latin America*. <https://theglobalamericans.org/2021/11/disinformation-latin-america/>
- World Bank. (2021). *The World Bank in Argentina. Overview*. Recuperado el 05/04/2021 de <https://www.worldbank.org/en/country/argentina/overview>
- UNICEF. (2022). COVID-19 Vaccine Market Dashboard. Recuperado el 10/06/2022 de <https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard>

- Universidad Torcuato Di Tella. (2022). *Índice de Confianza en el Gobierno*. Recuperado el 16/06/2022 de [https://www.utdt.edu/ver\\_contenido.php?id\\_contenido=1351&id\\_item\\_menu=2970](https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=1351&id_item_menu=2970)
- Vázquez, L (2022, 1 de mayo), Vladimir Rouvinski: “La relación de Putin con Cristina Kirchner es de mucha confianza y mucho entendimiento”, *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-repregunta-vladimir-rouvinski-rusia-usa-a-america-latina-como-escenario-del-espectaculo-politico-nid01052022/>
- Waisbord, S. (2022). Más que infodemia. Pandemia, posverdad y el peligro del irracionalismo. *Inmediaciones de La Comunicación*, 17(1), 31–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.18861/ic.2022.17.1.3227>



# EN NICARAGUA ORTEGA IMPONE LA DESINFORMACIÓN

LOURDES ARRÓLIGA



## Resumen

*Se describe cómo, desde el retorno Daniel Ortega al poder en 2007, en Nicaragua se ha instaurado a pasos agigantados un régimen represivo que tiene una política de comunicación agresiva en contra de los medios de comunicación independientes, a los que califica como enemigos y desestabilizadores del Estado. El gobierno sandinista impuso una estrategia de información "incontaminada" que pasa por la fabricación sistemática de información falsa, en un discurso oficial plagado de desinformación que han marcado tres momentos claves en los últimos cuatro años: el estallido de la crisis de abril de 2018, el limbo informativo durante la pandemia de la COVID-19 y el juicio por el supuesto delito de lavado de dinero que fabricó la Fiscalía General de la República en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización que durante más de 20 años promovió las libertades públicas y la excelencia periodística.*

## 1. Introducción

Cuando Daniel Ortega logró retornar a la Presidencia de la República en Nicaragua en el año 2007, luego de una cuarta candidatura y después de acomodar mediante reformas constitucionales y electorales un proceso a su medida, Rosario Murillo, la primera dama y en ese entonces nombrada vocera del Gobierno, anunció en rueda de prensa una estrategia de comunicación para que los mensajes del gobierno se emitieran de manera “descontaminada”, es decir, que toda la información estatal fluiría solamente a través de los medios oficialistas. Esta medida era apenas el atisbo de lo que sería la implementación de una estrategia de largo aliento para sepultar a los medios de comunicación independientes, mediante la censura informativa, el control mediático, la compra de canales televisivos y radios comunitarias en los principales departamentos del país, el ahogo publicitario y un fuerte componente de propaganda gubernamental para enaltecer la gestión del gobierno “socialista, cristiano y solidario”, donde “el Pueblo es Presidente”. Esto se sumaría a campañas de desinformación, la estigmatización del periodismo independiente como “desestabilizadores del Gobierno y enemigos del progreso”, hasta la aprobación en diciembre del año 2020 de un tridente de leyes que limitan el ejercicio de las libertades públicas: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial

de Ciberdelitos y una reforma a la Constitución Política que establece la pena de cadena perpetua por crímenes de odio.

En la guerra por mantener la información “descontaminada”, Ortega llama a los medios independientes “hijos de Goebbels” lo que ha marcado continuamente una política agresiva, de censura y descalificación que busca sepultarlos completamente del espectro nacional. Los periodistas críticos enfrentan persecución legal y ataques a su reputación, Ortega los califica de enemigos del pueblo y desde los medios oficiales impulsa campañas de desprestigio para desacreditar a los periodistas independientes.

En un discurso que pronunció el 2 de septiembre de 2007 con motivo de la celebración del 28 aniversario del Ejército de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega calificó como “hijos de Goebbels” a los periodistas democráticos e independientes que denuncian las arbitrariedades y los abusos del Gobierno.

Paul Joseph Goebbels fue el jefe de propaganda del Partido Nacional Socialista (Nazi) de Alemania y ministro de Propaganda del régimen nazifascista de Adolfo Hitler. Se hizo célebre por los “principios” propagandísticos que elaboró. El más conocido de esos “principios” es el de que “si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”. Lo que resulta ser una práctica constante en el discurso de Ortega y de Rosario Murillo sobre tres temas que abordaremos en este capítulo: la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, la opacidad del impacto de la pandemia de la COVID-19 y el juicio por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios Chamorro.

El control de la información pública contraviene la Constitución Política de Nicaragua. Su Capítulo II, Artículo 66, sobre los derechos políticos establece que: “Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección.” (Artículo 66, Constitución Política de Nicaragua).

Por otra parte, el artículo 49 de la Constitución establece el derecho a la organización (derecho de asociación en otras constituciones). Sin embargo, en el periodo de diciembre 2018 hasta junio del 2022, la Asamblea Nacional [Legislativo]

retiró la personería jurídica a un total de 440 ONG que no se registraron como “agentes extranjeros”, según datos de la agencia de noticias EFE.

Según el Artículo 49 de Constitución Política de Nicaragua:

En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa Caribe y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines.

En tanto, el Artículo 54 “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.” Ante lo cual, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros viola el derecho constitucional de organización.

Cada uno de estos y otros derechos políticos y sociales consignados en la Constitución Política han sido anulados *de facto* por el régimen Ortega-Murillo. Afianzados en el poder absoluto que ofrece el control mayoritario de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial, ambos logran la fórmula perfecta para promover todo tipo de disparates jurídicos que permiten sistemáticas violaciones al orden constitucional nicaragüense.

Desde su origen, el gobierno Ortega-Murillo logró edificar y consolidar un fuerte aparato de comunicación desde el que impulsó una fuerte estampida en medio de los medios de comunicación independientes. Esto vino acompañado de un sólido componente propagandístico mediante el cual día a día se impone un discurso que desvirtúa la realidad, sobre todo, la relacionada con la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018. El gobierno calificó estos eventos como un fallido intento de golpe de Estado, lo que se plantea en el presente capítulo como uno de los casos emblemáticos de desinformación gestionada desde la esfera gubernamental.

La estrategia de comunicación gubernamental se decanta por la desinformación en un intento férreo por mantenerse en el poder y en un desmedido

esfuerzo por ocultar y justificar las violaciones a las libertades públicas y los derechos humanos, que se intensificaron a raíz de la crisis de abril de 2018. La represión a las protestas sociales arrojó un saldo de 355 víctimas entre el 18 de abril y el 31 de julio del 2019, según datos actualizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH, 2021)

Los términos *fake news*, o divulgación de noticias falsas, los ataques al periodismo independiente y a la oposición se mantienen como una constante en los medios oficialistas. En un artículo del 26 de julio del 2021, Víctor Manuel Díaz, un columnista del medio oficial *El 19 Digital* dice:

La prensa mundial adocenada sigue en la divulgación de noticias falsas sobre lo que ocurre en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ese es el mecanismo que han encontrado, heredado de Joseph Goebbels, ministro fascista de Hitler. Sin embargo, la realidad es otra. (El 19 Digital, 2021)

En consistencia con el discurso presidencial, plantea que hicieron una “campaña feroz contra Nicaragua, desde dentro y desde fuera” en referencia a la información publicada sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 y al encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia de la República en las elecciones de noviembre de ese año. Ortega recurre constantemente a la misma retórica en sus discursos y en las pocas entrevistas que ha brindado a medios internacionales:

Los de dentro con el escudo de ONG financiadas por Estados Unidos, al inicio de la pandemia: mostraron fotos de fallecidos en las calles que correspondían a otras latitudes, principalmente a Ecuador. Luego a raíz de haber puesto en el banquillo a los líderes de esas ONG, que actúan de manera traidora a su país, han enfatizado que en Nicaragua se persiguen a los opositores, que se tiene en la cárcel a otros siete candidatos presidenciales, que los presos no tienen derecho a la defensa, que esto y que lo otro. La verdad es que los investigados, incluida Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro e integrante del clan Chamorro que ha gobernado a Nicaragua desde hace mucho antes de [William] Walker...

## 2. La desinformación como estrategia política-ideológica

Antes de exponer los elementos presentes en la construcción de las denominadas *fake news* en Nicaragua y la intencionalidad política ideológica que

los impulsan, partiremos de algunos conceptos básicos que permitirán entrelazar los acontecimientos relacionados a este fenómeno.

En primer lugar, como expresó María Concepción Estrada García, docente en la Licenciatura de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la presentación del estudio *Verificación versus Noticias Falsas. La Contienda por la Veracidad de la Información en la Era de la Post Verdad*, producto de un esfuerzo del Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Panamericana y el Observatorio de Medios de la FES Aragón UNAM (2021), dentro del ecosistema de comunicación es erróneo usar el término *fake news*.

“Desde el periodismo la noción que tenemos de noticias son narraciones de hechos reales que podemos verificar, que son de interés colectivo para la sociedad...” Sin embargo, las llamadas *fake news* tienen una traducción literal de “noticias falsas”, ante lo cual es erróneo adoptar el término noticias falsas porque “es una traducción errónea, puesto que noticias falsas no compete a la cuestión informativa verídica”, siendo que desde el periodismo las fuentes informativas proporcionan información que puede ser verificada o no.

El doctor José Luis Aguirre, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y coordinador del estudio, reiteró no estar de acuerdo con la definición de noticias falsas. Añadió que, al hacer una revisión de la literatura, noticia falsa es incongruencia porque, en los manuales de periodismo “la definición de noticias es un suceso verídico, es información trabajada de forma clara, que aborda hechos actuales; una serie de atributos que no define la noticia falsa”. Por eso, cuando se habla de desinformación o la falsedad de la información, es información engañosa, que no está sustentada ni corroborada.

Para efectos de lo que acontece en Nicaragua, se utilizarán los términos ‘desinformación’ o ‘información engañosa’, como parte de la estrategia política-ideológica de la pareja presidencial Ortega-Murillo para perpetuarse en el poder y en un intento de ocultar e incluso justificar el recrudecimiento de las violaciones a las libertades públicas y a los Derechos Humanos. También los emplearemos para referirnos a sus prácticas de recurrir a la propaganda política y a diseminar desinformación desde los medios oficialistas tradicionales (televisoras y

radioemisoras) que, dicho sea de paso, son los únicos con cobertura nacional para imponer un discurso partidario. En Nicaragua, la mayoría de los canales televisivos son administrados y controlados por los hijos de la pareja presidencial: Canal 2, Canal 4, Canal 6 (estatal), Canal 8, entre otros que tienen cobertura nacional, así las principales radioemisoras nacionales y decenas de radios comunitarias. También tienen presencia en sitios web como *El 19 Digital*, que se describe a sí mismo como un portal de noticias de Nicaragua, cuando se trata de un medio propagandístico y vocero del gobierno Ortega-Murillo. Además, en los últimos cuatro años, el régimen ha articulado una red de *trolls* para hacer circular propaganda gubernamental desde las principales redes sociales y para atacar los sitios web de medios independientes.



- El estallido cívico de la crisis de abril de 2018;
- La “ausencia” de la pandemia de COVID-19 – ocultamiento de cifras de víctimas –;
- El juicio por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios Chamorro.

## 2.1. El estallido cívico de la crisis de abril de 2018

En abril de 2018 el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunció reformas al sistema de seguridad social que desembocaron en una serie de manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega. Después de muchos años, el 18 de abril en las inmediaciones de Camino de Oriente, Carretera Managua-Masaya, estudiantes universitarios lideraron las protestas conocidas como El Estallido de Abril, con una serie de marchas que se extendieron los días 19 y 20 de abril. A ellas se sumaron civiles sin denominación política, donde prevalecía la bandera azul y blanco como símbolo de protesta del Movimiento Autoconvocados,

que inundó las principales arterias viales de la capital Managua, y que además se realizaron en las principales ciudades departamentales.

En Managua, la capital, como símbolo de las protestas se derribaron los ‘árboles de la vida’, popularmente conocidos como ‘chayopalos’, árboles de latón instalados en las principales avenidas de toda la ciudad y que son símbolos del esoterismo y del imponente poder de Murillo en el gobierno. La respuesta del régimen no tardó en llegar a través de la represión policial. Se comenzó por disparar balas de salva a estudiantes atrincherados en las principales universidades del país: la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la UNAN-León, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre otros recintos. Varios de ellos perdieron un ojo. Posteriormente, la represión policial escaló y cayeron las primeras personas asesinadas con disparos precisos a puntos como la cabeza, el corazón, el tórax que, de acuerdo a lo expresado por expertos forenses, correspondían a disparos realizados por francotiradores con armas de alto calibre, como quedó en evidencia en la investigación periodística “¡Disparaban con precisión: a matar!” realizada por Wilfredo Miranda.

El 30 de mayo, cuando se celebra en Nicaragua el Día de las Madres, fue el día más sangriento. El Movimiento Autoconvocado organizó marchas en Estelí, Chinandega, Masaya y Managua en apoyo a las madres de hijos asesinados en abril. En Managua, la marcha inició en las inmediaciones de la Rotonda Jean Paul Genie, avanzó hacia la Rotonda Metrocentro; pero antes de llegar al punto final de la concentración, una tarima alzada en la Avenida Universitaria, francotiradores ubicados en el Estadio Nacional Denis Martínez abrieron fuego, dejando un saldo de más de 60 personas asesinadas, la mayoría de ellos jóvenes. Fue denominada ‘la madre de todas las marchas’, por la enorme concurrencia; pero pasó a la historia como la masacre orteguista contra las madres nicaragüenses.

El saldo fue de 19 personas fueron asesinadas ese día: ocho en Managua, siete en Estelí, tres en Chinandega y uno en Masaya. Para ese momento, los fallecidos ascendían a 109 desde el inicio de El Estallido de Abril, es decir, en menos de dos meses.



En León, el 20 de abril, el equipo de la independiente Radio Darío alcanzó salir con vida, luego de que un grupo de simpatizantes del gobierno incendiaran las instalaciones de la radioemisora. Su director, Aníbal Toruño, junto con su familia, tuvo que exiliarse ante las constantes amenazas de muerte y hostigamiento. El 27 de abril asesinaron al periodista Ángel Gahona, mientras realizaba una transmisión en Facebook Live de una protesta en la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe. Es un caso que aún permanece en la impunidad.

El 20 de diciembre de 2018, después de meses bajo asedio policial por mantenerse firmes informando sobre la crisis sociopolítica, agentes policiales allanan el Canal 100% Noticias, toman sus instalaciones y se llevan detenidos a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, el director y jefa de prensa del canal, respectivamente, quienes después de 172 días de prisión fueron liberados. En tanto, el canal fue confiscado y convertido en una clínica gubernamental para atender adicciones. Igual sucedió con el edificio donde operaban los programas televisivos *Esta Semana*, *Esta Noche*, y las salas de redacción de *Confidencial* y *Niú*, dirigidas por el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro. Todas estas instalaciones fueron allanadas por la Policía Nacional, confiscadas y finalmente adjudicadas al Ministerio de Salud (MINSA).

En tanto, las radioemisoras y canales locales con frecuencia denuncian daños a sus antenas de transmisión y robos de equipos, que las mantienen fuera del aire por horas y días. Asimismo, registran presencia de patrullas policiales frente a sus instalaciones y grafitis en sus paredes con palabras como “golpistas”, “plomo”, “muerte” entre otros descalificativos y amenazas.

La Dirección General de Aduanas (DGA) ordenó el bloqueo de insumos para impresión de periódicos. Por esto, *El Nuevo Diario* (END) lanzó su última edición impresa el 27 de septiembre de 2019, después de más de un año de bloqueo de materiales como papel, tinta y otros insumos para la impresión del periódico. El diario *La Prensa* logró sobrevivir al bloqueo, aunque tuvo que reducir su impresión

impresa a ocho páginas hasta que, el 12 de agosto del 2021, anunció que dejaría de circular en físico y solo mantendría su versión digital. La madrugada del viernes 13 de agosto, la policía allanó el edificio de este rotativo y, bajo engaño de brindar declaraciones, se llevó y dejó encarcelado en las celdas de El Chipote a Juan Lorenzo Hollmann Chamorro, gerente administrativo de *La Prensa*. Posteriormente, fue enjuiciado y declarado culpable el 31 de marzo del 2022 por el supuesto delito de lavado de dinero y sentenciado a nueve años de cárcel más una multa millonaria.

En el 2018, más de 70 periodistas y directores de medios independientes tuvieron que exiliarse para resguardar su integridad física y la de su núcleo familiar. Nacieron distintos medios en línea desde los cuales continúan realizando el derecho a informar. Después de la investigación que promovió la Fiscalía General de la República en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) por el supuesto delito de lavado de dinero, más de 50 periodistas independientes fueron citados en calidad de testigos, en interrogatorios donde les amenazaron con aplicarles la Ley de Cibercrimitos. Esto produjo una nueva oleada de exiliados: 68 periodistas entre junio y diciembre del 2021, para un total de más de 130 exiliados, según datos de la organización gremial Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN).

## 2.2. Ortega insiste en intento de golpe de Estado

Mientras la CIDH y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), instaurado por la Organización de Estados Americanos (OEA), alertaron a la comunidad internacional sobre la crisis política en Nicaragua y presentaron el 22 de junio del 2021 el informe final, *Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua*, en el que documentaron el listado preliminar de las personas fallecidas. Ortega tomó su tiempo para intentar lavar la cara del gobierno en entrevistas que concedió a medios internacionales en las cuales no reconoció las cifras de las personas asesinadas. Alegó que la mayor parte de víctimas habían sido partidarios sandinistas, y que todo se trató de un fallido golpe de Estado.

En julio, en una entrevista con *Euronews*, calculó en 195 las personas asesinadas y dijo que la mayoría de las víctimas habían sido sandinistas:

Lo que hemos tenido ahora es un intento de golpe de Estado, eso es lo que hemos vivido, lo que ha sufrido el pueblo. Y quiero aclarar para la audiencia de *Euronews*, que dicen 100 días, 300 muertos ya, no... Son cifras que no son ciertas. Las cifras reales de estos enfrentamientos que se han venido desarrollando, se desarrollaron del 19 de abril, ya fue el enfrentamiento violento entre la oposición y el gobierno, y la policía y la población sandinista, da como resultado 195 fallecidos. Y estamos hablando de policías, de sandinistas, de paramilitares y de población civil que fue afectada en los tranques [...] (*Euronews*, 2018)

En septiembre de 2018, en entrevista para *DW Español*, el presidente Ortega responsabilizó a grupos contrarios al gobierno de las muertes ocurridas en las manifestaciones y consideró que hay un sector “golpista” integrado por partidos políticos, el clero y los estudiantes. Dijo Ortega:

El 18 de abril se logró poner en práctica con una fuerza mucho mayor el plan de los Estados Unidos de destruir el proyecto, lo empezaron a tratar de destruir desde que nosotros llegamos nuevamente al gobierno en el 2007, empezaron a trabajar para destruir, se empezaron a armar grupos donde eran presentados por la oposición [...] (*DW*, 2018)

Ese mismo mes, le dijo a Andrés Oppenheimer, de *CNN Español*, que los datos de personas fallecidas publicados por los organismos internacionales de derechos humanos “no han sido depurados” y que Paulo Abrão, en ese entonces presidente de *CIDH*, mintió en sus informes. Aseguró Ortega:

Estos datos que se manejan a través de algunos organismos de derechos humanos, incluyendo la *CIDH*, no han sido depurados, no han sido verificados, simplemente son denuncias que ellos han recibido y van sumando, sumando. Los datos oficiales que tenemos nosotros, que no es poca cosa tampoco, son 195 fallecidos como resultado de estos enfrentamientos. Entre los fallecidos tenemos trabajadores por cuenta propia, policías, estudiantes, obreros, trabajadores del Estado, maestros, guardas de seguridad

[...]

Él miente, se ha dedicado a estar haciendo una labor de comunicación que no va con la responsabilidad que tiene como director de esta Comisión. Esta Comisión tiene que investigar y luego que investigue, que depure la información, llegar a conclusiones, pero él llega a conclusiones simplemente por lo que escucha, por lo que le llega

[...]

Aquí ha entrado en juego la guerra a través de las redes, una guerra nueva, que nosotros desconocíamos, que la estamos viviendo hasta ahora y que fue organizada a través de las agencias de los Estados Unidos preparando a la gente para este tipo de guerra, porque siempre hemos estado en la mira de la política norteamericana (CNN en Español, 2018)

Al mostrarle Oppenheimer fotografías de encapuchados (paramilitares) con banderas del Frente Sandinista, Ortega alegó: “La gente, para poder defenderse, porque los estaban asesinando, lo que han hecho es organizarse para defenderse, y eso no es ser paramilitar, coordinando su labor para la defensa de la vida...”. El intercambio entre ambos se desenvuelve así:

**Oppenheimer:** *¿Usted está diciendo que esta gente que estamos viendo en esta foto son paramilitares... ?*

**Ortega:** *No son paramilitares, no son paramilitares.*

**Oppenheimer:** *¿Qué son?*

**Ortega:** *Son ciudadanos defendiéndose.*

**Oppenheimer:** *¿Defendiéndose con AK 47?*

**Ortega:** *Y luego yo no sé si esta foto es una foto real, porque vos sabés que en estos tiempos se hacen montajes. Puede ser que esta foto haya sido armada por la misma gente de la derecha. Es fácil meter banderas del Frente Sandinista y luego presentar la toma como que es un grupo paramilitar.*

### 2.3. Un tridente de leyes impone el Estado Policial

El control del aparato represor, por parte de cuerpos como la Policía Nacional y las fuerzas militares, el control parlamentario y el uso desmedido de la violencia paraestatal se combinan en un cóctel perfecto, imponiendo un Estado Policial de constante vigilancia y persecución política a toda persona considerada adversaria al gobierno. El partido en el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuenta también con una mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional, lo que les ha permitido promulgar leyes que violentan el marco universal de los derechos humanos, la Constitución Política de Nicaragua y leyes relacionadas a la participación ciudadana, el acceso a la información pública, entre otras.

En diciembre del 2021, los diputados sandinistas aprobaron el ‘tridente de leyes’ que imponen la censura, el terror mediático y la persecución política a personas naturales y jurídicas que adversen las políticas del gobierno.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros criminaliza la actuación y los aportes a la construcción democrática de las organizaciones, asociaciones, personas naturales o jurídicas, medios de comunicación independientes, clasificándolos como “agentes extranjeros”. También enmarca la cooperación internacional como intervencionista y una amenaza para la seguridad del Estado. Con ello, Ortega ha sepultado toda iniciativa ciudadana que promueva la democracia. La ley obliga a las personas naturales y jurídicas a registrarse “voluntariamente” como agentes extranjeros, e impone sanciones administrativas de hasta USD 500 mil, así como procesos civiles y penales para quienes incurran en algún incumplimiento de la misma.

En el Artículo 1 de la Ley contra los Ciberdelitos en Nicaragua, se declara su propósito:

La presente ley tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta ley.

Esta ley se convirtió en un brazo represor no solo contra periodistas independientes, sino también contra ciudadanos comunes que publiquen críticas al gobierno a través de las redes sociales. El cronista deportivo Miguel Mendoza, quien desde su cuenta de Twitter se mantuvo activo denunciando las arbitrariedades del régimen Ortega-Murillo, fue encarcelado en junio de 2021. En febrero de 2022 fue condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Lo más peligroso de esta reforma y de la posterior ley que la desarrolle, serían los jueces y tribunales que la vayan a aplicar. Ya sabemos que son

jueces y tribunales que desafortunadamente obedecen más a criterios políticos partidarios que a criterios legales. (Despacho 505, 2021)

Álvarez planteó que, antes de ser aprobada en primera discusión por los diputados, la reforma debió haberse sometido “como mínimo a una verdadera consulta amplia, plural, democrática y no a hacer esos procedimientos pseudoconsulta”. Añadió que, en la Constitución Política de la República, existen disposiciones que podrían impedir la aplicación de la cadena perpetua, como por ejemplo la que consagra el concepto de la reinserción social del reo, así como la prohibición de penas y tratos crueles, preceptos en conflicto con una pena de prisión de por vida (*Ibidem*).

Aunque el delito de crímenes de odio no está tipificado en el Código Penal ni en la Constitución Política, en diciembre del 2020 el gobierno apresó y mantuvo en prisión durante 172 días a los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora de Canal 100% por supuestamente promover “odio” al informar constantemente sobre la crisis política de abril 2018.

### 3. La pandemia de la desinformación durante la COVID-19

En diciembre del 2019 se detectó la presencia del virus SARS-CoV-2 (causante de la COVID-19) en la ciudad de Wuhan, Provincia Hubei, China. El 30 de enero, la OMS declara a la COVID-19 una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentaron afecciones respiratorias de leves a moderadas, que no cuentan con un tratamiento especial. Si padecen de condiciones crónicas (cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, entre otras), tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad grave. Por esto, las personas que contraen el virus tienen la posibilidad de enfermar gravemente o morir.

La OMS recomienda métodos para contener y mitigar la transmisión de la COVID-19, como guardar una distancia mínima de uno o dos metros de las demás personas, usar mascarillas bien ajustadas, lavarse las manos, usar desinfectantes como alcohol, etc. En febrero del 2020, gobiernos de diferentes países impusieron cuarentenas para evitar aglomeraciones y la infección de las personas, también implementaron protocolos de seguridad. El 11 de marzo, la OMS declaró la

COVID-19 como una pandemia mundial; los gobiernos optaron por incrementar medidas: declararon estados de emergencia, suspendieron las clases, restringieron el ingreso al territorio nacional para extranjeros, entre otras. (WHO, 2020)

En Nicaragua, el 18 de marzo el MINSA reportó el primer caso de contagio de COVID-19. Dos días después, el 20 de marzo, la Vicepresidenta Rosario Murillo anunció el segundo caso confirmado de COVID-19 de una persona que había viajado a Colombia, destacando que el paciente era portador del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). Apuntó Murillo en la lectura del comunicado de ese día:

Reiteramos que aquí la condición de mayor vulnerabilidad es su diabetes, junto a la hipertensión y junto al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o Sida-VIH, eso lo hace más vulnerable y puede ser más grave, incluso más difícil recuperación, Dios mediante que se pueda recuperar, así que nuestras plegarias, nuestras oraciones por esta familia, por esta persona y seguimos en comunicación. (El 19 Digital, 2020)

Posiblemente en Nicaragua jamás se logrará conocer la magnitud exacta de la pandemia. La insólita respuesta gubernamental ante ella provocó picos de contagios en distintos momentos, según reportes del Observatorio Ciudadano COVID-19, elaborados por médicos independientes para levantar estadísticas de casos sospechosos y decesos. A un año del primer caso anunciado de manera oficial por el MINSA, los datos del Observatorio Ciudadano, con 13.237 casos sospechosos y 3.002 muertes, distaban muchísimo de los oficiales. Sin embargo, el MINSA reportaba 50,6% menos personas contagiadas y un 94,2% menos de fallecimientos (FUNIDES, 2021). De este modo, Nicaragua figura en las estadísticas de la OMS como el país que ha reportado menos contagios y víctimas por COVID-19.

Nicaragua enfrentó esta pandemia sin haber superado la crisis sociopolítica de abril 2018 y el impacto económico que representó para diferentes sectores sociales. Mientras las organizaciones civiles y los medios de comunicación se pusieron al frente con campañas educativas de prevención para contener la curva de contagios, el gobierno concentró sus esfuerzos en esconder las cifras, minimizar el impacto de la pandemia y atacar al periodismo independiente.

Una vez más, el gobierno no dudó en usar la garra del sistema judicial para acallar medios independientes. El periodista Sergio León, director de Radio

La Costeñísima en Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), fue citado judicialmente por injurias y calumnias luego de denunciar desde los micrófonos de la radio la indolencia de las autoridades públicas ante la propagación del virus en la Costa Caribe, una de las zonas más empobrecidas de Nicaragua, con alta concentración de población indígena y afrodescendiente. León y su equipo periodístico contaban en ese entonces con medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que ello significase protección alguna por parte del gobierno. Al contrario, fue objeto de persecución, amenazas, acoso e intimidaciones constantes por simpatizantes del gobierno y agentes policiales. León no pudo asistir al citatorio porque enfermó de COVID-19, lo que provocó su muerte el 14 de junio del 2020.

### 3.1. El supuesto lavado de dinero de la FVBCH

El anuncio del cierre de operaciones de la FVBCH, el 5 de febrero del 2021, como una decisión por no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros – una ley inconstitucional y violatoria de todo derecho de asociación – representó un duro golpe para el periodismo independiente como también un grave retroceso en materia de libertad de expresión, libertad de información, libertad de organización, entre otros derechos consagrados en la Constitución Política de Nicaragua y en convenios internacionales ratificados por el Estado nicaragüense.

Durante veinte años, la FVBCH promovió la democracia, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas por el bien común, también la excelencia en el periodismo como pilar fundamental de la democracia. En consecuencia, la naturaleza de una Ley de Agentes Extranjeros, que procura paralizar el funcionamiento de organismos considerados por el gobierno Ortega-Murillo como críticos y adversarios a sus lineamientos, contraviene los principios fundamentales de derechos humanos, la libertad de pensamiento, la democracia y el Estado de derecho. Por otra parte, cierra todas las posibilidades de que las organizaciones que trabajan en la promoción de la democracia puedan trabajar en libertad.

En su avance por demoler la institucionalidad democrática en Nicaragua, el 20 de marzo del 2021 la Fiscalía General de la República promovió un juicio por el supuesto delito de lavado de dinero en contra de la FVBCH. Durante esta

investigación, más de 50 periodistas y directores de medios de comunicación fueron entrevistados en calidad de testigos sobre cómo operaba el supuesto lavado de dinero desde la fundación, a la que el gobierno considera como una de las organizaciones responsables de un presunto intento de golpe de estado fallido en 2018.

Los fiscales amenazaron a los periodistas con aplicarles la Ley de Ciberdelitos por las publicaciones que revelan la corrupción del gobierno de Ortega y las denuncias constantes de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Ortega, divulgadas por periodistas como Wilfredo Miranda (*Divergentes*), Octavio Enríquez (*Confidencial*) y Fabián Medina (*La Prensa*), todos reconocidos por investigaciones periodísticas y posiciones críticas al gobierno. Otros fueron sujeto de asedio policial como José Adán Silva, director de Literal, una plataforma educativa desde la cual se promueve el periodismo ciudadano. Después de rendir sus declaraciones en la Fiscalía, Silva fue interceptado por policías cuando se dirigía a buscar su vehículo en compañía de su abogada.

El constante acoso policial y las campañas de difamación que circularon en los medios progubernamentales y en las cuentas de redes sociales manejadas desde organismos del Estado provocaron una nueva ola de periodistas exiliados. Entre junio y diciembre 2021, salieron 68 periodistas rumbo a Costa Rica, Estados Unidos y España, entre otros países; la mayoría por ‘puntos ciegos’, puestos fronterizos irregulares. La razón para ello fue que se decomisaron los pasaportes a algunos que buscaban salir de Nicaragua por aeropuerto y/o vía terrestre, sin explicación alguna del porqué de esta medida. La PCIN contabiliza más de 130 periodistas exiliados. La primera ola corresponde a los 70 periodistas que se exiliaron luego de El Estallido de Abril de 2018; algunos de ellos se volvieron a exiliar en 2021.

En un primer momento, la Fiscalía acusó a Cristiana Chamorro Barrios, Exdirectora de la FVBCH, Walter Gómez (Administrador) y Marcos Fletes (Contador). Posteriormente, mandó citar como testigos a otros ex colaboradores: Guillermo Medrano (Especialista en Derechos Humanos), esta autora, Lourdes Arróliga (Especialista en Medios), quienes junto a la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión y consultora de la fundación, fueron convocados a entrevista el 25 de mayo del 2021. Al negarse a entrar a declarar sin la compañía de una abogada, quedaron como imputados en el juicio. En un nuevo citatorio, el 28 de mayo, comparecieron nuevamente ante la Fiscalía, enterándose de que, sin

orden judicial, les habían congelado sus cuentas bancarias y que tenían orden de restricción migratoria. Otra imputada en la causa es Ana Elisa Martínez, directora del Programa de Medios (PMN). Los tres exfuncionarios y la periodista Delgado se exiliaron para resguardar su integridad física.

Ese 28 de mayo, la policía secuestró a Marcos Fletes mientras se desplazaba por una calle de Managua, y horas después un contingente policial allanó la casa de Walter Gómez; ambos fueron trasladados a las celdas de El Chipote donde los mantienen aislados e incommunicados con sus familiares, que en pocas ocasiones han podido verlos. El 2 de junio, en un impresionante operativo policial allanaron la vivienda de Cristiana Chamorro, quien ya había cumplido más de un año bajo arresto domiciliario. Todos fueron procesados en juicios plagados de irregularidades, en audiencias improvisadas, de las cuales se notificó a sus abogados con pocas horas de anticipación, y tuvieron apenas media hora para poder conversar con los acusados.

Las arbitrariedades en el proceso estuvieron a la orden del día en cada etapa. Pedro Vásquez, el chofer de Cristiana Chamorro también fue citado como testigo; pero días después sus familiares comunicaron que no lograron localizarlo, enterándose posteriormente que estaba detenido en las celdas de El Chipote, donde aún se mantiene en prisión.

Entre las víctimas del régimen Ortega-Murillo, encarceladas y cumpliendo condenas entre los nueve a los 13 años por sus vínculos a medios de comunicación y varias ONG, podemos mencionar:

- Dos exdirectores y ejecutivos de organizaciones civiles: Cristiana Chamorro Barrios y su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios (FVBCH); este último fue trasladado el 30 de abril del 2021 de El Chipote a su casa debido a un deterioro en sus condiciones de salud después de 300 días de encarcelado;
- Un gerente administrativo: Juan Lorenzo Hollmann Chamorro (*La Prensa*);
- Dos periodistas: Miguel Mora (*100% Noticias*) y Miguel Mendoza (cronista deportivo);

- Un director de programa de opinión: Jaime Arellano (Jaime Arellano en “La Nación”) en arresto domiciliario;
- Un egresado de la carrera de Comunicación Social: Lester Alemán;
- Una estudiante de Periodismo: Samantha Jirón;
- Dos excolaboradores gerenciales: el Administrador Walter Gómez y el Contador Marcos Fletes (FVBCH);
- Un empleado auxiliar: Pedro Vázquez, chófer personal de Cristiana Chamorro.

Los jueces sandinistas sustentaron sus sentencias contra las personas anteriormente mencionadas en supuestos delitos de conspiración, traición a la patria, noticias falsas, perjurio contra el Estado. En realidad, todos los procesados ejercían sus derechos de participación política, libertad de organización, libertad de opinión y libertad de información, entre otros.

Desde los medios oficialistas y en sus redes sociales, se difundieron campañas y piezas audiovisuales en las que explicaban cómo desde la Fundación Violeta Barrios se movilizaron millones de dólares provenientes de la cooperación de la Agencia para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID), para desinformar, desestabilizar al gobierno y orquestar el intento de golpe de Estado en el 2018. Por su parte el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado el 27 de mayo del 2021 en el que negó que existiera “evidencia de lavado de dinero” en las operaciones de dicha organización.

Sobre las imputaciones de la Fiscalía de Nicaragua contra Chamorro, un vocero del Departamento de Estado de los EE. UU., que pidió no ser identificado, expresó su rechazo:

Como parte de nuestra supervisión regular (la agencia de cooperación) USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta B. de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la que los fondos de USAID hayan sido desviados por la Fundación para otros propósitos (AP News 2021)

Cristiana aspiraba a competir como candidata presidencial para las elecciones del 7 de noviembre del 2021, desde la unidad de las fuerzas de la oposición como la única posibilidad para derrotar a Ortega, al igual que lo hizo su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, a través de la Unión Nacional Opositora (UNO) en 1990. (Confidencial, 2021). Dijo Cristiana Chamorro:

La semana pasada dije que no me iba a inscribir en ninguna de las dos fuerzas [la Coalición Nacional y el partido CXL que habían iniciado proceso de inscripción de precandidatos] porque no quiero dividir el voto, que mi propuesta es la unidad que ambas organizaciones encuentren un punto de encuentro y que puedan ofrecerle a Nicaragua una casilla única, con un solo candidato único para poder derrotar a Ortega. Mi propuesta ha sido derrotar a Ortega. (Esta Semana, 2021)

“La desunión no nos va a permitir ganar a Ortega; la propuesta es que le ganemos, que derrotemos a Ortega y eso solamente en unidad nacional lo vamos a poder hacer”, agregó; pero Ortega decidió no correr riesgo y mandó encarcelar a siete de los aspirantes presidenciales: Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Medardo Mairena. Todos ellos han sido procesados por supuestos delitos de conspiración y traición a la patria. Actualmente, el gobierno mantiene secuestrados a 170 presos políticos, algunos encarcelados desde abril de 2018.

#### 4. Conclusiones

La Declaración de Principios de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH – la Comisión, no la Corte –, establece que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático, en cuanto permite a los individuos, de forma individual o colectiva, gozar de la libertad de expresar sus ideas, pensamientos de forma oral, escrita o por cualquier otro medio, siempre y cuando exista un ambiente de respeto y tolerancia hacia el pensamiento de los demás. Reitera además que sin ello es imposible que exista una verdadera democracia.

De la libertad de expresión derivan y van de la mano otros derechos fundamentales en la construcción democrática, como el acceso a la información pública, constituida en leyes en distintos países latinoamericanos. El libre acceso

a la información gubernamental, en su carácter de patrimonio público, permite a los ciudadanos solicitarla y tener derecho a recibirla de forma eficaz y transparente. Esto brinda oportunidades para la contraloría ciudadana y para conocer sobre la gestión de instancias gobierno a nivel nacional, departamental (provincial o estatal) y local (municipal). De esta manera, es posible demandar mejores políticas públicas en salud, educación, seguridad, infraestructura, cultura, que procuran el bienestar colectivo.

Cuando los Estados promueven el respeto por la libertad de expresión, las personas tienen la posibilidad de opinar libremente por distintos medios sobre las acciones de sus gobernantes, tanto en la dimensión privada como pública, así como denunciarlas, criticarlas y exigir cuentas de ellas. Un aliado estratégico en este sentido son los medios de comunicación que, desde su actividad, ejercen también este derecho a expresar ideas libremente como también el derecho a libertad de información previstos en los marcos jurídicos, en el caso de Nicaragua, el Artículo 66 de la Constitución Política. Sin embargo, un régimen autoritario como el constituido por la pareja Ortega-Murillo, gobernante en Nicaragua, no solo anula y violenta los principios constitucionales y otras normativas como la Ley de Participación Ciudadana, que reconocen estos derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información, sino también promueve instrumentos legales que derivan en la censura, la criminalización del derecho de expresar ideas u opiniones, desde la esfera pública como desde la privada.

El estallido de la crisis sociopolítica de abril 2018 marcó la pauta para que el régimen Ortega- Murillo recrudesciera la persecución a los medios de comunicación. Esto se ha manifestado en forma de allanamientos y confiscaciones de canales de televisión, encarcelamiento de periodistas, y la elaboración de leyes dirigidas a sepultar la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de asociación, entre otros derechos humanos universales fundamentales, contemplados en la Constitución Política de la República de Nicaragua.

El régimen Ortega-Murillo ha utilizado el marco jurídico formado por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la pena de cadena perpetua por crímenes de odio añadida a la Constitución Política para imponer castigo a periodistas críticos y a opositores políticos. De cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre del 2021, Ortega encarceló a siete

de los principales aspirantes a la candidatura presidencial, entre ellos, Cristiana Chamorro, exdirectora ejecutiva de la FVBCH. Después de 20 años de promover la democracia, la libertad de expresión y la excelencia al periodismo independiente, esta ONG decidió cerrar operaciones antes que registrarse como agente extranjero.

Aun así, en marzo del 2021, la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra de la FVBCH por el supuesto delito de lavado de dinero. Además, 50 periodistas y directores de medios independientes fueron citados como testigos en interrogatorios por publicaciones críticas al régimen. Actualmente hay más de 130 periodistas en el exilio. La primera ola de exiliados se produjo en el 2018 y la segunda ola a raíz del juicio contra la FVBCH. La justicia orteguista ha aplicado la legislación de cibercrimitos a quienes han expresado su pensamiento en las redes sociales. Un caso emblemático de ello es el del cronista deportivo Miguel Mendoza.

Las frases ‘*fake news*’, ‘noticias falsas’, ‘fallido golpe de Estado’, ‘agentes del imperio’ son constantemente utilizadas por el mandatario, al igual que en reportajes que desvirtúan la realidad producidos por los medios impresos o audiovisuales oficialistas y cuentas alineadas al régimen en las redes sociales. Durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN en Español, el propio Ortega dijo que lo ocurrido en abril de 2018 había sido una “guerra a través de las redes”, y que las fotografías de paramilitares portando rifles AK-47 y la bandera rojinegra del FSLN mostradas por el periodista eran un montaje.

Pese a las adversidades, el periodismo independiente en Nicaragua mantiene un compromiso firme con la libertad de expresión e información: ha tenido un rol protagónico en el combate a la desinformación gubernamental; ante las medidas de cierre contra medios tradicionales, ha migrado a lo digital; desde su seno, ha habido una proliferación de sitios web de noticias y cuentas informativas en redes sociales; ha adoptado nuevas metodologías de búsqueda de fuentes y datos; mediante estas, logró revelar y documentar acontecimientos importantes en los últimos cuatro años en Nicaragua, como los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo durante El Estallido de Abril, que cobró más de 350 víctimas; y, de este modo, corroboró los datos recabados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como la CIDH y el MESENI.

Durante la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo y cobró millones de víctimas, los periodistas independientes del país, junto a organizaciones civiles y asociaciones médicas, impulsaron campañas de prevención y la recolección de *kits* de higiene para llevar a zonas más empobrecidas de Nicaragua. Por otra parte, documentaron también cómo el gobierno ocultó las cifras de personas infectadas y fallecidas por el virus, las que fueron clasificadas mayoritariamente con “neumonía atípica” por el personal sanitario.

Los medios independientes dejan en evidencia los atropellos a la libertad de expresión y de información que cometen los regímenes autoritarios, que cuentan con maquinarias de comunicación expertas en desinformar, desvirtuar los hechos. Adicionalmente, usan a los órganos represores como la Policía y el Ejército para amordazar a la prensa, al sistema judicial para procesarlos e imponer condenas y al Poder Legislativo para aprobar marcos jurídicos con los que intentan legitimar las arbitrariedades que cometen.

## Referencias

- AP News. (2021). *Estados Unidos niega evidencia de lavado de dinero en Fundación Violeta Chamorro*. <https://apnews.com/article/noticias-9a29e3fb70439a6eefedad1cd5ffbbb>
- Artículo 66. (2021). *Periodistas citados por la Fiscalía entraron como testigos y salieron como imputados*. <https://www.articulo66.com/2021/05/26/periodistas-citados-por-la-fiscalia-entraron-como-testigos-y-salieron-como-imputados/>
- CIDH. (2021). *CIDH actualiza registro de víctimas fatales en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018 en Nicaragua*. <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/302.asp>
- CIDH. (2022). *Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)*. <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/meseni/default.asp>
- CNN Español. (2018). *Andrés Oppenheimer entrevista al Presidente Ortega*. <https://www.youtube.com/watch?v=5xNYfoADWXM&t=114s>
- Confidencial. (2021). *Cristiana Chamorro: “Mi propuesta es derrotar a Ortega, no creo que se pueda hacer en dos casillas”*. [https://www.youtube.com/watch?v=7zi7C\\_RjQFQ](https://www.youtube.com/watch?v=7zi7C_RjQFQ)
- Asamblea Nacional (2014). *Constitución Política de Nicaragua*. <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.sp?documentId=C93CBD0FF408D07306257C8C004F6953&action=openDocument>
- Despacho 505. (2020). *Ortega retó a la comunidad internacional al aprobar tridente de leyes represivas*. <https://www.despacho505.com/ortega-reto-a-la-comunidad-internacional-al-aprobar-tridente-de-leyes-represivas/>
- El Nuevo Diario (END). (2018). *Parientes y vecinos narran cómo quemaron a una familia en Managua*. <https://www.youtube.com/watch?v=bnZSO5jE73U>
- El 19 Digital. (2020). *Nicaragua reporta segundo caso de Coronavirus*. <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:101514-nicaragua-reporta-segundo-caso-de-coronavirus#:~:text=La%20compa%C3%B1era%20Rosario%20Murillo%20en,con%20S%C3%ADndrome%20de%20Inmunodeficiencia%20Adquirida>
- Euronews. (2018). *Oscar Valero responde a vuestras preguntas sobre la entrevista a Daniel Ortega*. <https://www.youtube.com/watch?v=saErUvujQA8&t=128s>

- FUNIDES. (2021). *A un año del primer caso oficial de Covid-19 en Nicaragua*. <https://funides.com/blog/a-un-ano-del-primer-caso-oficial-de-covid-19-en-nicaragua/>
- La Prensa. (2007). *Los “hijos de Goebbels”*. <https://www.laprensani.com/2007/09/04/editorial/1308459-los-hijos-de-goebbels>
- La Prensa. (2021). *Bloqueo de la dictadura orteguista deja sin papel a La Prensa*. <https://www.laprensani.com/2021/08/12/nacionales/2863902-bloqueo-de-la-dictadura-orteguista-deja-sin-papel-a-la-prensa>
- La Prensa. (2022). *Régimen aprueba cancelación de 25 personerías jurídicas ya suma 77 organizaciones suspendidas en cuatro meses*. [www.laprensani.com/2022/04/20/politica/2983039-regimen-aprueba-cancelacion-de-25-personerias-juridicas-ya-suma-77-organizaciones-suspendidas-en-cuatro-meses](http://www.laprensani.com/2022/04/20/politica/2983039-regimen-aprueba-cancelacion-de-25-personerias-juridicas-ya-suma-77-organizaciones-suspendidas-en-cuatro-meses)
- Luna Y. & Cruz A. (s.f.). *La masacre orteguista contra las madres nicaragüenses. Confidencial*. <https://www.confidencial.com.ni/especiales/especial-tres-anos-de-la-masacre-contras-las-madres-nicaraguenses/>
- Luna Y. (2018, abril 21). *Incendian Radio Darío. Confidencial*. <https://www.confidencial.com.ni/nacion/incendian-radio-dario-en-leon/>
- Miranda W. (2018, junio 1). “¿Disparaban con precisión: a matar!” *Confidencial*. <https://www.confidencial.com.ni/nacion/42701-2disparaban-con-precision-a-matar/>
- Miranda W. (2020, mayo 12). *El gobierno de Nicaragua ordena “entierros exprés” que avivan las dudas sobre las muertes por covid-19. El País*. <https://elpais.com/sociedad/2020-05-12/el-gobierno-de-nicaragua-ordena-entierros-expres-que-avivan-dudas-sobre-muertes-por-covid-19.html>
- Miranda W. (2021, agosto 12). *El gobierno de Daniel Ortega deja sin papel y saca de circulación al principal diario de Nicaragua. El País*. <https://elpais.com/internacional/2021-08-12/el-gobierno-de-daniel-ortega-deja-sin-papel-y-saca-de-circulacion-al-principal-diario-de-nicaragua.html>
- Ramos V. (2021, julio 26). *Cuál es la verdad en Nicaragua. El 19 Digital*. <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:118824-cual-es-la-verdad-en-nicaragua>
- Reporte ONG (2022). *Nicaragua en la IX Cumbre de las Américas #CumbreAméricas*. <https://www.facebook.com/reporteong/videos/698600094769575/>
- Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). (2021). *La contienda por la veracidad en la posverdad*. <https://www.youtube.com/watch?v=WPqt9fqQz2A>

- SWI. (2022). *Parlamento de Nicaragua cierra otras 96 ONG y se eleva a 440 las ilegalizadas*. [https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-crisis\\_parlamento-de-nicaragua-cierra-otras-96-ong-y-se-eleva-a-440-las-ilegalizadas/47644304](https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-crisis_parlamento-de-nicaragua-cierra-otras-96-ong-y-se-eleva-a-440-las-ilegalizadas/47644304)
- World Health Organization (WHO). (2021, marzo 11). *Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*. WHO. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020>



# DESINFORMAR PARA GOBERNAR: EL CASO SALVADOREÑO

KARLA RAMOS | CLAUDIA RIVERA

# 5

## Resumen

*El objetivo de este capítulo es abordar las fake news desde un marco más amplio que es el de la desinformación ya que, en el caso de El Salvador, este fenómeno es el que ha primado y caracterizado el tratamiento de la misma, desde actores relevantes y claves, como es el caso del presidente Nayib Bukele. Para acercarnos a estos hechos, se presenta un marco conceptual y ejemplos concretos que permiten ahondar la temática a través del análisis de las publicaciones periodísticas de investigaciones nacionales e internacionales, quienes a través de verificación de datos, seguimiento a discursos, uso de plataformas digitales entre otros comportamientos en la web del mandatario, revelan una agenda mediática e informacional caracterizada por el engaño, la nula o poca referencia a de las fuentes verificadas, la difusión de tratamiento de información engañosa, falsa o manipulada, todo en el marco previo y durante la crisis de la COVID-19.*

## 1. Introducción

La experiencia de los salvadoreños con el fenómeno de las *fake news* y la desinformación es vasta. Las campañas adelantadas, la manipulación de información y uso de medios de comunicación para inclinar la balanza hacia tendencias favorables o desfavorables en beneficio de intereses políticos, económicos y partidistas marcan el estilo de las estrategias políticas de casi 33 años de campañas proselitistas, administraciones gubernamentales y cobertura noticiosa en El Salvador, al menos desde la firma de los acuerdos de paz en enero del 1992.

Difusas en su origen, difícilmente rastreables y virales por naturaleza, las noticias falsas, como herramientas de posicionamiento de contenidos, han adquirido particular relevancia en los últimos tiempos. Su análisis ha proliferado en torno a temas de campañas y sobre elecciones presidenciales, uso en administraciones gubernamentales y, más recientemente, su relevancia durante la pandemia de COVID-19.

Aunque el término se haya popularizado a raíz de la acusación de Donal Trump a CNN bajo el calificativo *fake news* en 2016 (Pengelly, 2016; Weir, 2009)

rastrea su origen hasta el S. XIII antes de Cristo. Su uso es aceptado en diversos contextos, producción académica y varios idiomas. Tucker y otros (2018) afirman que su uso indiscriminado adolece de consistencia en su definición y esto genera maleabilidad en los resultados académicos y también influencia la percepción del problema y de la solución.

Este es precisamente el patrón del fenómeno en El Salvador. Aunque existe evidencia del uso de noticias falsas, también se da un predominio de contenidos que evaden la clasificación de “notas reales” (Molina *et al.*, 2019). Los contenidos bajo examen, cuando se hace el ejercicio de verificación, no pasan la prueba elementos periodísticos clave. Uno de ellos es el apego a los hechos que consiste en la verificación de la afirmación y establecer un reportaje imparcial. Tampoco se utiliza evidencia para respaldar la información y se reproducen los datos de las fuentes gubernamentales sin mayor trabajo periodístico.

Para el caso de la verificación de fuentes, el contraste de posturas o atribución a las declaraciones es inexistente – excepto cuando son frases polémicas o contundentes del presidente o del funcionario de la administración –. Finalmente, la retórica del contenido utiliza superlativos absolutos y relativos para comentar u opinar sobre obras, planes o acciones gubernamentales de la actual administración: la del presidente Nayib Bukele.

¿Fabrica o ha fabricado información la administración Bukele? Sí, existe evidencia periodística que comprueba que esta es una práctica que utiliza desde su campaña como candidato presidencial ¿Todas las afirmaciones del presidente salvadoreño son falsas? No, la mayoría de las afirmaciones hechas por el mandatario y su administración son “construcciones informativas” altamente elaboradas que no pueden ser categorizadas como falsas, pero sí de engañosas, fuera de contexto, ambiguas y contradictorias.

Por lo tanto, más que *fake news*, se evidencia y reporta desde esfuerzos periodísticos salvadoreños, la desinformación desde la administración pública asociada a la imagen del presidente salvadoreño, lo que a su vez se relaciona, de manera muy cercana a la propaganda, tal como lo plantean Tumber y Waisbord (2021). Para estos autores, ambas conceptualizaciones se asocian al ejercicio del poder. Sin embargo, sostienen que existen diferencias en su uso porque “mientras que

la desinformación hace hincapié en el engaño deliberado mediante fabricaciones, la propaganda puede consistir en difundir ideas selectivas que no son necesariamente falsas” (p. 21).

En el pasado, las encargadas de difundir los mensajes propagandísticos eran las agencias gubernamentales a través de plataformas predigitales; en la actualidad, existe una revitalización de las formas de propaganda en la que, se potencia las plataformas web en sus diferentes formatos, microsegmentos y descentralización de productores de contenidos. Esto genera una distribución de la información estatal en la que “todo el mundo puede ser un participante voluntario o involuntario, receptor y distribuidor” (Tumber y Waisbord, 2021, p. 15) de desinformación y propaganda.

El informe “Digital 2022: El Salvador” (Kemp, 2022) indica que el acceso a redes sociales ha aumentado desde enero 2021. Solo en un año, el porcentaje de usuarios salvadoreños activos en redes ha aumentado un 70.4%. Unido a esto, la conexión desde dispositivos móviles ha aumentado un 2.5% lo que ha incrementado, también que los usuarios accedan desde sus perfiles a sitios externos (*third party websites*). Según estos datos, los ciudadanos salvadoreños se interesan un 77.07% más por contenido publicado y disponible en Facebook que en el de otras redes sociales. La tendencia en este país centroamericano, al menos durante la emergencia por COVID-19, es que el 81.5% de los usuarios salvadoreños manifestó que consumió información falsa a través de Facebook.

Este capítulo abordará el uso de la desinformación como parte de la estrategia de campaña del entonces candidato presidencial por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANU), hoy mandatario salvadoreño Nayib Bukele, durante la emergencia de la COVID-19. A través de fuentes documentales, análisis de medios y tuits de su cuenta oficial en Twitter, se describirá cómo esta figura política central de la vida pública de El Salvador instrumentalizó y manejó los mensajes de la comunicación de crisis de la pandemia a través de sus cadenas presenciales.

## 2. Descripción del fenómeno: la desinformación desde el Estado como fenómeno organizado

Como apuntan Cathala (1986) y Volkoff (1986), la particularidad de la desinformación reside, por un lado, en la sistematicidad con que ésta se lleva a cabo y; por otro, en la creación por parte del poder de instituciones, organismos o departamentos específicos dedicados a ponerla en práctica, lo que la dota de cierto carácter de profesionalidad.

La desinformación es entonces un modo de manipulación organizado, estructurado y planificado minuciosamente, que responde a una estrategia concreta y con objetivos políticos muy claros. Tumber y Waisbord (2021) sostienen que “no es casualidad que el resurgimiento del populismo haya tenido lugar junto a nuevas formas de desinformación” (p. 1), y el informe de Global Americans (2021), por su parte, afirma que “las nuevas formas de influencia política que, con frecuencia, hacen uso de campañas de desinformación de medios patrocinados por el estado, son parte de una estrategia de los regímenes no democráticos” (p. 7).

El caso salvadoreño no es la excepción en lo que respecta al uso de la desinformación y formas de propaganda, tampoco es un fenómeno novedoso, al menos en lo que a la comunicación política entre partidos y ciudadanos, en campañas y uso de medios por parte de administraciones públicas, respecta.

La producción académica sobre campañas y estrategias políticas de 20 años de gobiernos (1989-2009) de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y 10 (2009-2019) de dos gobiernos de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lo demuestran.

Las campañas políticas de los candidatos salvadoreños utilizaron, además de *spots* publicitarios, eslóganes y otras tácticas de campaña, los medios de comunicación tradicionales y sus agendas mediáticas con el propósito de legitimar y deslegitimar oponentes políticos. A través de los medios predominantes en cada periodo histórico, las élites mediáticas “se limitaron a reproducir discursos de las élites políticas” (Mejía Salazar, 2018, p. 349). Para el caso de los gobiernos militares, la prensa, por ejemplo, favoreció a través del lenguaje escrito y visual (fotografías) una narrativa así descrita:

[L]os sucesos previos y posteriores a la intervención de la Universidad de El Salvador, acaecida el 19 de julio de 1972, en la que se observa una intención clara de fortalecer la imagen del presidente Arturo Armando Molina y de deslegitimar la de sus opositores. (Mejía Salazar, 2018, p. 349)

Bajo esta lógica, Armando Calderón Sol, presidente salvadoreño en el periodo de 1994 a 1999, enfocó su campaña presidencial en dos tácticas desinformativas. La primera de ellas consistía en plantear que, de ganar la izquierda salvadoreña (FMLN), el país sufriría una amenaza de desestabilización económica que generaría huida de capitales; la segunda consistió en “descalificar a la Coalición, a través de instituciones paralelas y del discurso y mítines, como causante de la guerra y potencial confiscadora de los bienes de los pobres” (Dada, 1994, p. 6).

No muy diferente es el caso de Francisco Flores, segundo mandatario de derecha en la historia democrática del país (1999-2004). Barraza Ibarra (1999) evidencia el rol de las encuestas y la cobertura de la prensa para posicionar de manera positiva la imagen de Francisco Flores. Entre los atributos destacados se encuentran “el ser el mejor educado”, “dará confianza a inversionistas extranjeros”, “es persona preocupada por los pobres”, tiene “cualidades personales” y “posibilidades de hacer un buen gobierno” (p. 14).

Los analistas señalan que, entre sus estrategias de comunicación gubernamentales, se destacan la reducción del flujo de comunicación oficial, la divulgación de información filtrada y maquillada (Revista Proceso, 2000), el uso de encuestas para posicionar su imagen, la opacidad en el manejo de las cifras estatales, la “tensión que caracteriza las relaciones de Flores con los periodistas” (Peraza, 2001, p. 7) y el uso de medios de comunicación para enmarcar favorablemente temas coyunturales, entre ellos, las huelgas por privatización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la situación económica del país (Cruz, 2000).

La presidencia del tercer mandatario arenero, Elías Antonio Saca (2004-2009) confirma, en palabras de Rivas (2004), “la alianza entre las empresas de comunicación más poderosas del país, el partido de gobierno, el aparato estatal que este controla y el sector privado organizado” (p. 451). En este sentido, se evidencian estrategias de desprestigio y de difamación hacia periodistas y adversarios políticos (Realidad, 2007), proselitismo y alineación de la campaña presidencial a través

de la cobertura de medios escritos (Peraza *et al.*, 2006) y apelación al miedo para deslegitimar a la oposición política (García Dueñas, 2006).

El manejo de la desinformación a través de mecanismos de control de los medios de comunicación no fue diferente en los gobiernos de izquierda. Frente al hecho de que las élites económicas salvadoreñas controlaban la agenda informativa a favor de los gobiernos de derecha, Funes Cartagena, primer presidente del FMLN en el Salvador (2009-2014), contó con el apoyo de élites políticas quienes, por medio de cabildeos y la compra de nuevos medios. Según Robles Rivera:

[R]ecurrieron al uso de campañas de relaciones públicas con la idea de promover sus acciones positivamente, traducir sus demandas políticas en noticias, eludir la confrontación pública y proveer a los medios con informes o documentos que pudieran ser usados en sus informaciones” (Robles Rivera, 2021, p. 22).

El equipo de la campaña proselitista de Sánchez Cerén (2014-2019), segundo presidente de izquierda salvadoreño contó con el apoyo y respaldo del presidente en funciones, a través de sus declaraciones y discursos gubernamentales, con una campaña alterna en redes sociales enfocada en hacer parodia de los candidatos a través de apodos (“Cara de nuégado” para referirse a Sánchez Cerén y “tacuazín peinado”, su rival de derecha), guerra de información y desinformación con páginas y perfiles afines en Facebook y Twitter y filtraciones de casos de corrupción de administraciones pasadas -bajo el mismo estilo que en la campaña de Mauricio Funes- (Observatorio de Comunicación Política, 2015).

El último presidente salvadoreño, Nayib Armando Bukele, utiliza como catalizador de su campaña política el desencanto del salvadoreño frente a administraciones anteriores (#LosMismosDeSiempre, su principal tema de campaña y de gobierno); apela a argumentos extremadamente emotivos que posicionan a la opinión pública en extremos polarizadores mediante sus mensajes en redes sociales, sobre todo Twitter. También retoma estrategias de guerra de información a las redes sociales de Mauricio Funes, Sánchez Cerén y Elías Antonio Saca. Por otro lado, centra su campaña para presidente en el respaldo a su imagen y difunde noticias falsas y contenido engañoso, ya como presidente, para legitimar sus decisiones antidemocráticas.

La gestión de la comunicación política de este mandatario salvadoreño es el caso que este capítulo pretende describir y analizar. A pesar de que Bukele no es el creador ni principal artífice de las campañas constantes de desinformación que han minado la cultura política de los salvadoreños, es el candidato y, actual mandatario, que ha sabido potenciar el desencanto en el sistema de partidos hacia administraciones anteriores, controlar los medios de comunicación tradicionales y nuevos medios – como candidato y como presidente – para convertir a las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, en las principales herramientas de comunicación de su administración en el actual ecosistema político-informativo salvadoreño.

### 3. ¿Cómo utiliza la desinformación la actual administración gubernamental salvadoreña?

Cuatro notas elaboradas a través de periodismo de investigación de la revista *Fáctum* (medio independiente de El Salvador) evidencian el uso de noticias falsas durante la campaña de este presidente salvadoreño.

#### 3.1. Nayib Bukele como candidato

La primera de ellas, titulada “Las noticias falsas de la campaña presidencial” presenta hallazgos de un ejercicio de análisis de 10 publicaciones (Baires Quezada, 2019) de la cuenta de Twitter del candidato. La selección se basó en el criterio de tener indicios de reportar contenido falso. La mayoría de las notas estaban elaboradas sin fuentes o basadas únicamente de un tuit. También se evidenció la divulgación de rumores e imprecisiones a través del posicionamiento de sitios web de contenido hiperpartidista que, desde un inicio, respaldaban al candidato. La táctica, en este análisis, también muestra el uso de una técnica de mercadeo conocida como *clickbait*, que consiste en elaborar títulos interesantes, divisivos y atractivos cuyo único fin es el de generar más tráfico hacia el sitio que lo publica.

“Una bola de nieve llamada Lufthansa” (Baires Quezada, 2019a) reconstruye y verifica el hilo de seis videos y 12 fotografías (Bukele, 2018) evidencia el caso de una publicación del candidato en las instalaciones de esta aerolínea alemana. El

análisis de verificación de información indica que no existió una cita, no se reunió con representantes de la aerolínea como se había publicado días antes. La directora internacional de relaciones públicas de la empresa operadora del Aeropuerto de Múnich (Flughafen München) desmintió, vía correo electrónico, las declaraciones del candidato.

En lo que a propaganda y a desinformación se refiere, existe también evidencia del respaldo de plataformas digitales hiperpartidistas que se inclinaban a favor del candidato de GANA. Un ejemplo de ello son los argumentos de Yazclin, editor de contenido de La Britany (portal de contenido viral con más de 977.518 seguidores en Facebook en la actualidad) quien declara que su contenido tiene el propósito de diseminar rápidamente las acciones del entonces candidato presidencial y su equipo de trabajo. El editor de este medio afirma que no se verifica la información y que proporciona a las audiencias las historias que le gustan (Baires Quezada, 2019b).

Bukele fue acusado también de utilizar granjas de *trolls* para generar popularidad y tendencias en redes sociales. Luis Laínez (2019) retoma en una nota periodística de la sección política, el estudio titulado “La red de manipulación digital en las elecciones presidenciales de El Salvador” realizado por el periódico mexicano *Milenio* (Cedillo García, 2019). La nota reporta un análisis de redes (*network analysis*) en el que se evidencia cómo este político en particular fue un nodo que generó noticias falsas para manipular la opinión pública a su favor y en aras de su popularidad. Además, este estudio compara cómo las cuentas oficiales de instituciones gubernamentales, en este caso, de izquierda, respaldaron a su candidato, Gerson Martínez.

### 3.2. Nayib Bukele como presidente

El ascenso de Bukele, también llamado por diversos medios internacionales – CNN en español (Oppman, 2020), El País (Maldonado, 2019), la BBC de Londres (González Díaz, 2019) – “el presidente *millennial*” ha marcado en El Salvador, la redefinición del panorama democrático de El Salvador. Se le caracterizó por ser un presidente sin ideología política definida, antisistema, que generó expectativa y gran aceptación por parte de la población. Su figura y popularidad, así como su estrategia de votar por la “N de Nayib,” permitió que su partido, Nuevas

Ideas, ganara la mayoría en el Congreso. Este fue uno de los primeros pasos de acumulación de todo el poder en las tres ramas del poder público salvadoreño: ejecutivo, legislativo y judicial.

Durante los primeros días como presidente, Bukele, despliega su estrategia informativa a través de las redes sociales. En primera instancia, se posiciona como el principal difusor de información en su administración. Es presidente y vocero al mismo tiempo que orienta a los usuarios sobre las cuentas que deben seguir a través de sus retuits. En segunda, se convierte en el único en dar la información sobre su administración en redes sociales. Publica videos de cuentas de gobierno, presenta perfiles de ministros en la red social y administra la gestión pública (designa, despide y ordena) desde su cuenta de Twitter, a pesar de que esta red social ocupaba en el 2019, el 32.8% de las preferencias en el uso de las redes sociales durante este año.

Wardle y Derakhshan (2018) plantean tres componentes dentro de la desinformación: el contenido que es intencionadamente falso, la información auténtica que se comparte con la intención de hacer daño y un contenido falso sin estar consciente de la verdad o falsedad de la información. En el ejemplo siguiente, “se le ordena al Ministro de Gobernación @marioduran1, que remueva al director de @PROCIVILSV, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton. En su lugar, nombre a alguien con credenciales para ejercer ese puesto de la mejor manera” (Bukele, 2019a), el presidente salvadoreño afirma sin proporcionar contexto, acusa sin mayor referencia o detalles del marco legal, o datos sobre el caso al que se refiere, expone al funcionario al escarnio público y lo deja sin capacidad de réplica. Esta práctica desinformativa se conoce como información malintencionada (*malinformation*) y consiste en compartir información auténtica (la implicación del funcionario en el proceso legal), pero con la intención de dañar (el caso, hasta la fecha, sigue abierto).

Bajo el contexto de posicionar la etiqueta sobre el #PlanControlTerritorial durante los primeros días de su administración, el mandatario salvadoreño informa del secuestro de un bus que se dirigía al interior del país. El medio independiente El Faro reporta la verificación de información del operativo narrado por el presidente vía Twitter (Rauda Zablah y Lemus, 2019). La investigación periodística elabora

una cronología de eventos y, a través del contraste y documentación con diversas fuentes de información, comprueba cómo estas declaraciones de Bukele eran falsas:

[S]e le ordena al director de @CentrosPenales, @OsirisLunaMeza, enviar a los capturados por el secuestro del bus y las violaciones a 2 [sic] mujeres el día de ayer, al Penal de Máxima Seguridad y colocarlos en aislamiento total, hasta que sean llevados a juicio. (Bukele, 2019b)

La pandemia de la COVID-19 representó un reto no solo de salud pública sino también de comunicación para gobiernos y tomadores de decisiones alrededor del mundo. Aunque el gobierno salvadoreño respondió de manera oportuna y rápida con el cierre de fronteras desde mediados de marzo del 2020, se le objeta por la poca transparencia en la gestión de los fondos para la compra de insumos médicos y de respuesta a la crisis, también por una retórica del miedo para amenazar durante las cadenas nacionales y a través de su cuenta de Twitter en lugar de proporcionar información de instrucción, es decir, datos rápidos, precisos, consistentes y útiles (Sturges, 1994). Por otra parte, los medios de comunicación tradicionales e independientes también reportaron inconsistencias en la información proporcionada por el mandatario y por parte de sus funcionarios.

#### 4. La desinformación del gobierno durante la pandemia

El gobierno salvadoreño fue de los primeros países de la región centroamericana en decretar cuarentena nacional por 21 días a mediados de marzo del 2020. En cadena nacional, el presidente Bukele informó a toda la población el inicio de restricciones en las fronteras terrestres y aéreas a nacionales y extranjeros. Anunció también la suspensión de clases y, entre otras medidas, activó el grupo de respuesta de crisis nacional (Labrador, 2020)

Tal como plantean los teóricos de la comunicación de crisis, el presidente y su gabinete fueron eficientes en gestionar la primera fase de la emergencia sanitaria. Al inicio, durante las primeras semanas, proporcionaron información anticipada y respondieron de manera oportuna al identificar los mensajes pertinentes a través de los medios (Fransen y Johansen, 2017). Sin embargo, no trabajaron en conjunto con uno de los actores clave a través de los cuales se canalizan cantidades de información importante para la ciudadanía: los medios de comunicación tradicionales y digitales independientes.

El “Informe Preliminar sobre COVID-19 y Derechos Humanos en El Salvador” (Tobar Serrano, 2020) revela que la administración Bukele no proporcionó información sobre las medidas adoptadas para contener la pandemia ni los impactos vinculados al derecho a la salud. El reporte también señala que el gobierno limitó la libertad de prensa y la libertad de expresión de los ciudadanos que denunciaban arbitrariedades por parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil y, finalmente, también hizo detenciones arbitrarias por presunto incumplimiento de la cuarentena domiciliar.

Uno de los actores de interés de las administraciones públicas durante las emergencias de diverso tipo es la prensa. Desde el segundo mes de la pandemia, limitó el acceso a la información pública durante la emergencia sanitaria (Salud con Lupa, 2020), impidió el acceso a datos de los sitios de contención, las solicitudes de refugio y cerró las Oficinas de Información y Respuesta – instancias encargadas de proporcionar datos estadísticos sobre las instituciones públicas – (Avelar J., 2020). Durante las cadenas nacionales, Bukele atacó a los periodistas durante una de las cadenas nacionales y puso de manifiesto la persecución a los medios independientes a través de auditorías a estos canales de información (Avelar B., 2020).

Además de la crisis sanitaria, llegó la ‘infoxicación’ (Días, 2014) por más controles sobre el discurso y la información que el gobierno salvadoreño quiso implementar para mantener la imagen de eficiencia, las redes sociales se plagaron de información nacional e internacional que pusieron en alerta a la población. Lo anterior propició excesos de información y su propagación entre las personas y los medios de noticias engañosas o falsas.

El líder salvadoreño desinformó en diversas ocasiones a la ciudadanía a través de sus redes sociales y declaraciones de en conferencias de prensa. Por ejemplo, a pesar de que estudios científicos sobre el uso de la hidroxiclороquina en pacientes de COVID-19 generaba más tasas de mortalidad a pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con dicho fármaco, el mandatario expresó: “[y]o lo voy a seguir usando, la gente que lo quiera utilizar, lo puede utilizar como profilaxis” y “solicitaría humildemente, porque somos un país pequeño, revisar ese protocolo” (Agencia EFE, 2020).

La revista *Fáctum* investigó nueve ejemplos de la desinformación presidencial (Ávalos *et al.*, 2020) y comprobó que el mandatario había ocultado información, proporcionado declaraciones y datos inexactos y además publicó afirmaciones ambiguas o incompletas. También reportó la propagación de información falsa por parte de miembros de su gabinete y del mismo mandatario.

Estos elementos de la desinformación fueron palpables en las promesas que hiciera el líder del Ejecutivo a los habitantes de la Comunidad Nuevo Israel, el 1 de junio de 2020. Además de la emergencia por la COVID-19, los lugareños enfrentaron los estragos de las tormentas Amanda, Iota y Lota, fenómenos meteorológicos que dejaron más de 4.000 evacuados. En conferencia de prensa en la comunidad, debajo de la lluvia, con todo un dispositivo mediático y durante la noche del primero de junio del 2020, frente el podio presidencial, Bukele declaró:

Las casas se comenzarán a construir nomás termine la tempestad (tormenta Amanda), sabemos que las lluvias terminarán probablemente, y de acuerdo con el servicio meteorológico, el martes; pero sabemos que las emergencias duran más, porque hay que albergar gente, llevar medicamentos... y eso puede tardar de 15 días más o menos. (Escobar, 2020)

La revista *Gato Encerrado* publicó en diciembre de ese año el resultado de su visita al lugar y verificó la afirmación hecha públicamente por el presidente y comprobó que “Seis meses y tres tormentas después Bukele aún no ha construido las casas para la comunidad Nueva Israel.” (Escobar, 2020) El medio independiente Focos El Salvador (Palacios, 2020) también corroboró que las casas no estaban construidas. Es por esta razón que, la sección Ojo de Gato, verificó el discurso y caracterizó la información brindada como “engañoso.”

Entre otros casos de desinformación por parte del mandatario salvadoreño, también se encuentran las declaraciones del mandatario analizadas por El Observatorio de la Comunicación de ARPAS (2020). La publicación tomó como criterio hacer seguimiento a la cuenta del mandatario por un mes, iniciando con la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional decretada por la Asamblea Legislativa el 14 de marzo.

La publicación retoma tuits del mandatario en los cuales afirma que “algunos no se han dado cuenta pero ya inició la tercera Guerra Mundial” posterior a anunciar el decreto en el que se establece la cuarentena Obligatoria. La publicación también

incluye un reclamo al gobierno mexicano, por supuestamente trasladar pasajeros infectados de COVID-19 en un vuelo de Avianca, al tuitear: “Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto.”

Entre otras verificaciones de las declaraciones del mandatario a través de su cuenta de Twitter, se encuentra su comentario de una nota del periódico británico *The Telegraph* para afirmar que “Italia dejará morir a los mayores de 80 años’ porque su sistema de salud está colapsado y necesitan hacer espacio para los que tienen más probabilidades de vivir. En serio, no sé qué esperar en la Asamblea ¡Necesitamos el Estado de Excepción ya!” (Bukele, 2020).

La OMS también incluye en sus lineamientos para líderes la recomendación de evitar las especulaciones y las conjeturas, la información incorrecta (OMS, 2020, p. 3; OPS, 2020). A pesar de ello, en este mismo estudio, citado antes, en la población encuestada no hubo consenso cuando se les preguntó si la información que recibían por esa vía era confiable. Además, los entrevistados manifestaron que los sentimientos que les generaron sintonizar la declaración presidencial fueron de alerta (55.1%), preocupación (54.5%), ansiedad (29%) y tristeza (21.2%). El 94% de los salvadoreños dijo haber sintonizado las cadenas (transmisiones gubernamentales simultáneas en los medios audiovisuales de señal abierta) presidenciales en 2020 (Carballo y Marroquín, 2019). Esta tendencia indica un patrón de consumo de audiencias que conlleva una responsabilidad, ya que según la Declaración Conjunta de los Relatores de Libertad de Expresión (2017; OEA, 2007), en sus primeros párrafos establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de proveer a la ciudadanía información veraz. Además de generar confianza y transparencia (Coombs, 2010).

Esta obligación estuvo lejos de cumplirse. Según la cobertura realizada por la Agencia EFE del estudio “Agnatología y pandemia: un caso de estudio sobre prácticas agnotológicas en respuestas al covid-19 [sic] por parte del Gobierno de El Salvador” (2021), el mandatario generó confusión e ignorancia al crear una imagen distorsionada de la respuesta del gobierno frente al estado de emergencia.

## 5. Conclusiones

El análisis del caso salvadoreño sobre la desinformación en los últimos 30 años de gobierno – y específicamente en el periodo actual, el de Nayib Bukele – es una evidencia de que aproximarse al fenómeno de la desinformación de manera individual o aislada puede conducir a sesgos de apreciación y análisis de complejidad o carácter histórico.

En primer lugar, la desinformación, como táctica mercadológica en este caso, puede conducir a una visión extremadamente optimista de una herramienta o tecnología que, vista desde su potencial, puede ignorar la instrumentalización y la función política, la cual en muchos casos manipula.

En segundo lugar, puede llevar a la poca reflexión de una técnica que tiene como propósito el debilitamiento de un oponente y su deslegitimación, a través de fabricar información que, en términos de procesos políticos, también afectan negativamente a la democracia.

En tercera instancia, puede utilizarse como una táctica para posicionar candidatos como marcas, generar viralización, alinear a la opinión pública y reducir el proceso de elección política de un presidente a un contenido de espectáculo. En esta lógica, el fin justifica los medios; lo importante es que se hable de algún tema, que no necesariamente contribuya a lo relevante en el país. De este modo, se genera un proceso de comunicación instrumental bajo la lógica de entretenimiento.

Por otro lado, observar cómo un fenómeno orquestado por actores o figuras políticas partidistas o mediáticas puede llevar a colocar a políticos en polos opuestos del espectro democrática de un país; también puede influir en la construcción de la narrativa del enemigo, que es la punta de lanza de sistemas en los cuales se busca anular la disidencia para implantar regímenes autoritarios.

Desde la pasividad o agencia de las audiencias, también se reducen los alcances, ya que la complejidad del fenómeno de consumo de contenidos en redes sociales traslada la responsabilidad de estar informados o no, de ser críticos o no, a usuarios quienes probablemente no se dan cuenta de todo el ecosistema de contenidos, agendas, prácticas, medios que los algoritmos pueden introducir a sus burbujas de filtro, con el fin de convertir sus muros de Facebook o sus *feeds*

de Twitter en caja de resonancia que solo confirman los sesgos cognitivos sobre asuntos no necesariamente relevantes, es decir, buscan temas ligeros, sin mayor profundización en ellos.

Exigirles a los usuarios que conozcan los diferentes tipos de medios, estén conscientes de lo que consumen, y opten por informarse con medios de calidad se convierte en una actividad titánica para periodistas, investigadores, académicos, docentes, miembros de la sociedad civil que, aunque les compete, no reduce o carga más a un sector que a otro. La tarea de la ciudadanía digital responsable es conjunta; es una en la que el Estado no sólo debe participar, sino liderar y abanderar esfuerzos que también garanticen los deberes y derechos en el mundo mediático e informativo de sus ciudadanos.

Ante esto, es necesario efectuar la acción de pensar críticamente; es hacer primar el raciocinio y plantear la duda ante los discursos predominantes. Hacer preguntas puede matizar las apelaciones sensoriales que apuntan a oscurecer los hechos reales y pertinentes al contexto que como ciudadanos responsables deben ser atendidos.

Obviamente, lo anterior implica una mediación educativa, que juega un papel central en las configuraciones mentales y las construcciones de la vida que se van estableciendo y resignificando. A pensar se enseña y este elemento plantea un desafío para enfrentar la desinformación; además, tiene que ver con la autogestión que, entre otros aspectos, corresponde hacer como prosumidores ante la información con la que nos relacionamos.

Finalmente, desestimar el peso de la cultura política, caracterizada al menos en El Salvador por un desencanto de 20 años de gobiernos de ARENA y 10 años del FMLN, a través de campañas enfocadas a apelar a las emociones, sin planes serios de gobierno concretos, profundiza más la crisis de las instituciones y, además, afecta la salud integral de los salvadoreños, ya que utilizan y difunden información que no les provee datos verificados seriamente expuestos, fuentes validadas, sino decisiones con base en compadrazgos más allá de la pericia. Lo anterior produce – además de la incertidumbre –, alerta, preocupación, que los mismos salvadoreños han manifestado tener al consumir cadenas gubernamentales en Facebook, apela a una deslegitimación y hasta olvido en la cotidianidad de que cada salvadoreño

es sujeto del derecho a la información, especialmente en temáticas primordiales por las cuales se deben rendir cuentas. La razón para ello es que muchos planes de gobierno han sido más declaraciones de buenas intenciones que propuestas estructuradas para cambiar la realidad del país. Además, han sido difundidas en forma de promesas a la población, haciendo uso de plataformas digitales y análogas desde el mismo gobierno. Esto desvirtúa su rol, pues debería garantizar lo ofrecido y responsabilizarse de ello, especialmente en temas de interés para sus habitantes.

Todos los aspectos detallados anteriormente forman parte de la comunicación política del país; verlos de forma aislada o compartimentada solo conlleva a considerar el fenómeno de la desinformación sin analizar el propósito de las campañas de desinformación. Diversos analistas indican que estas últimas están siendo utilizadas para justificar el ascenso de regímenes populistas, en América Latina, entre ellos el de El Salvador. La necesidad de una mirada sistemática, como plantean Blumler y Gurevitch (1995), amplía el horizonte y permite encontrar patrones de utilización y de instrumentalización de las redes sociales, de los medios, de las audiencias y de la cultura política para producir polarización y discursos de odio.

## Referencias

- Agencia EFE. (2020, mayo 27). *Bukele toma hidroxycloroquina y pide a la OMS revisar su uso contra el COVID-19*. <https://www.efe.com/efe/america/politica/bukele-toma-hidroxycloroquina-y-pide-a-la-oms-revisar-su-uso-contra-el-covid-19/20000035-4256171>
- Agencia EFE. (2021, enero 14). *Bukele echó mano de la desinformación para manejar la pandemia, según un estudio*. <https://www.efe.com/efe/america/politica/bukele-echo-mano-de-la-desinformacion-para-manejar-pandemia-segun-un-estudio/20000035-4439684>
- Ávalos, J., Baires Quezada, R. y Romero, F. (2020, mayo 31). Nueve ejemplos de la desinformación presidencial. *Fáctum*. <https://www.revistafactum.com/desinformacion-bukele/>
- Avelar, B. (2020, septiembre 25). Bukele ataca a la prensa en cadena nacional al mismo tiempo que dice defenderla. *Fáctum*. <https://www.revistafactum.com/cadena-bukele-ataques-prensa/>
- Avelar, J. (2020, 9 abril). El Gobierno también puso en cuarentena el acceso a la información pública. *El Faro*. [https://elfaro.net/es/202004/el\\_salvador/24237/El-Gobierno-tambi%C3%A9n-puso-en-cuarentena-el-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm](https://elfaro.net/es/202004/el_salvador/24237/El-Gobierno-tambi%C3%A9n-puso-en-cuarentena-el-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm)
- Baires Quezada, R. (2019, enero 30). Las noticias falsas de la campaña presidencial. *Fáctum*. <https://www.revistafactum.com/noticias-falsas-campana/>
- Baires Quezada, R. (2019, febrero 2) [2019b]. Una bola de nieve llamada Lufthansa. *Fáctum*. <https://www.revistafactum.com/bola-de-nieve-lufthansa/>
- Baires Quezada, R. (2019, febrero 2) [2019b]. “Fake news sería decir ‘Carmen Aida Lazo le da apoyo a Nayib Bukele’”: editor de @labritany. *Fáctum*. <https://www.revistafactum.com/entrevista-editor-de-labritany/>
- Barraza Ibarra, J. (julio de 1999). Análisis de las elecciones del 7 de marzo de 1999. *Entorno*. (10), 10-29.
- Blumler, J. G. y Gurevitch, M. (1995). *The crisis of public communication [La crisis de la comunicación pública]* (1era. ed.). Routledge.

- Bukele, N. (2018, noviembre 6). *En la torre de control con ejecutivos de Munich Airport, dueños del aeropuerto de Munich, hub de Lufthansa (la aerolínea más importante de Alemania)*. [Tuit, enlace a la publicación]. Twitter: <https://twitter.com/nayibbukele/status/1059913654668271616?lang=en>
- Bukele, N. (2019, junio 3) [2019a]. *Se le ordena al Ministro de Gobernación @marioduran1, que remueva al director de @PROCIVILSV, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton. En su lugar, nombre con credenciales para ejercer ese puesto de la mejor manera*. [Tuit, enlace a la publicación]. Twitter: <https://twitter.com/nayibbukele/status/1135675634334797826>
- Bukele, N. (2019, junio 29) [2019b]. *Se le ordena al Director de @CentrosPenales, @OsirisLunaMeza, enviar a los capturados por el secuestro del bus y las violaciones a 2 mujeres el día de ayer, al Penal de Máxima Seguridad y colocarlos en aislamiento total, hasta que sean llevados a juicio*. [Tuit, enlace a la publicación]. Twitter: <https://twitter.com/nayibbukele/status/1145052505895768064?lang=es>
- Bukele, N. (2020, marzo 14). *Italia “dejará morir a los mayores de 80 años” porque su sistema de salud está colapsado y necesitan hacer espacio para los que tienen más probabilidades de vivir*. [Tuit, enlace a la publicación]. Twitter: <https://twitter.com/nayibbukele/status/1238938625208975361?lang=en>
- Carballo, W. y Marroquín, A. (2019). *Así consumimos medios en El Salvador antes de la COVID-19*. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. <https://uca.edu.sv/wp-content/uploads/2020/12/investigacion-uca-asi-consumiamos-medios-en-el-salvador-antes-de-la-covid-19.pdf>
- Carballo, W. y Marroquín, A. M. (2020). *Así dio vuelta el consumo mediático en El Salvador durante el COVID-2019*. Escuela de Comunicación Mónica Herrera y Maestría en Gestion Estratégica de la Comunicación (UCA).
- Cathala, H. p. (1986). *Le temps de la désinformation*. Stock.
- Cedillo García, D. R. (2019, enero 25). La red de manipulación digital en las elecciones presidenciales de El Salvador. *Milenio*. <https://www.milenio>.

com/internacional/latinoamerica/red-manipulacion-digital-elecciones-presidenciales-salvador

- Coombs, W. T. (2010). Parameters for Crisis Communication (p. 17-53). W. T. Coombs y S. J. Holladay (Ed.), *The Handbook of Crisis Communication*. Wiley-Blackwell.
- Cruz, J. M. (2000). Realidad y propaganda: el fracaso de la campaña de ARENA. *Estudios Centroamericanos (ECA)* (617), 315-320.
- Dada, H. (1994). El Salvador. Elecciones y democracia. *Nueva Sociedad* (132), 70-86. [https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2344\\_1.pdf](https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2344_1.pdf)
- Dias, P. (2014). From 'infoxication' to 'infosaturation': A theoretical overview of the cognitive and social effects of digital immersion. *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación* [en línea] (24), 1-11. Recuperado el 08 de junio de 2022, de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16832255004>
- Escobar, C. V. (2020, diciembre 9). Seis meses y tres tormentas después Bukele aún no ha construido las casas para la comunidad Nuevo Israel. *Gato Encerrado*. <https://gatoencerrado.news/2020/12/09/seis-meses-y-tres-tormentas-despues-bukele-aun-no-ha-construido-las-casas-para-la-comunidad-nuevo-israel/>
- Fransen, F. y Johansen, W. (2017). Crisis Management (II): Staged Approaches -Before, during and after crisis. F. Fransen, y W. Johansen (p. 69-87) (Eds.), *Organizational Crisis Communication*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc.
- García Dueñas, L. (2006). La trascendencia de la campaña del "miedo" en las elecciones de 2004 y la propaganda del "peligro" en México en 2006. *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 109, 375-387. doi:<https://doi.org/10.5377/realidad.v0i109.3443>
- Global Americans. (2021). *Medición del impacto de la información falsa, la desinformación y la propaganda en América Latina*. Recuperado el 7 de junio de 2022 de: [https://theglobalamericans.org/wp-content/uploads/2021/11/2021.11.03-Global-Americans\\_Reporte-Desinformacion.pdf](https://theglobalamericans.org/wp-content/uploads/2021/11/2021.11.03-Global-Americans_Reporte-Desinformacion.pdf)

- González Díaz, M. (2019, febrero 4). Toma de posesión de Nayib Bukele: quién es el joven empresario millennial que asume como presidente de El Salvador. *BBC Mundo*: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47112057>
- Internews . (2021). *Internews Theory of Change*. <https://internews.org/about/our-strategy/theory-change/>
- Kemp, S. (2022, febrero 16). Digital 2021: El Salvador. *DataReportal*. Recuperado el 7 de junio de 2022, de: <https://datareportal.com/reports/digital-2022-el-salvador>
- Labrador, G. (2020, marzo 11). El Salvador cierra fronteras y suspende clases por 21 días para prevenir contagios de coronavirus. *El Faro*. [https://elfaro.net/es/202003/el\\_salvador/24120/El-Salvador-cierra-fronteras-y-suspende-clases-por-21-d%C3%ADas-para-prevenir-contagios-de-coronavirus.htm](https://elfaro.net/es/202003/el_salvador/24120/El-Salvador-cierra-fronteras-y-suspende-clases-por-21-d%C3%ADas-para-prevenir-contagios-de-coronavirus.htm)
- Laínez, L. (2019, enero 30). Hay “legiones de cuentas falsas” para candidato de GANA. *La Prensa Gráfica*: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-legiones-de-cuentas-falsas-para-candidato-de-GANA-20190129-0405.html>
- Maldonado, C. S. (2019, mayo 11). *Los exabruptos en Twitter de Nayib Bukele, el presidente ‘millennial’*. *El País*. [https://elpais.com/internacional/2019/05/10/america/1557514884\\_727483.html](https://elpais.com/internacional/2019/05/10/america/1557514884_727483.html)
- Marcus, G. E. (2002). *The sentimental citizen: Emotion in democratic politics*. The Pennsylvania State University Press.
- Mejía Salazar, A. A. (2018). El anticomunismo como discurso deslegitimador utilizado por las élites mediáticas. *ECA Estudios Centroamericanos*, 73(754), 349-370. doi:<https://doi.org/10.51378/eca.v73i754.3173>
- Molina, M. D., Sundar, S. S., Le, T. y Lee, D. (2019). “Fake news” is not simply false information: A Concept explication and taxonomy of online content. *American Behavioral Scientist*, 1-33. doi:[tps://doi.org/10.1177/0002764219878224](https://doi.org/10.1177/0002764219878224)

- Observatorio de Comunicación Política. (2015). #ELECCIONESV: Análisis de la Comunicación Política en Redes Sociales durante La Campaña de Elecciones Presidenciales 2014 en El Salvador. *Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Siesión Cañas*. Recuperado el 20 de enero de 2016, de <http://www.uca.edu.sv/letras/wp-content/uploads/2016/02/informe-opc2014.pdf>
- Observatorio de la Comunicación de ARPAS. (2020, abril 14). *Las “Fake News” del Presidente Bukele*. <https://arpas.org.sv/2020/04/las-fake-news-del-presidente-bukele/>
- Oppman, p. (2020, mayo 21). ¿Salvador o autoritario? El presidente ‘millennial’ de El Salvador desafía a las cortes y al Congreso en la respuesta al coronavirus. *CNN en Español*. Recuperado el 1 de marzo de 2021 de: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/21/salvador-o-autoritario-el-presidente-millennial-de-el-salvador-desafia-a-las-cortes-y-al-congreso-en-la-respuesta-al-coronavirus/>
- Organización de Estados Americanos (OEA). (2007, diciembre 12). *Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión*. <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=719yIID=2>
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2020, diciembre 4). *COVID-19: Orientaciones para comunicar sobre la enfermedad por el coronavirus 2019. Guía para líderes*. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/53094>
- Palacios, C. (2020, septiembre 9). Las preocupaciones de la Nuevo Israel sobre el proyecto prometido por el presidente. *Focos El Salvador*: <https://focostv.com/las-preocupaciones-de-la-nuevo-israel-sobre-el-proyecto-prometido-por-el-presidente/>
- Pengelly, M. (2016, diciembre 10). Trump accuses CNN of ‘fake news’ over reported Celebrity Apprentice plans. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/10/trump-celebrity-apprentice-cnn-fake-news>
- Peraza, X. (2001, junio 6). La prensa, las encuestas y el presidente. *Proceso Informativo de la Universidad Centroamericana José*

Sieaón Cañas: <https://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc954.html#com>

- Peraza, X., Rivera, C. I. y Guzmán, N. (2006, marzo 31). La prensa escrita y la cobertura de la campaña electoral de 2006. *ECA. Estudios Centroamericanos*, 61(668-689), 261-285.
- Rauda Zablah , N. y Lemus, E. (2019, julio 11). Gobierno mintió: los capturados nunca fueron acusados del ataque al bus 202 en El Congo. *El Faro*. [https://elfaro.net/es/201907/el\\_salvador/23490/Gobierno-minti%C3%B3-los-capturados-nunca-fueron-acusados-del-ataque-al-bus-202-en-El-Congo.htm](https://elfaro.net/es/201907/el_salvador/23490/Gobierno-minti%C3%B3-los-capturados-nunca-fueron-acusados-del-ataque-al-bus-202-en-El-Congo.htm)
- Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. (abril-junio de 2007). Editorial: El periodismo y la política: ¿dos mundos aparte? A propósito de la campaña. *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, págs. 117-182.
- Revista Proceso. (2000, 15 junio). Las comunicaciones del señor presidente. *Proceso*. Recuperado el 31 de mayo de 2022 de: <https://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc906.html>
- Rivas, J. (2004). Medios, poder y elecciones. *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 667(59), págs. 451-454.
- Robles Rivera, F. (enero-marzo de 2021). Élités y estrategias de captura de medios en América Central. *Revista Mexicana de Sociología*, 83(1), 9-40.
- Salud con Lupa. (2020, diciembre 1). El Gobierno de El Salvador pone bajo secreto la información sobre la pandemia. *Salud con Lupa*. <https://saludconlupa.com/noticias/el-gobierno-de-el-salvador-pone-bajo-secreto-la-informacion-sobre-la-pandemia/>
- Sturges, D. L. (1994). Communicating through crisis: A strategy for organizational survival. *Management Communication Quarterly*, 3(7), 297-316.
- Tobar Serrano, J. (junio de 2020). Informe Preliminar sobre COVID-19 y Derechos Humanos en El Salvador. *Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos*. <https://www.pddh.>

gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/06/informe-preliminar-junio-2020.pdf

- Tucker, J. A., Guess, A., Barbera, p., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., . . . Nyhan, B. (2018). *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature*. *Social Science Research Network*. Elsevier. <https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2018/03/Social-Media-Political-Polarization-and-Political-Disinformation-Literature-Review.pdf>
- Tumber, H. y Waisbord, S. (2021). *The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism*. Routledge.
- Volkoff, V. (1986). *La désinformation, arme de guerre*. Julliard.
- Wardle, C. y Derakhshan, H. (2018). *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.. Recuperado el 22 de enero de 2020 de <https://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77>
- Weir, W. (2009). *History's Greatest Lies*. Fair Winds Press.



# VENEZUELA: TIERRA DE MENTIRAS, CENSURA Y VIRALIZACIONES EN INCERTIDUMBRE INFORMATIVA

LEÓN HERNÁNDEZ

6

## Resumen

*Venezuela tuvo casos de manipulación informativa desde sus inicios como república, durante los tiempos de la guerra independentista. En la actualidad, atraviesa el impacto antidemocrático de una desinformación que se alimenta de mentiras en el discurso público, medios estatales que se comportan como aparatos de propaganda, cuerpos legislativos y judiciales que establecen mordazas estructuradas y laboratorios de fake news que operan en redes.*

## 1. Introducción: antecedentes de la desinformación en Venezuela

La tentativa de controlar el debate público ha sido una constante en diversos períodos de la historia del país. La desinformación y uno de sus componentes, las llamadas *fake news*, no son fenómenos nuevos en Venezuela, aunque condiciones asociadas a las restricciones a la libertad de expresión, impuestas durante el proceso político iniciado por Hugo Chávez Frías (1954-2013) y continuado por Nicolás Maduro, suponen mayor grado de vulnerabilidad ciudadana al fenómeno de la desinformación, comparable con la de otras naciones de corte ideológico socialista, tales como Cuba y Nicaragua.

Desde el inicio de su historia como república, esta nación no estuvo exenta de episodios en los cuales centros de poder intentaron manipular la opinión pública, por medio de la propagación de mentiras en el discurso público, así como a través del control de medios imbuidos en pugnas ideológicas.

Los antecedentes históricos de la desinformación en Venezuela podrían remontarse al uso de censura y estrategias de difusión de propaganda durante la guerra independentista, a comienzos del S. XIX. Refiere María Soledad Hernández (2018) que, en el número de lanzamiento del primer periódico impreso en el país, la *Gazeta de Caracas*, puesto en circulación el 24 de octubre de 1808, se garantizaba que no se publicaría nada en la prensa sin la previa inspección de aquellos facultados por

el gobierno, quienes velarían porque no fuese agraviada la Santa Religión Católica, así como tampoco las buenas costumbres, ni la reputación de persona alguna.

Pero más allá de la imposición de censura en la Venezuela en guerra independentista, con la cual se restringían contenidos y por consecuencia se omitían temas y asuntos que podrían tener interés público, la desinformación también se producía con la alteración de contenidos por conveniencia ideológica. Se trataba dominar el discurso, pues quien controla las narrativas también podría hacerse del control social. Recordemos lo que al respecto han mencionado autores como Michael Foucault: “El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (2005 [1970] p. 15).

Los autores Beatriz Barrera Padilla y Jesús Navarro García (2010) investigaron la estrategia desestabilizadora en la Venezuela materializada en la propaganda y controversia de la acción contrainsurgente entre los años 1810-1821. Aludieron al espíritu agitador de personajes que intentaron forzar los mensajes a conveniencia de ciertos grupos y se percibe en sus descripciones que los contenidos falseados no estaban fuera de la ecuación. Mencionan al venezolano José Domingo Díaz, médico, redactor de la *Gazeta de Caracas* en los momentos realistas de la publicación.

Señalan Barrera y Navarro que, en 1813, Díaz se vio obligado a salir de Caracas y se radicó en Curazao, donde emprendió la redacción de panfletos y escritos agitadores contra el proceso republicano en Venezuela. Volvería al país; pero sale definitivamente de la nación en 1821. De 1822 a 1828 vive en Puerto Rico, donde logra autofinanciar sus productos impresos de agitación. En enero de 1828, a propósito de un posible auxilio naval a la causa realista, Díaz difundió hechos que no tuvieron lugar, falseando la realidad:

Díaz da por hecho el desembarco --en la tercera alocución que fecha el 25 de enero de 1828-- aunque no hubiera sido confirmado el hecho. Se arriesga a ofrecer la noticia aun siendo solo una suposición.... La realidad era otra bien distinta. La escuadra española no había podido auxiliar a los leales realistas pues no se habían podido encontrar ni comunicar, de hecho Laborde emprendía su regreso el primero de febrero de aquel 1828! (Barrera y Navarro, 2010, p. 126)

Ambos bandos, patriota y realista, entendieron bien que las estrategias de guerra en tiempos de revolución independentista debían incluir una valoración importante a lo impreso. “La prensa desempeñaría un papel de primer orden en las propuestas fundantes de las nuevas comunidades políticas, pues sería desde la esfera pública que se plantearía la construcción de la ciudadanía liberal como problema concreto”. (Ortega y Chaparro, 2012, p. 106) Las prácticas no excluyeron ciertas ficciones, a juicio que se desprende de algunos ejemplos.

También en aquellos tiempos de la Gran Colombia, que incluía a la Provincia de Venezuela entre los planes de integración de Simón Bolívar, el impresor del *Correo del Orinoco*, órgano difusor de las ideas republicanas, Andrés Roderick, denunció haber sido testigo de la manipulación de un contenido por parte del bando realista, al ser interpelado sobre su participación en la impresión de un texto durante la toma de Maracaibo. Esta urbe había sido recuperada temporalmente por los realistas, después de los eventos de la Batalla de Garabulla, el 13 de noviembre de 1822, combate que favoreció a las fuerzas de capitán español Francisco Tomás Morales.

Ante los republicanos, quienes habían retomado el puerto en la Batalla de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, Roderick explicó, en agosto de 1824, los motivos de su participación como impresor de un texto de corte realista. En un fragmento de su declaración, reproducida en la *Gaceta de Colombia*, deja entrever la manipulación de contenidos. Según Roderick, al imprimir el *Posta español*, que era redactado por Antonio Pariente, este le hizo al General Morales un borrador que suponía iba a ser una carta tomada de Garabulla. Señaló el impresor que papel que pasó por sus manos a la prensa era una invención, no una carta legítima:

Cuando llevé la gaceta a la prueba borraron varias palabras de dicha supuesta carta, y sustituyeron otras. Esta carta la conservé hasta el 17 de junio [de 1823] que entraron las tropas de la República en Maracaibo, y se quemaron los papeles de la imprenta. Juro y protesto que la tal carta es inventada de los españoles y porque es un hecho sabido entre todos los que estábamos en la imprenta que estaba casi en la oficina del despacho, y que no pasaba la más mínima cosa que no supiéramos. (Gaceta de Colombia, 29 de mayo de 1825, p. 4)

Roderick denunció que el objetivo de los realistas fue legitimar la reconquista militar, “dividir a los pueblos, desacreditar a los magistrados en representación, e introducir guerra civil”. (*Ibidem*).

En el S. XX venezolano, diversas dictaduras – como lo fueron las de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) – pusieron férreo coto a la prensa. Esto causó desinformación sobre presos políticos, exilios, torturas, entre otros temas vinculados con sus prácticas contra la disidencia.

En el pasado menos remoto, con una democracia bipartidista que gobernó al país entre 1958 y 1998, el país fue testigo de una industria de medios poderosa, con comunicación que era objeto de críticas sobre su calidad y rol social, entre estas las descritas por el autor Antonio Pasquali en su obra *Comunicación y Cultura de Masas* (1972). Este investigador acusaba a la industria, especialmente a la televisiva, de descuidar lo cultural e irrespetar el carácter bidireccional que debía tener el proceso comunicacional.

En la década de los 1980, con la llegada de la crisis económica que comenzaría a impulsar las devaluaciones, los medios no estuvieron libres de presiones y algunos temas eran silenciados, causando desinformación. También hubo mentiras y manipulación oficial en el tratamiento sobre sucesos que escandalizaron a la opinión pública.

Se recuerda el caso de la masacre de El Amparo, Estado Apure. En el incidente, ocurrido el 29 de octubre de 1988, efectivos militares asesinaron a 12 pescadores. Originalmente, versiones oficiales los presentaron como supuestos miembros del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), abatidos durante un presunto enfrentamiento. Esta falsedad en el discurso público de las autoridades fue desmontada gracias al testimonio de dos pescadores que lograron sobrevivir y que narraron detalles en instancia posterior al crimen (PROVEA, 2016).

Sin embargo, gracias a medios críticos e independientes, las situaciones eran denunciadas. La desinformación existente en ocultamiento de corruptelas se matizaba con una labor periodística que encontraba espacios para la denuncia en medios tradicionales, desde los cuales se develaban desaciertos de la dirigencia política.

Era prácticamente imposible pensar que un periodista podría ir detenido, o que podría ser agredido, y menos por un funcionario público o por un policía en el ejercicio de su profesión. Eso no. Era algo muy distante, no lo pensábamos, no lo sospechábamos, no creíamos que eso pudiera suceder

y es lo que estamos viendo hoy en día. En aquel momento, el periodismo era más de los periodistas, era más de los dueños de medios que estaban comprometidos con el ejercicio de la comunicación social. Los gobiernos de la época, mayoritariamente, como sabemos, gobiernos de AD y de COPEI, hacían lo suyo: Llamaban a los dueños de los medios a Miraflores para reunirse, exponerles, informarles, solicitarles la colaboración en uno u otro tema, pero aquello era transparente. Los periodistas discutíamos, denunciábamos y nos pronunciábamos frente a nuestros jefes en los medios de comunicación en el reclamo que considerábamos conveniente. No existía el silencio absoluto, las informaciones podrían, eventualmente, ser modificadas. Y por modificadas me refiero a parcialmente publicadas, a que algunos aspectos de la información fueran silenciados, producto de estos convenios que existían entre el Gobierno y algunos medios, o como producto de las presiones de funcionarios públicos, pero no había la posibilidad de callar por completo. No estaba planteado de esa manera. (Elsy Barroeta, citada por Hernández, 2020, p. 57)

Pero la confrontación ideológica que planteó Chávez, al llegar al poder en diciembre de 1998, imprimió a las estrategias de desinformación la imposición de censura y la pretensión de una hegemonía comunicacional.

La pretendió a través de manipulación tarifada, con la imposición de propaganda ideológica en todos los espacios de los medios del Estado y con una mordaza estructurada: cierres de televisoras, periódicos y estaciones de radio, confiscaciones de equipos de empresas mediáticas no alineadas, revocación arbitraria de concesiones (licencias de transmisión), establecimiento de nuevos marcos regulatorios por medio de un cuerpo legislativo afín a sus propósitos (Hernández y Cañizález, 2016) .

El propio Antonio Pasquali advirtió el descalabro de la esfera comunicacional en Venezuela, ocurrido en el actual contexto político. Esta advertencia titula su última obra con un nombre que refiere su visión sobre todo el devenir comunicacional en el proceso político que hoy día continúa en el país: *La Devastación Chavista* (2017).

Es así como el país vive en medio de una ‘fakecracia’, con un gobierno que legitima la propaganda ideológica y se vale de funcionarios alineados en un discurso sesgado de la realidad, en medio de una nación plena en mordazas para ciudadanos y periodistas críticos; pero, además, en un país plagado de mentiras y contenidos engañosos que circulan por las redes sociales. La más clara evidencia empírica de

la sentencia anterior es que más de 2.000 unidades de contenido falseado han sido detectadas por el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) en tres años de trabajo. En promedio, el OVFN detecta no menos de cuatro bulos al día en los medios interactivos.

Los bulos dejan al país desorientado. El entorno afecta la capacidad de comunicación y articulación social de un ciudadano de a pie que encuentra censura, trabas de acceso a internet – se estima que 40% de la población carece de acceso a la Red – un restringido y manipulado sistema de medios tradicionales, e incertidumbre informativa por incredulidad hacia el discurso institucional en materia económica, sanitaria, política y social.

Venezuela figura de última en las dos ediciones publicadas hasta el presente del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa. Este barómetro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mide las acciones institucionales en materia de garantías y protección a estos principios en 22 países del hemisferio americano (Hernández y Perozo, 2022). Las estrategias de difusión malintencionada de contenidos falseados encuentran en la censura una de sus mejores aliadas.

La desinformación en la Venezuela de hoy tiene varias aristas; pero aparte de la propagación de bulos, del silencio impuesto por censura, de la difusión de mentiras alineadas con la propaganda oficialista en declaraciones de voceros, de la falta de acceso a la información oficial, y de la omisión gubernamental sobre temas que son de interés público, ocurre además un fenómeno, de manera menos agravante, propio del *agenda cutting* (o cercenamiento de agenda).

Podríamos definir el *agenda cutting* como el proceso en el cual algunos temas que revisten interés reciben poca o ninguna cobertura por parte de los medios de comunicación, o no son presentados equitativamente a la audiencia (Colistra, R. 2006). En este proceso, puede publicarse el contenido como uno de poca prioridad, mantenerse fuera de la agenda o removerse de esta, debido a una intervención externa, o producto de presiones políticas o de relaciones públicas.

En efecto, en un entorno de alta polarización política como es el venezolano, ciertos temas incómodos para la oposición al régimen de Nicolás Maduro también han pasado por procesos de *agenda cutting*. Algunas denuncias por supuestas

irregularidades en el manejo de recursos por parte de dirigentes contrarios al gobierno han quedado por fuera de prioridades de investigación de medios o abordados con menor amplitud que otros, en parte por creencias y prejuicios de los propios periodistas sobre aquello que resulta más urgente para el país como un todo.

Como atenuante de esta situación, se debe indicar que, en el periodismo venezolano independiente –sin protecciones y con presiones de toda índole–, opera el dilema sobre cómo destinar sus precarios recursos humanos y a qué dedicarle mayor investigación y artículos más extensos en procura de la libertad y de la restitución de derechos democráticos, teniendo al frente altos costos de oportunidad. Toda organización, incluyendo las periodísticas, solo puede atender una cierta cantidad de tópicos a la vez.

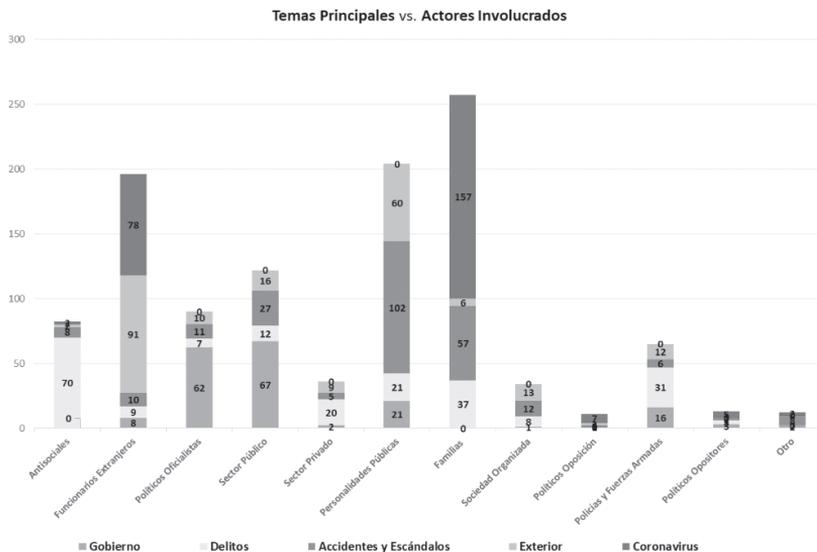
Pero, en suma, los ciudadanos padecen de desinformación desde varios ángulos, incluso del personal. Como se verá, emociones básicas como el miedo, sobre las cuales pululan rumores, las viralizaciones de comunicaciones ciudadanas erráticas también hacen mella de la información curada. Muchos terminan en burbujas, replicándose lo que quieren escuchar y rechazando a periodistas críticos e independientes cuando estos no difunden informaciones afines a sus deseos o las desmienten.

## 2. Los temas preferidos de los laboratorios de fake news en Venezuela

El OVFN, proyecto de la ONG Medianálisis, cumplió tres años de trabajo en julio de 2022. Ha recopilado una base de datos sobre los contenidos falseados que circulan en Venezuela, por medio del trabajo de detección, verificación y desmentido de unidades informativas. Esta labor la han llevado a cabo periodistas en ocho regiones del país: los estados Bolívar, Carabobo, Mérida, Táchira, Lara, Zulia, Nueva Esparta y el Distrito Capital.

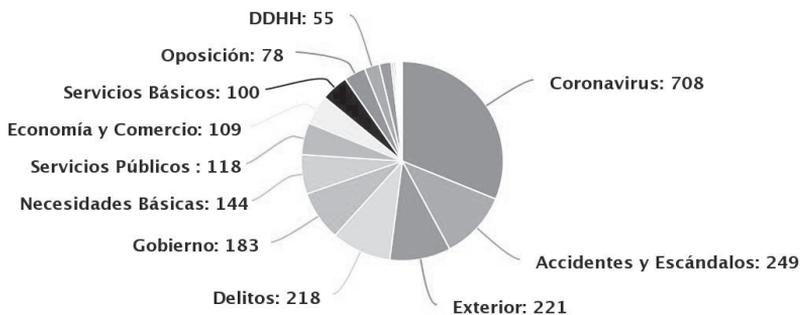
A partir de agosto de 2021, el OVFN ofreció a la ciudadanía una herramienta que permite visualizar el fenómeno a partir de datos relevantes: los temas, los actores involucrados, las redes primarias y secundarias, y por períodos determinados, así como con la facilidad para graficar de manera inmediata la composición de las

unidades detectadas. A los fines del análisis que se presenta a continuación, se pueden visualizar en un *dashboard* los temas y actores principales acerca de los cuales han circulado bulos en Venezuela detectados por el OVFN desde el inicio de sus actividades en julio de 2019.



Fuente: OVFN

### Distribución porcentual de Fakenews según Temas Principales



Highcharts.com

Fuente: OVFN

## 2.1. COVID 19: entre curas milagrosas y temor al contagio

Se han cargado 2.183 unidades informativas a la base de datos del OVFN hasta el 24 de julio de 2022. Según los datos, el tema más frecuentemente mencionado en los contenidos falseados en Venezuela es el relacionado con la COVID-19, con un 32,43% del total. Esta proporción se acentuó en los periodos de mayor incertidumbre con respecto a la pandemia.

Del total de 708 unidades vinculadas a la COVID-19, el tema más recurrente fue el de las curas milagrosas, con 98 unidades informativas. La precariedad del sistema asistencial, la necesidad de tranquilidad y respuestas ante un virus que planteaba retos a la comunidad científica, provocaron la viralización de esperanzas sobre el uso de hierbas y supuestos secretos en el tratamiento y prevención del virus. Las personas viralizaron las supuestas bondades del café, de ciertos tipos de infusiones e incluso de hábitos sobre estilo de vida, tales como el uso de secadores de cabello para supuestamente eliminar el virus presente en la garganta. Todas estas eran falsedades.

El temor al contagio también apareció como segundo tema más recurrente en materia de bulos asociados con la COVID-19. En 2020 se difundieron rumores, de manera errática, sobre el supuesto fallecimiento de personas en la calle y la supuesta incineración masiva de cadáveres debido al virus. La viralización de estas y de otras unidades informativas sobre el temor al contagio, que combinaron medias verdades con falsedades acerca del colapso de ciertas sedes de hospitalización, eran frecuentes en el primer año de la pandemia.

Además, esta desinformación tenía lugar en medio de reportes periodísticos que responsablemente advirtieron sobre la precariedad de la red asistencial del Estado para enfrentar la pandemia. Ante el restringido acceso de la prensa independiente a los comunicados oficiales ofrecidos por los pocos voceros autorizados, el país padeció de infodemia, definida por la OMS como “una cantidad excesiva de información – en algunos casos correcta, en otros no – que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan”. (OPS, 2020. p. 2)

La incredulidad ante los voceros oficiales se veía alimentada por hechos de censura sobre la enfermedad. En la lista de episodios, se incluye la detención del periodista Davirson Rojas quien, en marzo de 2020, fue aprehendido en Caracas

por informar sobre estadísticas de casos de COVID-19 a partir de cifras que sumó de comunicados locales sobre el virus. Permaneció retenido en una comisaría durante 12 días.

Al introducir la palabra ‘coronavirus’ en el motor de búsqueda del *dashboard* del OVFN, se obtienen las unidades de contenidos falseados sobre la enfermedad, que continuaron en 2021 y 2022. Los observadores detectaron, entre otros bulos, unos según los cuales la COVID-19 se propagó por medio de agua contaminada con veneno de serpiente (4 de mayo de 2022); la vacuna contra el SARS CoV-2 produciría ceguera (1 de abril de 2022); un supuesto informe del Reino Unido según el cual el riesgo de muerte se incrementó en las personas que habían sido vacunadas (18 de marzo de 2022), entre otros.

El tema sigue siendo objeto de bulos a escala internacional y nacional.

## 2.2. Accidentes y escándalos

Del total de unidades informativas, 249 bulos, 11,4%, tenía vinculación con lo que el OVFN ha llamado “accidentes y escándalos”. En este apartado han figurado las unidades informativas sobre falsas tragedias, siniestros asociados con eventos meteorológicos, falsas declaratorias de emergencia nacional por situaciones climatológicas y situaciones que ponen en juego la reputación de personajes de la vida pública.

Por otra parte, también en la categoría temática de “accidentes y escándalos”. Estas reflejan unidades de contenido falseado sobre supuestos episodios de destrucción de infraestructura pública, tales como incendios en dependencias oficiales, que tuvieron viralización en medio de siniestros que sí tenían lugar en la realidad, tales como el de una sede capitalina del Consejo Nacional Electoral (CNE), ocurrido en marzo de 2020.

Los bulos se han caracterizado por descontextualizar, en espacio y tiempo, siniestros naturales – tales como inundaciones, pérdidas humanas y daños materiales por catástrofes –, escraches (actos de repudio en lugares públicos) a celebridades venezolanas en el exterior, entre otros.

En esta categoría, los laboratorios de desinformación suelen tomar elementos audiovisuales reales para introducir falsedades. Se sirven de videos y fotos para descontextualizadas y así generar una lectura que responda a una traslocación del incidente, o a un reencuadre temporal de la realidad, por la supuesta novedad en la incidencia en otro momento determinado del acontecer público.

Así se aprecia en Venezuela, en bulos sobre escándalos incluidos en esta categoría del OVFN. Por citar un caso, el cantautor venezolano Servando Primera fue objeto de un escrache en EE. UU. en agosto de 2017. El 30 de mayo de 2022, circuló una unidad informativa por las redes sociales según la cual aquel hecho había tenido lugar recientemente. Se valían de las imágenes registradas casi cinco años antes.

En este particular, además referente a situaciones que despiertan no solo emociones básicas de miedo y repudio, también se acumulan algunas vinculadas con el amarillismo, tales como el de una bebé a la cual se le habría amputado una oreja al momento del nacimiento. Se atribuía este hecho a una sala de operaciones en Venezuela, cuando en realidad había tenido lugar en México en junio de 2022.

### 2.3. **Ámbito exterior**

Las dinámicas desinformativas también trascienden fronteras y penetran ecosistemas de redes de países remotos a su supuesto origen, por el interés y viralización dados en momentos de crispación global sobre un determinado tema, tales como las elecciones presidenciales en EE. UU. y Colombia, así como la invasión de Rusia a Ucrania y las protestas de ciudadanos en Cuba, entre otros. Se viralizaron en el país por ser el Estado venezolano uno inmerso en intereses políticos, económicos e ideológicos vinculados con estas naciones.

De allí que el tercer rubro temático importante, con 10,1%, se vincule a situaciones de carácter mundial. Por su cercanía con Colombia, a Venezuela llegaron los contenidos falseados tendentes a radicalizar la posición de Gustavo Petro en materia socioeconómica. Entre estos, el 8 de julio de 2022, el OVFN desmintió uno que afirmaba que el recién electo mandatario neogranadino ordenaría a las personas a compartir sus viviendas en caso de ser de más de 65 metros cuadrados.

El 14 de julio de 2021 circuló una imagen de Raúl Castro llegando a Venezuela, con un texto que decía que el dirigente había llegado a nuestro país huyendo de las protestas en la isla. Las imágenes eran reales; pero los hechos correspondían a una visita que había realizado el dictador a Costa Rica en 2015. Las imágenes estaban maliciosamente dispuestas para aumentar la crispación del descontento sobre la cercanía entre los regímenes de Venezuela y Cuba, situación real que no necesitaría manipulaciones como esta para causar controversia.



Fuente: OVFN

Lo concerniente a los cambios en la política externa de EE. UU., luego del ascenso de Joe Biden a la Casa Blanca, también ha sido caldo de cultivo para desinformación, en ocasiones incidental (*misinformation*) por vaguedades en la narrativa de los voceros oficiales y traspies de acreditados periodistas venezolanos, en otras tantas intencional (*disinformation*) por quienes apuntan a radicalizar posturas políticas de desagrado ante el ablandamiento de sanciones.

Ejemplo de lo primero fue la unidad informativa que circuló el 24 de marzo de 2022, sobre la supuesta autorización que habría dado EE. UU. para que la empresa Chevron operara en Venezuela, una noticia originalmente difundida por el periodista venezolano Nelson Bocaranda. Después de difundirse su tuit por redes, el comunicador apeló a su derecho a la rectificación y desmintió la información, refiriéndose a sendos comunicados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (Office of Foreign Assets Control, OFAC), así como de la propia Chevron.

Venezuela es un país también de emigrantes. Fue común la proliferación de bulos sobre el estado migratorio de los venezolanos en otras latitudes, especialmente en aquellas con procesos electorarios y la presencia de un candidato con tendencias socialistas, como en el caso de Chile. Ejemplo de esto es que el 11 de julio de 2022 circuló un bulo, que fue desmentido por el OVFN, según el cual el gobierno de Chile habría otorgado cédulas a los venezolanos en la nación austral, para que ejercieran el voto.

## 2.4. Delitos

La tasa de criminalidad en Venezuela se ha mantenido elevada en los años del proceso político iniciado por Chávez y continuado por Nicolás Maduro. La tasa actual de homicidios y, más allá de la realidad sobre los bulos, la opacidad del gobierno en la materia generan incertidumbre informativa al respecto: no se publicaron más cifras ni balances sobre los índices de violencia criminal en el país desde diciembre de 2013.

Los datos de aquel año arrojaban 24.763 muertes violentas y una tasa de 79 fallecidos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia.

Mensajes sobre falsas revelaciones de testimonios inventados han proliferado durante tres años, haciendo alusión a modalidades de robo, secuestros de niños y adolescentes, principalmente, también a la comisión de delitos asociados con actos de extorsión por parte de reclusos en las cárceles del país. A pesar de ocurrir en el país, estos hechos no han sido denunciados ni reportados por voceros policiales en cantidad ni *modus operandi* que señalan diversos contenidos falseados detectados.

Ejemplo de esto, es un bulo detectado al respecto el 9 de marzo de 2022.

#Fake

Funcionarios de @poliirbarren desmienten. Aunque tienen conocimiento de la circulación del mensaje viral no han recibido denuncias por robo de niños en el sector.

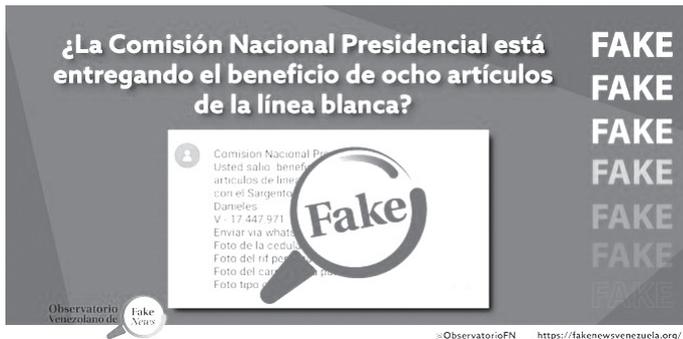


Fuente: OVFN

Apréciase el estilo de supuesto testimonio personal. Así, el OVFN ha detectado audios que son puestos a rodar con la expresión en primera persona de “yo vi”, apelando al contagio sobre la base de uno de los temores más comunes las personas: el daño a un infante, a un hijo. Se viralizan, debido a que el temor produce mucha alarma. En este particular, el trabajo de desmentido del OVFN ha incluido el contraste no solo con la fuente oficial, sino también con voceros de diversas comunidades mencionadas en los contenidos.

En los 218 bulos sobre delitos detectados por los observadores del OVFN (10% de la cifra global de contenidos falseados consolidados para el 24 de julio de 2022) se incluyeron no solo los que versaban sobre supuestas amenazas ficticias contra la población, sino también aquellos que, disfrazados de supuestas oportunidades, pretendían estafar a usuarios de las redes sociales a través de la estrategia de *phishing*, término empleado para referirse a tácticas para extraer datos personales de personas, mediante usurpación de usuarios y uso de falsas expectativas.

Reiterativamente, ha circulado un bulo con alusión a supuestas dádivas del gobierno, que exhorta a enviar los datos personales por WhatsApp.



Fuente: OVFN

En Venezuela, han circulado reiterativamente supuestas oportunidades de premios a ser presuntamente entregados por casas comerciales de vehículos, licores, cadenas de comida rápida, en ocasión de su supuesto aniversario. Empresas han alertado sobre la usurpación de sus logos y el OVFN ha recirculado los desmentidos correspondientes en numerosas ocasiones.

## 2.5. Políticas públicas y guerras sucias

Las estrategias de desinformación, como arma política, también tienen presencia en las redes sociales en Venezuela. Aparecen en determinados momentos de la vida social, especialmente acompañadas de noticias reales, tales como inicios de procesos escolares, fechas próximas a reconversiones monetarias y a aumentos salariales, cercanía con procesos comiciales, incidentes de apagones o interrupciones en servicios públicos, entre otras.

Los siguientes temas de contenidos falseados también figuran como principales: gobierno (183 para 8,83%); necesidades básicas, (144 es decir 6,5%); servicios públicos, (118 para 5,4%); oposición, (78 o 3,5%) y derechos humanos (55 equivalentes al 2,5%).

A pesar de que la cifra decae en cuanto a la masa general de bulos, son estos los que tienen un impacto mayor en la opinión pública en Venezuela. También

son los que más efectos nocivos tienen en el tejido comunicacional destinado a la articulación de decisiones colectivas.

De manera cíclica, circulan unidades informativas en redes sociales sobre una supuesta conspiración para poner final al gobierno de Nicolás Maduro. Adicionalmente, han corrido bulos sobre la muerte de miembros del gabinete presidencial y de altas figuras del oficialismo que ocupan otras instancias del poder público. El 13 de julio de 2022 circuló una *fake news* que aseguraba el deceso del Fiscal General de la República Tarek William Saab.



Fuente: OVFN

Frecuentemente, ante los problemas y fallas reales en servicios de agua y electricidad, ha sido frecuente la emisión de falsos comunicados sobre interrupciones prolongadas del servicio para diversas entidades del país. Esto ha causado estupor y malestar en la población.

La red de suministro eléctrico entró en crisis en Venezuela, sin que haya claridad sobre el estado real de su infraestructura, ni acceso de la prensa independiente a ninguna agencia encargada del sector energético. El deterioro provocó un apagón general que afectó 23 estados del país en marzo de 2019. Teorías de conspiración sobre el papel de injerencia externa, diversas interpretaciones oficiales y versiones contradictorias han hecho estragos en la credibilidad del gobierno en torno a las causas de los apagones en el país. El escenario se ha prestado para bulos sobre estos servicios.

También hay bulos que contemplan otros tipos de servicios que debería prestar el Estado, entre estos, el de identificación y extranjeros, los vinculados a entidades dependientes del Estado, tales como zoológicos, parques nacionales,

entre otros. El deterioro de estos servicios e instancias también ha sido objeto de exacerbaciones y tergiversaciones en redes sociales y servicios de mensajería.

Las elecciones para alcaldes y gobernadores de diciembre de 2021 fueron el marco para suplantación de empresas encuestadoras, con gráficos que imitaban sus logotipos a fin de hacer creer supuestas tendencias a favor de determinados candidatos. Esto buscaba manipular las percepciones de los electores. Del mismo modo, circularon bulos que anunciaban renuncias de candidatos a gobernador y supuestos cambios de bando político, que eran combinados con otros que sí se producían, generando confusión en los electores.



**Observatorio Venezolano de Fake News** @ObservatorioFN · 14 nov. ...

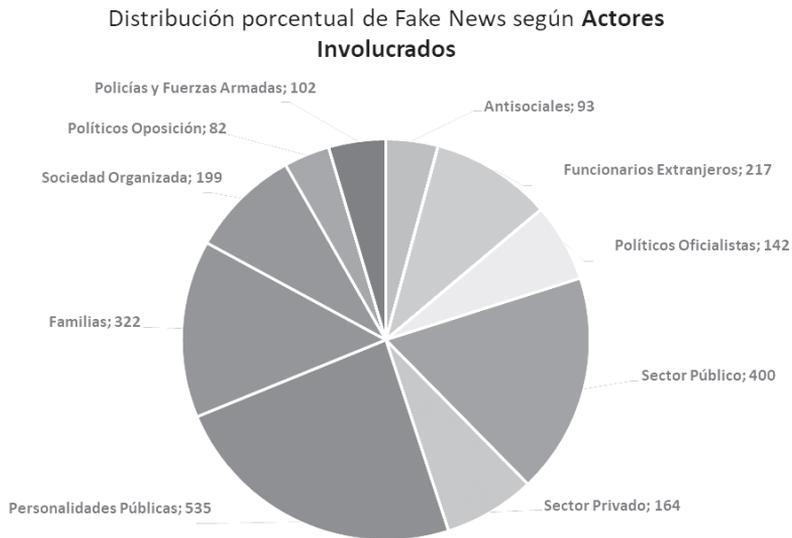
#Fake | El candidato de la Alianza Democrática a la alcaldía del Municipio Mariño de #NuevaEsparta no fue captado usando una franela del #PSUV. 📷

👉 Es una imagen manipulada digitalmente. En la fotografía original la franela de José Antonio González es verde.



### 3. Actores sociales más frecuentemente mencionados en los bulos que circulan en Venezuela

En el recuadro a continuación, apreciaremos la proporción en la que sectores importantes de la sociedad se vuelven el tema de interés en las *fake news*.



Fuente: OVFN

Personalidades públicas, ya sean locales o extranjeras, son principalmente asociados con los bulos que circulan en Venezuela. Eso incluye artistas, expertos en diversas áreas del saber, así como ciudadanos no vinculados con el poder: migrantes, venezolanos en situaciones diversas, etc.

Se viralizan contenidos con el propósito de generar falsas expectativas en el área de entretenimiento. Esta *fake news* circuló el 11 de junio de 2022 a propósito de las giras de artistas que incluyeron a Venezuela en su itinerario.



Fuente: OVFN

Según cifras del OVFN, 24,49% de las unidades informativas detectadas, casi una de cada cuatro, correspondían a personalidades públicas. Así se detectaron, en repetidas oportunidades, supuestos decesos de figuras como los cantantes venezolanos Chyno Miranda, Ricardo Montaner, Oscar D' León y José Luis Rodríguez. Desde décadas anteriores a las redes sociales ha habido estrategias publicitarias que han incluido hacer circular este tipo de rumores.

El sector público, así denominado en la base de datos como actor, acumula el segundo grupo importante en las detecciones realizadas en poco más de tres años de trabajo del OVFN. Allí se unen todas las unidades informativas vinculadas con instancias gubernamentales como un todo: instituciones del Estado, ministerios, órganos adscritos al Poder Ejecutivo, servicios de transporte, agua, electricidad, combustible, gas, entre otros. Se acumularon 400 bulos con este sector, como actor principal, 18,3% del total detectado.

Otro actor que es mencionado directa o indirectamente en los contenidos de los bulos, posiblemente generando mayor viralización por tocar los intereses cercanos de los receptores, el denominado como “familia” en la categorización empleada por el OVFN. Allí es agrupado todo lo ingresado en la base de datos en referencia a la vida e intereses de los hogares. Casi 15 % de los bulos, 322 unidades, versaban sobre familias agobiadas, afectadas o en procesos diversos irreales, señalados en los contenidos falseados, como este que circuló el 12 de junio de 2022.

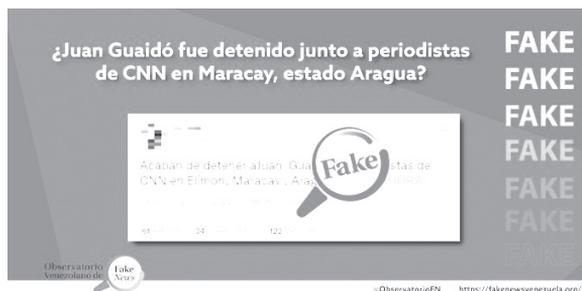


Fuente: OVFN

Siguen la sociedad organizada (vecinos, ONG, sindicatos, etc.) con 199 unidades informativas (9,11%), el sector privado (empresas, clínicas, firmas internacionales, etc.) con 164 bulos (7.5%). Aunque en menor porcentaje, las unidades de contenidos falseados sobre bulos de políticos del oficialismo y de oposición generan grandes niveles de viralización, dada la opacidad oficial. Nicolás Maduro y Juan Guaidó son los principales nombres que aparecen involucrados en estas unidades del 26 de abril y del 30 de mayo de 2022, respectivamente.



Fuente: OVFN



Fuente: OVFN

## Conclusiones

En Venezuela, se vive un complejo fenómeno de desinformación que genera perturbadores efectos en la conformación de opinión pública. El resultado de los contenidos falseados, en medio de censura, polarización política y opacidad de las fuentes oficiales, vuelve a los ciudadanos vulnerables.

Tras décadas de manipulación ideológica y férreo control sobre la emisión y recepción de mensajes, el venezolano deja de ser un ciudadano libre, pues sin libertad de expresión y sin cumplimiento a su derecho a la información, sucumbe a versiones, leyendas y figuras míticas con las cuales intenta explicar, interpretar y sobrevivir a su crisis política, social y económica.

La vulnerabilidad es para todos. Se creería que pudiera estar mejor informada una minoría que goza de mayor capacidad de ingresos para sortear la falta de acceso público a internet – servicio cada vez más costoso en el país – y de una mayor resistencia a la máquina de propaganda en los medios estatales – empleada como parte de la artillería ideológica del gobierno –; pero no es así.

El trabajo periodístico de calidad que ha intentado informar al ciudadano sobre aquellos aspectos, gastos, estados financieros y de la infraestructura pública, en el cual solo el Ejecutivo tiene acceso posicional, se basa en proyecciones y datos de terceros implicados. A excepción de unos pocos privilegiados que se resguardan los datos por orden política, casi el 100% de la ciudadanía queda a ciegas, ante las trabas impuestas para garantizar continuidad en el poder, con comunicadores que no pueden ver ni constatar las condiciones reales de los asuntos públicos, tampoco preguntar libremente en ruedas de prensa a las cuales acceden solo medios aliados en la construcción de una hegemonía comunicacional.

En el contexto venezolano, lejos quedaron las cuentas claras sobre el destino de recursos y el cumplimiento efectivo de los presupuestos. No hablemos del natural decaimiento en las denuncias de corrupción. Los ilícitos que son juzgados en los tribunales no trascienden a la prensa, ni en el grado y ni en la frecuencia en los cuales eventualmente se producen, si es que realmente se llevan a juicio, en un sistema con poderes públicos alineados, no autónomos.

El señalamiento de elaborar *fake news* se cuela en el discurso de voceros e instituciones, que acusan al periodismo independiente e incluso cuestionan la legitimidad de las opiniones de la ciudadanía, expresado en la reciente demonización de las redes sociales. Ha habido un incremento en la intención de regularlas, de reformar la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela ¿Se necesitan nuevas regulaciones? Se duda, a la luz del ya amplio marco legal que sirve camisa de fuerza regulatoria y pormenorizamos a continuación:

- Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (promulgada en 2004 y reformada en 2010 para incluir la internet);
- Ley Orgánica de Telecomunicaciones (reformada en 2010);
- Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, reformada en 2009 y 2015);
- Código Penal (reformado en 2005);
- Ley Orgánica de Contraloría Social (2010)
- La Ley Constitucional contra el Odio o por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017)

La desinformación no solo compete a los factores de poder. También al ciudadano que viraliza y crea posverdades en contra de sus propios intereses, y para quien el reto es formarse en el desarrollo de competencias de refutación y verificación, pues ello mejoraría su consumo informativo en las redes sociales.

El reto también es para los periodistas venezolanos. Deben reinventarse y aprender a sortear las restricciones en un sistema nada transparente en varios frentes; deben encontrar vías para la verificación y la investigación.

A partir de 2019, emprendimientos como el OVFN, Cazadores de Fake News, Es Paja, entre otras iniciativas locales, han develado unidades de información, marcando un precedente importante en el análisis y desmentido de bulos. Sin embargo, el camino contra la desinformación requiere un mayor impulso, desde la formación ciudadana en varios niveles de la educación, así como la mejora en la cultura comunicacional.

Los ciudadanos obtienen información por las redes sociales. Así como en el pasado se pensó que una aguja hipodérmica salía de la TV para insuflarles ideología que los dominara, las teorías se fueron derrumbando al considerarse otras nociones sobre los usos de los medios. Hoy día el asunto de fondo es cómo se usan las redes sociales, cómo se filtran los mensajes, la postura activa que debe tener el sujeto y prosumidor a la hora de elegir qué compartir, en qué dudar y cómo ser menos vulnerable a los procesos de desinformación.

Por ahora, la desinformación sigue siendo un arma de manipulación en Venezuela, una que se alía con la censura y la opacidad, la hegemonía de propaganda oficialista – por el lado de los medios adscritos al Estado –, y el *agenda cutting*, presente en algunos medios que son más críticos con unos que con otros dirigentes de la vida política del país. Es un panorama complejo, pero de mucho por hacer para quienes defienden los derechos comunicacionales, así como para los profesionales de la información: los periodistas.

## Referencias

- Barrera B. y Navarro, J. (2010). La estrategia desestabilizadora en Venezuela: propaganda y controversia en la acción contrainsurgente. Del constitucionalismo gaditano a la consolidación republicana, 1810-1828. *Memorias. Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano*. (13) 110-172. <https://www.redalyc.org/pdf/855/85517354005.pdf>.
- Gaceta de Colombia (1825, mayo 29).
- Colistra, Rita. (2006). Agenda Cutting: Theoretical Developments in the Agenda-building and Agenda-setting Processes. In *Proceedings of Communication in the Millennium: A Dialogue between Communication Scholars*. [https://www.researchgate.net/publication/307599521\\_Agenda\\_Cutting\\_Theoretical\\_Developments\\_in\\_the\\_Agenda-building\\_and\\_Agenda-setting\\_Processes](https://www.researchgate.net/publication/307599521_Agenda_Cutting_Theoretical_Developments_in_the_Agenda-building_and_Agenda-setting_Processes)
- Foucault, M. (2005) *El orden del discurso*. Fabula Tousquets Editores. (Obra original publicada en 1970).
- Hernández, M. (2018). *La prensa y la censura en el período gomecista*. Universidad Católica Andrés Bello. <https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/20247/LA%20PRENSA%20Y%20LA%20CENSURA%20EN%20EL%20PER%20C3%8DODO%20GOMECISTA%20%28%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández, L. y Cañizález, A. (2016) *La pantalla censurada: casos RCTV y Globovisión*. AB Ediciones.
- Hernández, L. (2020). *Hablan los periodistas*. AB Ediciones.
- Hernández, L. y Perozo, A. (2022). Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, ediciones 2020-2021 y 2021-2022. AB Ediciones.
- Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS-Venezuela). (2020, marzo 24). *Alerta IPYSve: Periodista Darvinson Rojas fue excarcelado luego de 12 días de detención*. <https://ipysvenezuela.org/alerta>

/periodista-darvinson-rojas-fue-excarcelado-luego-de-12-dias-de-detencion/

- Ortega, F. y Chaparro, A. (2012). *Disfraz y pluma de todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX*. Universidad Nacional de Colombia.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2020). *Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19* [https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52053/Factsheet-Infodemic\\_spa.pdf?sequence=16](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52053/Factsheet-Infodemic_spa.pdf?sequence=16)
- Pasquali, A. (1972). *Comunicación y Cultura de Masas*. Editorial Monte Ávila. Caracas.
- Pasquali, A. (2017). *La devastación chavista*. AB Ediciones. Caracas.
- PROVEA, (2016). *Masacre de El Amparo (1988)*. <https://provea.org/casos/masacre-de-el-amparo-1988/> Consulta realizada el 18 de julio de 2022.



## LOS AUTORES

FAKE NEWS, PODER POLÍTICO Y DESINFORMACIÓN  
EN TIEMPOS DE COVID-19



### MÉXICO



#### Salvador De-León-Vázquez

De origen mexicano, De-León-Vázquez actualmente radica en la ciudad de Aguascalientes, México. Es doctor en Estudios Científico-Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Se desempeña como profesor-investigador titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, expresidente del Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC, 2017-2019) y vicecoordinador del Grupo de Investigación “Estudios de Periodismo”. Es editor asociado de la revista *Brazilian Journalism Research* (Brasil) y forma parte de los comités científicos de las revistas *Sur Le Journalisme* (Francia), *Balajú Revista de Cultura y Comunicación* (México) y *Revista Mexicana de Comunicación* (México). Perfil de la ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7859-0480>.  
Twitter: @Saveteur.

### BRASIL



#### Ulisses Matheus Braga de Freitas Melo

Ulisses Matheus Braga de Freitas Melo es candidato a magíster y doctor en el Programa de Postgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE). Su línea de investigación es el estudio de la estructura de las *fake news* y sus efectos en la opinión pública, así como la aplicación y observación del discurso populista en las narrativas políticas y mediáticas. Participa en el Centro de Investigación sobre Comportamiento Político y Opinión Pública vinculado al Departamento de Ciencia Política de la UFPE. E-mail: [ulissulisses.matheus@ufpe.br](mailto:ulissulisses.matheus@ufpe.br)



### Bruno Rafael Gueiros Barbosa

Es Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE, Brasil), estudiante de doctorado en el Programa de Postgrado en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Católica de Pernambuco (Unicap, Brasil) y Magíster en Industrias Creativas por el Programa de Postgrado (Unicap, Brasil). Su línea de investigación es Procesos de Organización Lingüística e Identidad Social. Actualmente dedica sus estudios al análisis crítico del discurso y al análisis político del discurso. Ha trabajado y colaborado con artículos en medios como TV Globo, *Jornal do Commercio* y *Diario de Pernambuco*, y presta asesoría en comunicación y marketing para empresas locales. E-mail: brunogueiros@gmail.com



### Martin Erbes

Martin Erbes obtuvo su Maestría en Comunicación Digital Interactiva por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina); también es Licenciado en Estudios de Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina). Además de ejercer como periodista y profesor, es becario Fulbright. Su experiencia abarca la radiodifusión, las redes sociales y la comunicación corporativa. E-mail: maarterbes@gmail.com



### Juliano Domingues

Profesor y Coordinador del Programa de Posgrado en Comunicación de la Unicap; es Licenciado en Comunicación Social, Mención Periodismo (Unicap) y en Ciencias Sociales (UFPE), Doctor y Magíster en Ciencias Políticas (UFPE); tiene un posdoctorado en Comunicación por la Universidad Federal de Bahía, UFBA. Fue profesor invitado Fulbright en la Universidad de Tulane, EE. UU., académico visitante en el Instituto Ray C. Bliss de Política Aplicada (Universidad de Akron, Ohio, EE. UU.) con beca del Departamento de Estado de EE. UU. y estudió en la Escuela de Gerencia Anderson (UCLA), con beca del programa Santander Universidades. Es coordinador de un grupo temático internacional para

la Lusocom y subdirector científico de la ABEJ. Para conocer sus publicaciones, visite [www.julianodomingues.org](http://www.julianodomingues.org)

## ARGENTINA



### Adriana Amado

Es divulgadora de temas de comunicación pública y periodismo. Tiene un Doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y es Licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es profesora en universidades de Iberoamérica. Se desempeña como investigadora en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Desde 2012 forma parte del equipo de investigación de la red mundial de estudios de periodismo *Worlds of Journalism*. Como activista cívica, dirige el Centro para la Información Ciudadana (Infocidadana) y es parte de la dirección de Poder Ciudadano. Tiene una novela inédita



### Nicolás Rotelli

Es Doctorando en Ciencias Sociales (FLACSO), Magíster en Gestión Política de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y Licenciado en Comunicación Social por Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Rotelli es docente e investigador en comunicación política y comunicación institucional en niveles de pregrado y posgrado en la UADE y la UBA. Trabajó como coordinador de áreas de comunicación institucional en organismos públicos y del tercer sector de Argentina. Actualmente es coordinador del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Projectuales de la UADE. También ejerce como directivo de Infocidadana.

## NICARAGUA



### Lourdes Arróliga

Comunicadora social y periodista. Reportera de *Confidencial*, medio de investigación y análisis político y económico. Dirigió el área de Comunicación e Incidencia del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), entre los mejores centros de pensamiento del mundo según el Global Go To Think Tank Index (GGTTI, Universidad de Pensilvania). Fue profesora en la Carrera de Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA). Es autora de versiones populares sobre políticas públicas inclusivas y participación ciudadana. Por cuatro años, fue la Especialista de Medios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta su cierre forzado. Es Magíster en Comunicación y Periodismo (UCA) con Especialización en Gerencia y Liderazgo Estratégico. Actualmente exiliada por la persecución política del régimen que gobierna en Nicaragua.

## EL SALVADOR



### Claudia Rivera Andrade

Tiene 25 años de experiencia en la enseñanza de la investigación cualitativa aplicada. Cuenta con una Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), una maestría en Comunicación en la Universidad de Illinois en Chicago y una Licenciatura en Comunicación y Periodismo por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Fue coordinadora del proyecto Observatorio de Comunicación Política, consultora regional en mediación pedagógica en entornos virtuales de aprendizaje; localmente, en desinformación, campañas de comunicación política y narrativas antidemocráticas. Sus áreas de especialización incluyen el análisis de argumentos, metáforas y narrativas. Recientemente, se interesa por las investigaciones multimétodo a través del análisis de tuits y sus retos para las ciencias sociales.



### Karla Patricia Ramos Amaya

Es Directora de la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la Facultad de Postgrados de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Tiene 15 años de experiencia en la docencia y desarrollo de programas educativos en línea con organismos latinoamericanos. Cuenta con una especialización en Educación y Nuevas Tecnologías por la FLACSO, Argentina, una Maestría en Educación con Mención en Informática Educativa en la Universidad de Chile y una Licenciatura en Comunicaciones y Periodismo por la UCA en El Salvador. Investiga temas de alfabetización mediática e informacional, ciberseguridad y desinformación en la región centroamericana.

## VENEZUELA



### León Hernández

Es Licenciado en Comunicación Social, Magíster en Comunicación Organizacional, Doctorando en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Docente-Investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Comunicación de la UCAB, donde lleva la línea de comunicación para la democracia. Es socio de la organización Medianálisis, fundador y coordinador del OVFN, miembro de los consejos editoriales de las revistas *Comunicación* y *Temas de Comunicación*. Es coordinador del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la SIP y miembro del Next Generation Leadership Program, del Instituto McCain de la Universidad de Arizona. Sus cátedras actuales son Deontología Periodística y Producción de Contenidos para Medios en la Escuela de Comunicación Social de la UCAB.



Este ejemplar  
se terminó de editar en  
Caracas en agosto del año 2022.  
Para su diseño se utilizó la tipografía  
Adobe Garamon Pro a 11 ptos.  
Ha sido impreso sobre papel Saima White.  
Se realizaron 500 ejemplares,  
encuadrados en los talleres de  
GRÁFICAS LAUKI, C. A.

